

Señores,

JUZGADO DIECISEIS (16) CIVIL MUNICIPAL DE ORALIDAD DE CALI

j16cmcali@cendoj.ramajudicial.gov.co

E. S. D.

REFERENCIA: VERBAL
RADICADO: 760014003016-2024-00533-00
DEMANDANTE: DIANA VANESSA ANGULO FRANCO Y OTROS
DEMANDADOS: CARLOS ANDRES VANEGAS RIVEROS Y OTROS
LLAMADO EN SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.
GARANTÍA:

ASUNTO: CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA Y LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

GUSTAVO ALBERTO HERRERA ÁVILA, mayor de edad, domiciliado y residente en Cali, identificado con la cédula de Ciudadanía No. 19.395.114 de Bogotá, abogado en ejercicio y portador de la Tarjeta Profesional No. 39.116 del Consejo Superior de la Judicatura, con correo para notificaciones judiciales notificaciones@gha.com.co actuando en calidad de apoderado general de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.**, tal y como se acredita el certificado de existencia y representación legal que anexo a la presente contestación, de manera respetuosa y encontrándome dentro del término legal, presento **CONTESTACIÓN A LA DEMANDA** formulada por la señora DIANA VANESSA ANGULO FRANCO Y OTROS, así mismo presento **CONTESTACIÓN A LLAMAMIENTO EN GARANTÍA** promovido por los demandados EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI y el señor CARLOS ANDRES VANEGAS RIVEROS en contra de mi prohijada, anunciando desde ahora que me opongo a las pretensiones de la demanda y del llamamiento en garantía, de acuerdo con los fundamentos fácticos y jurídicos que se esgrimen a continuación:

I. OPORTUNIDAD PROCESAL

Mi representada fue notificada personalmente de la admisión del llamamiento en garantía presentado por apoderado de la EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI y el señor CARLOS ANDRES VANEGAS RIVEROS mediante correo electrónico el 11 de junio de 2025, notificación que se entiende realizada dos días después de la recepción del correo electrónico, es decir el 13 de junio de 2025, iniciando a contar el término para la contestación desde el día 16 de junio de 2025, es decir con plazo perentorio hasta el día 15 de julio de 2025. Por lo expuesto, se concluye que esta contestación integra de la demanda y del llamamiento en garantía se radica oportunamente.

CAPITULO I
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS HECHOS

Frente al hecho “1”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo

injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser acreditado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

No obstante, de acuerdo con la información consignada en el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A000888479 permite evidenciar que el día 5 de diciembre de 2018 en inmediaciones de la Carrera 10 con calle 20, se presentó accidente de tránsito que involucró el vehículo tipo motocicleta de placas FSW75E conducido por la señora Diana Vanessa Angulo y el vehículo de placa VBZ704 conducido por el señor Carlos Andrés Vanegas Riveros.

Frente al hecho “2”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser acreditado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

No obstante, de acuerdo con la información consignada en el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A000888479 permite evidenciar que el día 5 de diciembre de 2018 en inmediaciones de la Carrera 10 con calle 20, se presentó accidente de tránsito que involucró el vehículo tipo motocicleta de placas FSW75E conducido por la señora Diana Vanessa Angulo, donde se desplazaba como María Camila Angulo en calidad de acompañante de la motocicleta y el vehículo de placa VBZ704 conducido por el señor Carlos Andrés Vanegas Riveros. En el informe IPAT registra como propietario del vehículo de placa VBZ704 el señor Alejandro Torres Giraldo y como empresa afiliadora Transportes Alameda.

Frente al hecho “3”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser acreditado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

Frente al hecho “4”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser acreditado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante advertirle desde este momento al Despacho que, al consultar el estado de la licencia de la señora DIANA VANESSA ANGULO FRANCO en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), se evidencia que respecto del mismo no se encuentra registrada ninguna licencia asociada a la persona o al número de documento consultado. Lo cual claramente demuestra que presuntamente para la fecha de los hechos, la demandante no contaba con Licencia de conducción vigente, además la motocicleta en la que se desplazaban no contaba con SOAT ni tecno mecánica, lo que constituyó también una exposición excesiva a riesgo para la menor que en ese momento la acompañaba y quien también sufrió lesión en razón de lo acaecido.

Frente al hecho “5”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser acreditado por el extremo

actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. En todo caso deberá acreditarse en debida forma que la maniobra realizada por el señor CARLOS ANDRÉS VANEGAS fue prohibida. Lo anterior, debido a que en el bosquejo topográfico del informe IPAT se evidencia que el automotor de placa VBZ704 finalizó sobre la calle 20 y la mera grafica de un posible recorrido realizada por el agente que elaboró el informe de tránsito no acredita que efectivamente hubiere realizado el giro desde la carrera 10 como alega el extremo activo, adicionalmente en el croquis no se evidencia señal reglamentaria alguna que indique que dicho giró a la izquierda era prohibido.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante advertirle desde este momento al Despacho que, al consultar el estado de la licencia de la señora DIANA VANESSA ANGULO FRANCO en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), se evidencia que respecto del mismo no se encuentra registrada ninguna licencia asociada a la persona o al número de documento consultado. Lo cual claramente demuestra que presuntamente para la fecha de los hechos, la demandante no contaba con Licencia de conducción vigente.

Resultado Consulta

No se ha encontrado la persona en estado ACTIVA o SIN REGISTRO

Aceptar

Tipo de Documento:
Cédula Ciudadanía

Nro. documento propietario
1130603791

Digite los caracteres presentados a continuación

Ca4mX

Digite los caracteres presentados a continuación

Situación que no puede pasarse por alto ya que la conducción de vehículos por ser una actividad peligrosa requiere que las personas que la ejercen cuenten con ciertas habilidades para el correcto desarrollo de la misma, lo que implica conocimiento de las normas de tránsito, del uso de elementos de seguridad y por supuesto la pericia que ello requiere. Por tanto, es claro que carecía de la habilitación legal para conducir en el momento de los hechos, lo que constituye un incumplimiento normativo y evidencia su responsabilidad en las circunstancias que derivaron en el incidente.

Con lo anterior, se comprueba que la señora DIANA VANESSA ANGULO FRANCO no contaba con licencia de conducción y aun así se encontraba realizando una actividad para la que no se encontraba autorizada y que es obligatoria conforme a las previsiones legales existentes que en primera medida definen a la Licencia de conducción como *“Documento público de carácter personal e intransferible expedido por autoridad competente, el cual autoriza a una persona para la conducción de vehículos con validez en todo*

el territorio nacional¹ Y es que en torno a la obtención de dicho documento habilitante se ha estatuido todo un proceso de capacitación a través de los centros de enseñanza automovilística registrados en el RUNT y que comporta la capacitación teórica y práctica a fin garantizar la idoneidad para la expedición de dicho documento habilitante para la conducción como lo regla el artículo 19 del C.N.T.

Su falta de diligencia y pericia se refuerza también en el hecho de que además de no portar Licencia de Conducción, transitaba en una motocicleta sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ni revisión técnico-mecánica al día, tal como se evidencia en el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) aportado por la parte demandante. La ausencia del **SOAT** es una infracción grave que vulnera el artículo 42 de la Ley 769 de 2002 (por medio del cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones), el cual exige que todos los vehículos, incluidos las motocicletas, cuenten con esta cobertura para garantizar atención en caso de accidentes. La **revisión técnico-mecánica**, por su parte, es obligatoria para asegurar que el vehículo cumpla con los estándares de seguridad necesarios para circular en las vías públicas, tal como lo establece el artículo 50 de la misma ley. La falta de Soat y tecno mecánica del vehículo de la demandante, se acredita tal y como se advierte a continuación:

El formulario muestra los datos de la conductora Vanessa Angulo Franco y el vehículo Yamaha T115. Los campos destacados en rojo indican:

- PORTA LICENCIA:** Se marcaron los botones 'SI' y 'NO'.
- PORTA SOAT:** Se marcaron los botones 'SI' y 'NO'.

Frente al hecho “6”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser acreditado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso.

Frente al hecho “7”: A mi representada no le consta de manera directa lo manifestado en este hecho, comoquiera que son aspectos propios de la órbita personal de los demandantes, sin que obre prueba que acredite lo aquí afirmado, y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el

¹ Artículo 2 de la Ley 769 de 2002

artículo 167 del C.G.P. No obstante, de acuerdo con la información consignada en el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) No. A000888479 se evidencia que no es cierto que se estipulará la violación al código 123 “no respetar las prelacións en intersecciones no señalizadas o en situación de giro de acuerdo con lo descrito en la ley” por cuando esto de ninguna manera quedo consignado en el IPAT.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante advertirle desde este momento al Despacho que, al consultar el estado de la licencia de la señora DIANA VANESSA ANGULO FRANCO en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), se evidencia que respecto del mismo no se encuentra registrada ninguna licencia asociada a la persona o al número de documento consultado. Lo cual claramente demuestra que presuntamente para la fecha de los hechos, la demandante no contaba con Licencia de conducción vigente. Además transitaba en una motocicleta sin Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ni revisión técnico-mecánica al día, tal como se evidencia en el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) aportado por la parte demandante. La ausencia del **SOAT** es una infracción grave que vulnera el artículo 42 de la Ley 769 de 2002 (por medio del cual se expide el Código Nacional de Tránsito Terrestre y se dictan otras disposiciones), el cual exige que todos los vehículos, incluidos las motocicletas, cuenten con esta cobertura para garantizar atención en caso de accidentes. La **revisión técnico-mecánica**, por su parte, es obligatoria para asegurar que el vehículo cumpla con los estándares de seguridad necesarios para circular en las vías públicas, tal como lo establece el artículo 50 de la misma ley.

Frente al hecho “8”: No es un hecho, corresponde a una apreciación subjetiva que realiza la apoderada de la parte demandante frente a la supuestos requisitos de diligenciamiento del informe IPAT, todo lo anterior deberá acreditarse conforme lo regla la resolución No. 0011268 de 2012, en todo caso se deberá tener en cuenta que el Informe Policial de Accidente de Tránsito IPAT no es un documento que tenga la virtualidad para endilgar responsabilidad civil, ello en el entendido de que, el agente de tránsito que lo suscribió no fue testigo de los hechos, dado que se presentó en el lugar 15 minutos después de ocurrido el accidente.

Frente al hecho “9”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser acreditado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Sin embargo, de acuerdo con el Informe Policial de Accidentes de Tránsito aportado con el escrito genitor del proceso, se evidencia que la señora Diana Vanessa Angulo fue trasladada a la clínica Cristo Rey, por otra parte la Joven María Camila Angulo fue trasladada a la clínica Valle Salud Norte.

No obstante, desde ya se resalta que, si en gracia de discusión las presuntas lesiones descritas en este hecho fueran consecuencia directa del mentado accidente, lo cierto es que en cualquier evento ello no resulta atribuible al extremo pasivo del litigio, y, por tanto, no deriva en su eventual obligación indemnizatoria, habida cuenta de no encontrarse probada su responsabilidad en la ocurrencia de este pues en este caso el hecho es atribuible exclusivamente a la víctima.

Frente al hecho “9.1.”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser acreditado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Teniendo en cuenta que la manifestación

hecha por el apoderado de la parte demandante se trata de la mera transcripción literal de los establecido en las historias clínicas obrantes en el proceso, no habrá lugar a pronunciamiento por tratarse de diagnósticos médicos obrantes en las pruebas del plenario.

Frente al hecho “9.2.”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado, por lo cual deberá ser acreditado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Teniendo en cuenta que la manifestación hecha por el apoderado de la parte demandante se trata de la mera transcripción literal de los establecido en las historias clínicas obrantes en el proceso, no habrá lugar a pronunciamiento por tratarse de diagnósticos médicos obrantes en las pruebas del plenario.

Frente al hecho “9.3”: A mi representada no le consta de manera directa las afectaciones emocionales de la señora Diana Vanessa Angulo Franco, comoquiera que corresponden a aspectos propios de la órbita personal de la demandante y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P. En el mismo sentido, no obra en el plenario ninguna prueba si quiera sumaria que acredite que la demandante tenía una pajera estable, no media en el proceso registro civil de matrimonio, declaración extra juicio o declaración de unión marital de hecho que acredite su dicho, por tanto no podrá alegarse dicha afectación.

Frente al hecho “10”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, por lo cual deberá ser aprobado por el extremo actor conforme al artículo 167 del Código General del Proceso. Sin embargo, dentro del libelo probatorio se evidencia el escrito de acusación y otros documentos relacionados al proceso de investigación ante la Fiscalía General de la Nación con número de radicado 760016099165201886714.

Frente al hecho “11”: A mi representada no le constan de manera directa las alegaciones frente a los diagnósticos médicos establecidos para la fecha del accidente, más aún cuando el apoderado de la parte demandante no establece de forma clara y precisa que entidad los emitió, sin embargo, el validar la información se evidencia que se refiere a los diagnósticos establecidos en el INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense de la unidad básica de Cali.

No obstante, desde ya se resalta que, si en gracia de discusión las presuntas lesiones descritas en este hecho fueran consecuencia directa del mentado accidente, lo cierto es que en cualquier evento ello no resulta atribuible al extremo pasivo del litigio, y, por tanto, no deriva en su eventual obligación indemnizatoria, habida cuenta de no encontrarse probada su responsabilidad en la ocurrencia de este pues en este caso el hecho es atribuible exclusivamente a la víctima.

Frente al hecho “11.1”: A mi representada no le constan de manera directa las alegaciones frente a los diagnósticos médicos establecidos para la fecha del accidente, más aún cuando el apoderado de la parte demandante no establece de forma clara y precisa que entidad los emitió, sin embargo, el validar la información se evidencia que se refiere a los diagnósticos establecidos en el INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE No.UBCALI-DSVLLC-00533-2019 por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal

y Ciencia Forense de la unidad básica de Cali.

Frente al hecho “10.1”: A mi representada no le constan de manera directa las alegaciones frente a los diagnósticos médicos establecidos para la fecha del accidente, más aún cuando el apoderado de la parte demandante no establece de forma clara y precisa que entidad los emitió, sin embargo, el validar la información se evidencia que se refiere a los diagnósticos establecidos en el INFORME PERICIAL DE CLÍNICA FORENSE No.UBCALI-DSVLLC-00764-2019 por parte del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencia Forense de la unidad básica de Cali.

Frente al hecho “12”: El numeral contiene varios hechos, por lo que procederé a contestar de manera discriminada de la siguiente forma:

- A mi representada no le consta de manera directa que la señora Diana Vannesa Angulo Franco haya resultado gravemente herida, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en el suceso reseñado, y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P. No obstante, desde ya se resalta que, si en gracia de discusión las presuntas lesiones descritas en este hecho fueran consecuencia directa del mentado accidente, lo cierto es que en cualquier evento ello no resulta atribuible al extremo pasivo del litigio, y, por tanto, no deriva en su eventual obligación indemnizatoria, habida cuenta de no encontrarse probada su responsabilidad en la ocurrencia de este pues en este caso el hecho es atribuible exclusivamente a la víctima
- A mi procurada no le consta de forma directa que la señora Diana Vannesa Angulo Franco haya recibido incapacidad médico legal por 150 días, ni los diagnósticos otorgados por lo que deberá ser acreditado por el extremo activo conforme la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P.

Frente al hecho “13”: A mi representada no le consta de manera directa la fecha de nacimiento de la señora Diana Vanessa Angulo Franco, comoquiera que corresponden a aspectos propios de la órbita personal de la demandante y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P. En lo que respecta a la determinación del lucro cesante y consolidado, se realizará el correspondiente pronunciamiento frente al juramento estimatorio.

Frente al hecho “14”: A mi representada no le consta de manera directa que la señora Diana Vanessa Angulo Franco se desempeñará como comerciante informal, comoquiera que corresponden a aspectos propios de la órbita personal de la demandante y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P, resaltando que no obra prueba siquiera sumaria que acredite la labor que ejercía, mucho menos el salario devengado.

Frente al hecho “15”: A mi representada no le consta de manera directa que la señora Diana Vanessa Angulo Franco se desempeñará como comerciante informal y que esta labor constituyera el sustento de su hogar, comoquiera que corresponden a aspectos propios de la órbita personal de la demandante y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P, resaltando que no obra prueba siquiera sumaria que acredite la labor que ejercía, el salario devengado y los ingresos que destinada para el sostenimiento de su hogar.

Frente al hecho “16”: El numeral contiene varios hechos, por lo que procederé a contestar de manera discriminada de la siguiente forma:

- A mi representada no le consta de manera directa que la señora Diana Vannesa Angulo Franco haya resultado gravemente herida, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en el suceso reseñado, y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P. No obstante, desde ya se resalta que, si en gracia de discusión las presuntas lesiones descritas en este hecho fueran consecuencia directa del mentado accidente, lo cierto es que en cualquier evento ello no resulta atribuible al extremo pasivo del litigio, y, por tanto, no deriva en su eventual obligación indemnizatoria, habida cuenta de no encontrarse probada su responsabilidad en la ocurrencia de este pues en este caso el hecho es atribuible exclusivamente a la víctima.
- A mi representada no le consta de manera directa las afectaciones emocionales de la señora Diana Vanessa Angulo, comoquiera que corresponden a aspectos propios de la órbita personal de la demandante y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P. No obstante, desde ya se resalta que (i) no obra en el plenario ninguna soporte si quiera sumario que permita dilucidar la congoja, tristeza, depresión y sufrimiento por parte de la demandante, y (ii) si en gracia de discusión las afectaciones descritas en este hecho fueran consecuencia directa del mentado accidente, lo cierto es que en cualquier evento ello no resulta atribuible al extremo pasivo del litigio, y, por tanto, no deriva en su eventual obligación indemnizatoria, habida cuenta de no encontrarse probada su responsabilidad en la ocurrencia de este pues en este caso el hecho es atribuible exclusivamente a la víctima.

Frente al hecho “17”: A mi representada no le consta de manera directa que la señora Diana Vannesa Angulo Franco haya resultado gravemente herida y que en consecuencia requiera una cirugía plástica, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en el suceso reseñado, y en este sentido, la parte actora deberá cumplir con la carga que le impone el artículo 167 del C.G.P.

No obstante, desde ya se resalta que si en gracia de discusión las afectaciones descritas en este hecho fueran consecuencia directa del mentado accidente, lo cierto es que en cualquier evento ello no resulta atribuible al extremo pasivo del litigio, y, por tanto, no deriva en su eventual obligación indemnizatoria, habida cuenta de no encontrarse probada su responsabilidad en la ocurrencia de este pues en este caso el hecho es atribuible exclusivamente a la víctima.

Frente al hecho “18”: No me consta lo afirmado en este hecho por la parte demandante, pues LA EQUIDAD SEGUROS ORGANISMO COOPERATIVO es una entidad jurídicamente diferente e independiente a la aseguradora que represento. Por tanto, lo narrado en este hecho se trata de circunstancias totalmente ajenas y desconocidas por SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.. En todo caso y sin perjuicio de lo anterior, la parte actora deberá acreditar su dicho debida y suficientemente, conforme a los medios de pruebas útiles, conducentes y pertinentes para el efecto y en las oportunidades procesales previstas para ello.

II. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA

ME OPONGO a la totalidad de las pretensiones incoadas en la demanda, por cuanto las mismas carecen de fundamentos fácticos y jurídicos que hagan viable su prosperidad, comoquiera que al hacer la narración de los supuestos hechos se pretende imputar una supuesta responsabilidad civil extracontractual, la cual como se establecerá dentro del proceso, no se estructuró, por cuanto la parte accionante no asistió a su deber procesal de la carga de la prueba tanto de la supuesta culpa, del daño, de la cuantía del supuesto detrimento y el nexo de causalidad entre uno y el otro. Aunado a lo anterior, no se vislumbran los elementos sine qua non para declarar una responsabilidad civil en el caso que nos ocupa. Lo anterior, toda vez que: Primero, es clara la configuración de la causal eximente de responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima” y “hecho de un tercero”, toda vez que recae en cabeza de la señora Diana Vanessa Angulo Franco en el accidente ocurrido el 5 de diciembre de 2018. Segundo, los presuntos perjuicios alegados carecen abiertamente de sustento probatorio. Tercero no existe un nexo de causalidad entre la conducta de los demandados y las lesiones sufridas por el actor, pues en este caso se encuentra desvirtuada la existencia de dicho nexo causal.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “1”: **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión, toda vez que no es posible una declaratoria de responsabilidad en cabeza del señor ALEJANDRO TORRES GIRALDO en calidad de propietario, el señor CARLOS ANDRÉS VANEGAS RIVADOS en calidad de conductor, la sociedad EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI ALAMEDA S.A. como empresa afiliadora del vehículo de placas VBZ704, en la ocurrencia del accidente del pasado 5 de diciembre de 2018, debido a que, en el presente caso se configuró la culpa exclusiva de la víctima y hecho de un tercero, específicamente debe indicarse que el accidente y las lesiones de las demandantes fueron ocasionadas por DIANA VANESSA ANGULO FRANCO, quien se desplazaba en la motocicleta de placas FSW75E sin estar capacitada para la conducción de vehículos ya que no portaba licencia de conducción y se movilizaba en una motocicleta que no contaba con revisión técnico mecánica, de conformidad al IPAT adosado con la demanda.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “2”: Si bien la pretensión no recae sobre la Empresa de Transportes de Santiago de Cali Alameda SA, **ME OPONGO** a que se condene a la aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO para que sea afectada la póliza de responsabilidad civil Extracontractual en la cobertura para que concurra al pago de la indemnización de manera directa a los demandantes con sustento en el contrato de seguros, por cuanto no se ha configurado el riesgo asegurado en los términos del artículo 1077 del Código de Comercio pues no se probó la ocurrencia del siniestro ni la cuantía de la pérdida. Frente a la no realización del riesgo asegurado, se expone que en el presente caso operó la causal excluyente de la responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima” y “hecho de un tercero”.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “3”: **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamento fáctico y jurídico. Lo anterior, comoquiera que es una pretensión ligada a la primera y no reconociéndose, ésta tampoco tiene vocación de prosperidad. Ahora, esta pretensión contiene de forma discriminada cada uno de los rubros solicitados por la parte demandante frente a los cuales me pronunciaré de la siguiente forma:

FRENTE A LA PRETENSIÓN “3.1 POR PERJUICIOS MORALES”: **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión porque no hay lugar a la declaratoria de responsabilidad. Adicionalmente, me opongo a la cuantificación debido a que las sumas pretendidas bajo el concepto de daño moral no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, pues se solicitan valores que superan el baremo jurisprudencial de antaño decantado por el Órgano de Cierre en la Jurisdicción Ordinaria en su especialidad Civil.

En efecto, siguiendo dichos derroteros, para la tasación de los perjuicios morales en casos análogos de lesiones, la Corte ha fijado reconocido sumas muy inferiores a las aquí pretendidas, incluso en casos de mayor gravedad como invalidez y muerte, es decir, la tasación propuesta está sobrestimada. Aun cuando no se encuentre acreditado el nexo de causalidad entre las lesiones y el accidente de tránsito referido en la demanda, en el caso en concreto, no se trata afortunadamente de un fallecimiento; y adicionalmente, en el plenario no reposa prueba siquiera sumaria que permite dilucidar la aflicción, congoja, tristeza sufrida por parte de la parte pasiva. Ahora, si bien la señora Diana Vanessa Angulo resultó afectada, lo cierto es que pudo continuar con su actividad laboral y recibiendo el mismo salario que acreditó antes del accidente, por cuanto el porcentaje de pérdida de capacidad laboral emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca solo determinó un porcentaje del 13,40%, desacreditando cualquier alegación frente a afectación moral por la falta de oportunidad laboral o no continuidad de sus actividades personales. Por lo tanto, no existe prueba alguna que determine que en efecto los demandantes son acreedores de la indemnización deprecada.

Bajo las mismas consideraciones me opongo al doble reconocimiento que pretende la parte demandante, por cuanto constituye una pretensión especulativa y con evidente ánimo de enriquecimiento sin causa, esto al solicitar cifras independientes para la joven María Camia Angulo Franco, la primera como víctima directa y una segunda pretensión como víctima indirecta, misma situación acaece para la menor Hilary Herrera Angulo, cuya pretensión total asciende a 15 SMLMV cuando, reiterando que la Corte ha fijado y reconocido sumas muy inferiores a las aquí pretendidas, incluso en casos de mayor gravedad, tomando en cuenta que para la demandante María Camila Angulo no media soporte de pérdida de capacidad laboral, por lo que una vez cumplida su incapacidad médica pudo tener una recuperación satisfactoria y continuar con su vida con normalidad, evidenciando así la ausencia de un perjuicio moral.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “3.2 DAÑOS A LA VIDA EN RELACIÓN POR LA DISMINUCIÓN DEL GOCE DE VIVIR”: **ME OPONGO** a la prosperidad de esta pretensión por carecer de fundamentos fácticos y jurídicos. Es preciso resaltar que este tipo de perjuicios se reconoce única y exclusivamente a la víctima directa, por lo que dicha tasación económica es carente de fundamento y no debe ser considerada. La parte demandante pretende el reconocimiento de una indemnización que en realidad no sería procedente, por cuanto el daño a la vida en relación se desprende de su acreditación, carga que no ha cumplido la parte demandante. En efecto, la parte actora no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de dichas sumas de dinero, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de Diana Vanessa Angulo Franco y sus familiares, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido.

Por otro lado, dentro del plenario no existen pruebas que permitan demostrar el daño a la vida de relación

de la demandante y, de todas maneras, las sumas pretendidas bajo este concepto son exageradas y no se encuentran delimitadas y enmarcadas de acuerdo con los lineamientos jurisprudenciales en los que en múltiples ocasiones se ha pronunciado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia. En el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad que invalidez o un fallecimiento. Deberá tener en cuenta el Despacho que en el plenario reposa un dictamen de pérdida de capacidad laboral que indica el extremo actor (Diana Vanessa Angulo Franco) no supera el 13,40%, por lo tanto la demandante puede seguir ejerciendo actividades con normalidad, no requiere ayuda de terceros, no constituyo una enfermedad degenerativa y por tanto no se presentó una afectación a la vida en relación. Por lo tanto, no existe prueba alguna que determine que en efecto los demandantes son acreedores de la indemnización deprecada.

Por otra parte, para la joven María Camila Angulo no media soporte de pérdida de capacidad laboral, por lo que una vez cumplida su incapacidad medica pudo tener una recuperación satisfactoria y continuar con su vida con normalidad, evidenciando así la ausencia de un perjuicio de daño a la salud.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “3.3 POR PERJUICIOS MATERIALES”: **ME OPONGO** al reconocimiento de la suma de \$52.340.995, por concepto de **lucro cesante**, consolidado y futuro, comoquiera que no concurren los presupuestos necesarios para acceder a la indemnización del referido perjuicio, por cuanto: **(i)** No obra dentro del expediente ningún medio de prueba que corrobore, así sea sumariamente, que la señora Diana Vanessa Angulo Franco, con ocasión al hecho del 5 de diciembre de 2018 quedó cesante laboralmente, adicionalmente el porcentaje aducido por el actor frente a su pérdida de capacidad laboral no acredita que no puede volver a ejercer sus actividades laborales con normalidad. Sin perjuicio de lo anterior, bajo este porcentaje no se avizora que la demandante no pudiera continuar con sus actividades laborales; **(ii)** no obra en el expediente obra certificación o soporte alguno que acredite si quiera de forma sumaria que la señora Diana Vanessa Angulo Franco se encontraba devengando salario alguno para el momento del accidente; **(ii)** No existe claridad alguna sobre el valor que recibía como presunta remuneración la señora Diana Vanessa Angulo, por lo tanto, no es posible establecer como los hechos del 5 de diciembre de 2018 afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía la demandante; **(iv)** Una vez consultado en el Registro Único de Afiliados (RUAF) no se avizora que la señora Diana Vanessa Angulo haya realizado aportes al Sistema General de Seguridad Social, por lo que es claro que la demandante no percibió ingresos y en tal virtud no será posible adjudicarle por parte de este juzgador suma por concepto de lucro cesante.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “3.4 POR PERJUICIOS MATERIALES”: **ME OPONGO** porque, en definitiva, no resulta procedente lo solicitado respecto del reconocimiento y pago a favor de la demandante de sumas de dinero por concepto de perjuicio material para la realización de cirugía plástica, en el entendido que la demandante no aporta al expediente pruebas conducentes, pertinentes y útiles para acreditar la existencia y cuantía del perjuicio alegado. Así, debe observarse que la accionante intenta probar el acaecimiento de un perjuicio material con una mera cotización, lo cual resulta improcedente, pues no da cuenta que en efecto se haya pagado suma alguna por ese valor, o que haya una verdadera necesidad de dicho procedimiento médico, más cuando este no ha sido realizado por la EPS o entidad de salud a la cual se encuentre afiliada la demandante. Además, resulta improcedente reconocer el monto alegado en razón a que este no ha salido del patrimonio de la demandante, por lo que dicho perjuicio está basado exclusivamente en una mera cotización que no se ha hecho efectiva.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “4”: **ME OPONGO** a la prosperidad de esta petición de condena en intereses, reitero mi oposición, toda vez que, se repite, mi representada no tienen ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor.

Frente a la pretensión en subsidio, **ME OPONGO** a esta pretensión por sustracción de materia, en tanto que resulta consecencial a las anteriores, y al ser improcedentes, esta también debe ser desestimada frente al extremo pasivo. Adicionalmente, es importante resaltar que, no puede acumularse la indexación monetaria con el pago de los intereses puesto que ambos conceptos tienen la misma finalidad, la cual es paliar el poder adquisitivo del dinero. Sobre este punto, la Corte Suprema de Justicia, en un caso que se puede aplicar análogamente al presente, afirmó: “(...) *Puestas de ese modo las cosas, puede concluirse que la compatibilidad originaria de la corrección monetaria y de los intereses, depende, fundamentalmente, de la naturaleza y tipología de éstos, puesto que, si ellos son los civiles, nada impide que, in casu, se ordene el reajuste monetario de la suma debida. **Pero si el interés ya comprende este concepto (indexación indirecta), se resalta de nuevo, imponer la corrección monetaria, per se, equivaldría a decretar una doble –e inconsulta- condena por un mismo ítem, lo que implicaría un grave quebranto de la ley misma**, (...).²– (Subrayado y negrilla por fuera de texto). Así las cosas, además de lo que ya se estableció, esta pretensión no debe ser tenida en cuenta pues la indexación de la moneda no se puede acumular con los intereses moratorios.*

FRENTE A LA PRETENSIÓN “5”: **ME OPONGO** a la prosperidad de esta petición de condena en costas del proceso y agencias en derecho, reitero mi oposición, toda vez que, se repite, mi representada no tienen ninguna obligación indemnizatoria derivada de los hechos descritos en el escrito genitor. Por tal motivo solicito que, en vista de que no se identifica ninguna actuación que refleje la necesidad de un reproche jurídico por parte de la demandada, se condene en costas a los demandantes, pues sometió al extremo pasivo y a mi prohilada, sin justificación ni respaldo probatorio alguno, al agotamiento innecesario de estas instancias judiciales.

III. OBJECCIÓN AL JURAMENTO ESTIMATORIO

De conformidad con lo establecido en el inciso primero del artículo 206 del Código General del Proceso y con el fin mantener un equilibrio procesal, garantizar pedimentos razonables y salvaguardar el derecho de defensa de mi procurada, procedo a **OBJETAR** el juramento estimatorio de la demanda en los siguientes términos:

A. Frente al lucro cesante.

Como aspecto fundamental para objetar el juramento estimatorio frente al lucro cesante, debe advertirse que: **(i)** No obra dentro del expediente ningún medio de prueba que corrobore, así sea sumariamente, que la señora Diana Vanessa Angulo Franco, con ocasión al hecho del 5 de diciembre de 2018 quedó cesante laboralmente, pues se reitera que esta situación no se logra evidencia del dictamen de pérdida de capacidad laboral que determinó un PCL del 13,40. Aunado a ello, es importante señalar que no se considera como invalida a la víctima por cuanto solo podría ser superior al 50% de pérdida de capacidad laboral conforme lo regla el artículo 38 de la ley 100 de 1993; **(ii)** No existe claridad alguna sobre el valor

²Corte Suprema de Justicia. Sentencia 41392. M.P. Francisco Javier Ricaurte Gómez.

que recibía como presunta remuneración la señora Diana Vanessa Angulo pues no obra en el expediente prueba siquiera sumaria que lo acredite, por lo tanto, no es posible establecer como los hechos del 5 de diciembre de 2018 afectaron las condiciones económicas que antes tenía la demandante Una vez consultado en el Registro Único de Afiliados (RUIAF) no se avizora que la señora Diana Vanessa Angulo haya realizado aportes al Sistema General de Seguridad Social, por lo que es claro que la demandante no percibió ingresos y en tal virtud no será posible adjudicarle por parte de este juzgador suma por concepto de lucro cesante.

**SISPRO**
Sistema Integral de Información de la Protección Social
RUIAF
Registro Único de Afiliados

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

INFORMACIÓN BÁSICA						Fecha de Corte: 2025-07-11
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo	
CC 1130603791	DIANA	VANESSA	ANGULO	FRANCO	F	

AFILIACIÓN A SALUD						Fecha de Corte: 2025-07-11
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio	
COOSALUD EPS S.A.	Subsidiado	10/01/2019	Activo	CABEZA DE FAMILIA	SANTIAGO DE CALI	

AFILIACIÓN A PENSIONES Fecha de Corte: 2025-07-11
No se han reportado afiliaciones para esta persona

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES Fecha de Corte: 2025-07-11
No se han reportado afiliaciones para esta persona

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR Fecha de Corte: 2025-07-11
No se han reportado afiliaciones para esta persona

AFILIACIÓN A CESANTIAS Fecha de Corte: 2025-07-11

CONFORME CON LA NORMATIVIDAD VIGENTE, LAS ADMINISTRADORAS SON LAS RESPONSABLE DEL CONTENIDO Y LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN REPORTADA AL RUIAF, CUALQUIER INCONSISTENCIA DEBE SER INFORMADA A LA ADMINISTRADORA RESPECTIVA, QUIEN DEBE RESOLVERLA.

Ministerio de Salud y Protección Social.
Dirección: Cra. 13 # 32 - 76. Colombia, Bogotá D.C. PBX: (57-1) 330 5000, Fax: (57-1) 330 5050.

Fecha: //11/2025 2:11:41 PM Pag.1

De tal suerte, en el entendido de que las sumas consignadas en el acápite del juramento estimatorio no obedecen a la realidad probatoria allegada al proceso, es en todo caso excesivo y sin soporte probatorio, de manera amable solicito a usted señor Juez, no tener en cuenta la estimación que se realiza en el libelo genitor.

De tal suerte, en el entendido de que las sumas consignadas en el acápite del juramento estimatorio no obedecen a la realidad probatoria allegada al proceso, es en todo caso excesivo y sin soporte probatorio, de manera amable solicito a usted señor Juez, no tener en cuenta la estimación que se realiza en el libelo genitor.

Ahora bien, frente a los perjuicios materiales para la joven María Camila Angulo Franco, objeto el juramento estimatorio por cuanto, en definitiva, no resulta procedente lo solicitado respecto del reconocimiento y pago a favor de la demandante de sumas de dinero por concepto de perjuicio material

para la realización de cirugía plástica, en el entendido que la demandante no aporta al expediente pruebas conducentes, pertinentes y útiles para acreditar la existencia y cuantía del perjuicio alegado. Así, debe observarse que la accionante intenta probar el acaecimiento de un perjuicio material con una mera cotización, lo cual resulta improcedente, pues no da cuenta que en efecto se haya pagado suma alguna por ese valor, o que haya una verdadera necesidad de dicho procedimiento médico, más cuando este no ha sido realizado por la EPS o entidad de salud a la cual se encuentre afiliada la demandante.

Además, resulta improcedente reconocer el monto alegado en razón a que este no ha salido del patrimonio de la demandante, por lo que dicho perjuicio está basado exclusivamente en una mera cotización que no se ha hecho efectiva.

De conformidad con lo expuesto, se puede concluir que es evidente que, con las peticiones indemnizatorias por concepto de lucro cesante y daño emergente, indiscutiblemente la parte demandante desea lucrarse, pues la configuración de los presupuestos para el reconocimiento de dichos conceptos no está acreditada en el plenario. Con todo, en el entendido de que las sumas consignadas en el acápite del juramento estimatorio no obedecen a la realidad probatoria allegada al proceso, solicito respetuosamente ordenar la regulación de la cuantía y dar aplicación a lo dispuesto en el inciso primero del Art. 206 del CGP.

IV. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE A LA DEMANDA

En primer lugar, es preciso poner en conocimiento del Honorable Juez que la defensa se abordará con la formulación de medios exceptivos divididos en dos grupos. Por un lado, se formularán las excepciones relacionadas con los medios de defensa propuestos con ocasión al accidente de tránsito propiamente dicho, luego se abordarán las excepciones frente a las pretensiones incoadas en la demanda. Posteriormente, en el capítulo II frente a la contestación al llamamiento en garantía se encontrarán los medios exceptivos que guardan profunda relación con el contrato de seguro. Por lo anterior, se formularán las siguientes excepciones:

EXCEPCIONES CONTRA LA SUPUESTA RESPONSABILIDAD ATRIBUIDA A LA PASIVA

1. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD COMO CONSECUENCIA DEL HECHO DE LA VÍCTIMA

En este punto es necesario indicar que en el accidente de tránsito del 5 de diciembre de 2018 no hubo responsabilidad por parte del señor Carlos Andrés Vanegas Riveros como conductor del vehículo de placas VBZ704 quien conducía diligentemente y con el cumplimiento de todas las normas de tránsito. Por el contrario, el accidente se produjo por un hecho de la víctima, es decir, de la señora Diana Vanessa Angulo Franco quien se desplazaba en la motocicleta de placas FSW-75E sin estar capacitada para ello, dado que nunca ha obtenido licencia de conducción para operar ese tipo de vehículos o algún otro.

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia ha indicado con claridad que cuando la conducta imprudente de la víctima fue suficiente para causar el daño, debe liberarse de toda responsabilidad al extremo pasivo de la litis así:

(...) La culpa exclusiva de la víctima, como factor eximente de responsabilidad civil, ha sido entendida como la conducta imprudente o negligente del sujeto damnificado, que por sí sola resultó suficiente para causar el daño. Tal proceder u omisión exime de responsabilidad si se constituye en la única causa generadora del perjuicio sufrido, pues de lo contrario solo autoriza una reducción de la indemnización, en la forma y términos previstos en el artículo 2357 del Código Civil.

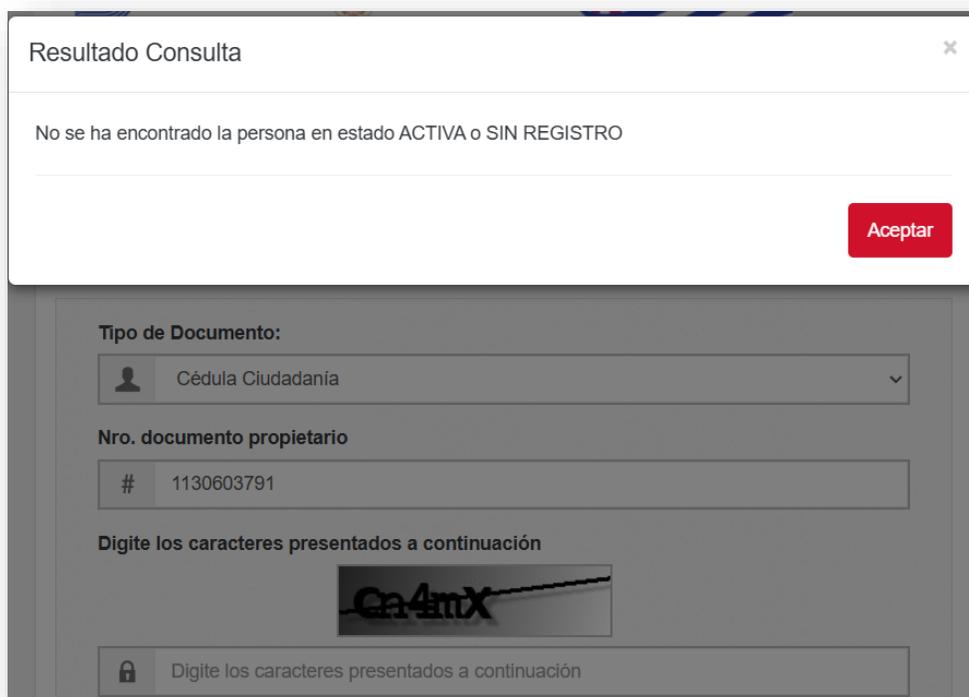
(...) Preciado lo anterior, se debe mencionar que la doctrina es pacífica en señalar que para el comportamiento del perjudicado tenga influencia en la determinación de la obligación reparatoria, es indispensable que tal conducta incida causalmente en la producción del daño y que dicho comportamiento no sea imputable al propio demandado en cuanto que él ya haya provocado esa reacción en la víctima. Sobre lo que existe un mayor debate doctrinal es si se requiere que la conducta del perjudicado sea constitutiva de culpa, en sentido estricto, o si lo que se exige es el simple aporte causal de su actuación independientemente de que se pueda realizar un juicio de reproche sobre ella

(...) En todo caso, así se utilice la expresión “culpa de la víctima” para designar el fenómeno en cuestión, en el análisis que al respecto se realice no se deben utilizar, de manera absoluta o indiscriminada, los criterios correspondientes al concepto técnico de culpa, entendida como presupuesto de la responsabilidad civil en la que el factor de imputación es de carácter subjetivo, en la medida en que dicho elemento implica la infracción de deberes de prudencia y diligencia asumidos en una relación de alteridad, esto es, para con otra u otras personas, lo que no se presenta cuando lo que ocurre es que el sujeto damnificado ha obrado en contra de su propio interés. Esta reflexión ha conducido a considerar, en acercamiento de las dos posturas, que **la “culpa de la víctima” corresponda – más precisamente – a un conjunto heterogéneo de supuestos de hecho, en los que se incluyen no solo comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfieren causalmente en la producción del daño,** con lo que se logra explicar, de manera general, que la norma consagrada en el artículo 2357 del código Civil, aun cuando allí se aluda a “imprudencia” de la víctima, pueda ser aplicable a la conducta de aquellos llamados inimputables porque no son “capaces de cometer delito o culpa” o a comportamientos de los que la propia víctima no es consciente o en los que no hay posibilidad de hacer reproche alguno a su actuación (v.gr. aquel que sufre un desmayo, un desvanecimiento o un tropiezo y como consecuencia sufre un daño) Así lo consideró esta Corporación hace varios lustros cuando precisó que “en la estimación que el juez ha de hacer del alcance y forma en que el hecho de la parte lesionada puede afectar el ejercicio de la acción civil de reparación, no hay para que tener en cuenta, a juicio de la Corte, el fenómeno de la imputabilidad moral para calificar como culpa la imprudencia de la víctima, **porque no se trata entonces del hecho-fuente de la responsabilidad extracontractual que exigiría la aplicación de un criterio subjetivo, sino del hecho de la imprudencia simplemente, objetivamente**

considerado como un elemento extraño a la actividad del autor pero concurrente en el hecho y destinado solamente a producir una consecuencia jurídica patrimonial en relación con otra persona (...)³ (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

En concordancia con lo manifestado por la Corte Suprema de Justicia, es claro que, si el daño alegado se produjo como consecuencia de un hecho de la víctima, el presunto responsable será exonerado de cualquier tipo de responsabilidad. En el caso concreto, es claro que la conducta imprudente de realizar una actividad peligrosa sin estar capacitada para ello, y por cuanto además la motocicleta no se encontraba autorizada para ser conducida por cuanto no contaba con revisión tecno mecánica al día.

En el caso de marras, es importante señalar que una vez se procede con la consulta del documento de identidad de la hoy demandante, Diana Vanessa Ángulo, ni siquiera está registrada como conductora en el REGISTRO ÚNICO NACIONAL DE TRÁNSITO:



Resultado Consulta

No se ha encontrado la persona en estado ACTIVA o SIN REGISTRO

Aceptar

Tipo de Documento:
Cédula Ciudadanía

Nro. documento propietario
1130603791

Digite los caracteres presentados a continuación

Ca4mX

Digite los caracteres presentados a continuación

En segundo lugar, la motocicleta de placa FSW-75E no cumplía con la normatividad de tránsito por cuanto no contaba con revisión tecno-mecánica al día, situación que quedó plasmada en el IPAT y que constituye una grave infracción a la normatividad de tránsito, que además puso en peligro ampliamente su integridad y la de los demás actores viales puesto conforme el artículo 51 del Código General de Tránsito, esta revisión tiene la finalidad de verificar que entre otros, el automotor presente buen funcionamiento del sistema mecánico, elementos de seguridad, buen estado del sistema de frenos y llantas, estado del vehículo que pudo influir de manera directa en el accidente.

Conforme a lo anterior, es claro que la víctima directa se encontraba entonces conduciendo un vehículo para el cual no recibió capacitación ni teórica ni de forma práctica, lo cual genera su desconocimiento frente a normatividad de tránsito, como manipular dicho vehículo, sistemas de frenos, de seguridad, luces

³ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC7534-2015. Sentencia del 16 de junio de 2015. Magistrado Ponente: Ariel Salazar Ramíez.

y cualquier otro conocimiento y experiencia necesaria para su conducción segura, situación que hubiera sido diferente si la señora Diana Vanessa Angulo Franco hubiere acatado la normatividad y obtenido su licencia de conducción bajo los requisitos establecidos en la norma, recordando que estaba ejerciendo una actividad peligrosa, que se tornó mucho más arriesgada para su seguridad por este hecho, sin olvidar que la Corte ha establecido que la culpa de la víctima no solo incluye comportamientos culposos en sentido estricto, sino también actuaciones anómalas o irregulares del perjudicado que interfiere causalmente en la producción del daño, hecho que sin lugar a duda se acredita desde el momento en que la demandante decide operar el automotor involucrado en el accidente del día 5 de diciembre de 2018.

Siguiendo la línea argumentativa sobre la ausencia de responsabilidad de los demandados, es necesario precisar que el accidente de tránsito se presentó debido a la exposición al peligro de la señora Diana Vanessa Angulo Franco al realizar una actividad peligrosa sin estar capacitada para ello, así se logra determinar en las siguientes pruebas:

- A. Se corrobora la falta de diligencia y cuidado de la demandante ya que este no está autorizado para conducir vehículos. Así se evidencia en el informe de accidente de tránsito, pues la señora Diana Vanessa Angulo Franco no contaba con licencia de conducción, y por cuanto además la motocicleta no se encontraba autorizada para ser conducida por cuanto no contaba con revisión tecno mecánica al día y soat¹⁸:

El formulario muestra los datos de la conductora Diana Vanessa Angulo Franco, quien no tiene licencia de conducción (campo 'LICENCIA DE CONDUCCIÓN' con 'SI' marcado). El vehículo es una moto Yamaha T115 sin revisión mecánica al día (campo 'REVIS. TEC. MEC.' con 'SI' marcado). El propietario es Arteaga Rosero Keimel Johanna.

- B. Se confirma igualmente que, la señora Diana Vanessa Angulo Franco ni siquiera estaba registrada como conductora ante RUNT, por lo que nunca ha realizado trámite alguno relacionado con el sistema de registro de conductores, confirmando que nunca ha sido capacitada y su actuación se constituyó contraria a lo reglado en el artículo 19 del Código Nacional de Tránsito.

Ahora bien, como se ha expuesto, sumado a que la señora Diana Vanessa Angulo Franco no contaba con licencia de conducción para operar la motocicleta en la cual se accidentó, el automotor en que se desplazaba tampoco acataba la normatividad de tránsito, lo que indica que no se encontraba certificado un adecuado funcionamiento de sus sistema de frenos, sistema mecánico y de seguridad en general, lo que definitivamente influyó en la ocurrencia del accidente, por cuanto se desconoce si la demandante logró disminuir velocidad en aproximación a intersección, dar aviso de su presencia en la vía o siquiera reacción dado el estado del automotor en que se desplazaba. Se valida entonces en el IPAT, que la motocicleta de placa FSW75E, manipulada por una persona que no contaba con licencia de conducción no portaba SOAT ni Tecno mecánica Vigente, lo cual constituye más que una infracción de tránsito, un total desconocimiento del riesgo propio y para los demás actores viales, puesto que la autoridad de tránsito fue imposibilitada por la demandante de conocer el verdadero estado del automotor y por ende acreditar que cumplía con normas básicas de seguridad para actividad tan peligrosa como lo es la conducción.

3.2 VEHICULO				
PLACA	PLACA REMOLQUE / SIN	NACIONALIDAD	MARCA	LINEA
FSW75E		COLOMBIANA EXTRANJERA	Yamaha	T115
EMPRESA			MATRICULADO EN	PAREJADO EN
NET			Florida	A DISPOSICION DE
REV. TEC. MEC. <input type="checkbox"/>		CATEGORIA ACUMPLIDA <input type="checkbox"/>		
PORTA SOAT <input type="checkbox"/>		ACCIDENTE <input type="checkbox"/>		
TA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL <input type="checkbox"/>				

Como se permite concluir de las pruebas relacionadas, no cabe duda de que la señora Diana Vanessa Angulo Franco se expuso a un riesgo potencial, además de exponer a su hija quien la acompañaba, siendo gravemente imprudente al conducir un automotor sin tener conocimiento ni pericia para ellos, y por cuanto además la motocicleta no se encontraba autorizada para ser conducida por cuanto no contaba con revisión tecno mecánica ni Soat al día. De tal suerte, el Despacho deberá considerar que esta actuación desplegada por la demandante constituyó de forma clara una incidencia determinante en el acaecimiento del accidente, por cuando quien la motociclista no puede acreditar que sabía conducir y que conocía las normas de tránsito, además no cumplió normas básicas de seguridad por cuanto decidió conducir un vehículo en vía pública sin revisión técnico mecánica vigente, es decir con total desconocimiento del estado mecánico del automotor, sin olvidar que tampoco portaba SOAT, situación que privó de tener recursos económicos para la atención médica que recibiría y además recursos a los que tendría derecho un tercero si resultará afectado por su irresponsabilidad.

Visto lo anterior, el Despacho debe considerar que entre la supuesta acción u omisión desplegada por la conductora del automóvil de placas FSW75E y los perjuicios presuntamente causados a la demandante no existe relación de causalidad alguna. Puesto que resultó probado en el plenario que el accidente del 5 de diciembre de 2018 se produjo por el actuar de la señora Diana Vanessa Angulo Franco quien se expuso a sí misma y a la menor María Camila Ángulo imprudentemente al riesgo. Debido a lo anterior, es importante tener en cuenta que ante la configuración de la causal exonerativa por el actuar de la víctima, se frustran las pretensiones de la demanda, pues dicha causal es capaz de destruir aquel nexo causal y al no encontrarse dicha correlación entre el presunto hecho dañoso y el daño, no puede el Despacho ordenar

una indemnización a cargo de la parte demandada.

En conclusión, no es jurídicamente viable imputar obligación indemnizatoria a cargo del extremo pasivo de la litis, puesto que los daños alegados por el extremo actor son consecuencia de un hecho de la víctima quien se desplazaba en la motocicleta de placas FSW75E, sin estar capacitada para ello, dado que no portaba licencia de conducción, situación que indudablemente rompe cualquier nexo causal que se pretenda estructurar entre el actuar del señor CARLOS ANDRES VANEGAS RIVEROS y el daño deprecado por la parte demandante. De esa manera, dado que la ley y la amplia jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha sido clara en indicar que el hecho de la víctima impide que se declare la existencia de responsabilidad extracontractual, es claro que en el caso concreto debe negarse todas las pretensiones de la demanda.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

2. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD AL ESTAR ANTE UNA CAUSA EXTRAÑA COMO EXIMIENTE DE RESPONSABILIDAD - “HECHO EXCLUSIVO DE UN TERCERO”.

En el presente caso no podrá imputarse responsabilidad alguna a los demandados por los hechos acaecidos el 5 de diciembre de 2018, en el accidente de tránsito en el que se vio involucrado el vehículo de placas VBZ704. Lo anterior, comoquiera que operó la causal eximente de la responsabilidad relativa al Hecho exclusivo de un tercero. Bajo esta premisa, si se demuestra que fue la conducta de la conductora de la motocicleta de placa FSW75E, la que generó el accidente por circular sin contar con licencia de conducción vigente, es decir sin saber cómo operar adecuadamente una motocicleta, sin conocer el verdadero estado del vehículo y de igual gravedad no portar SOAT, deberá declararse la culpa exclusiva de un tercero, que en este caso hacer parte de este litigio y se trata de la señora Diana Vanessa Angulo Franco, quien con su actuación generó los daños sufridos por su hija la joven María Camila Angulo Franco, también hoy demandante como víctima directa. Esta causal exonerativa impide atribuir el daño al extremo pasivo de la litis, lo que conlleva la improcedencia de cualquier imputación de responsabilidad en su contra.

Recordemos que la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que, Sobre este tema, la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia del 21 de noviembre de 2009, fue enfática en señalar que:

“(…) cuando un contratante pretende alegar el hecho de un tercero como actor exonerarte de responsabilidad deberá probar que tal hecho fue imprevisible e irresistible”⁴.

Al respecto, es necesario complementar con lo señalado por la Jurisprudencia del Consejo de estado ⁵, quien se ha pronunciado sobre el hecho del tercero así:

*“Por otra parte, en relación con la causal de exoneración consiste en el hecho de un tercero, la jurisprudencia de esta corporación ha señalado que la misma **se configura***

⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 21 de noviembre de 2005. Expediente No. 11001-3103- 003-1995-07113-01. M.P. Edgardo Villamil Portilla

⁵ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 26 de marzo de 2008. Expediente. 16530. MP. Mauricio Fajardo Gómez

siempre y cuando se demuestre que la circunstancia extraña es completamente ajena al servicio y que este último no se encuentra vinculado de manera alguna con la actuación de aquel” (Subrayado y negrilla por fuera del texto).

Así también, en pronunciamiento más reciente, señaló el más alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo que:

Las tradicionalmente denominadas causales eximentes de responsabilidad (fuerza mayor, caso fortuito, hecho exclusivo y determinante de un tercero o de la víctima) constituyen diversos eventos que dan lugar a que devenga imposible imputar, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad por los daños cuya causación da lugar a la iniciación del litigio, a la persona o entidad que obra como demandada dentro del mismo. En relación con todas ellas, tres son los elementos cuya concurrencia tradicionalmente se ha señalado como necesaria para que sea procedente admitir su configuración: (i) su irresistibilidad; (ii) su imprevisibilidad y (iii) su exterioridad respecto del demandado.

(...)

Por otra parte, a efectos de que operen las mencionadas eximentes de responsabilidad (hecho de la víctima o de un tercero), es necesario aclarar, en cada caso concreto, si el proceder activo u omisivo de aquellos tuvo, o no, injerencia y en qué medida, en la producción del daño. (...)⁶ (Subrayado y negrilla por fuera del texto original)

Por su parte, la doctrina al respecto de hecho del tercero señala que:

“Esta causa de exoneración parte del supuesto inicial, según el cual, el causante directo del dano es un tercero ajeno a las partes intervinientes en el juicio de responsabilidad (...) jurídicamente solo es tercero alguien extraño, por quien no se debe responder, es decir, no vinculado con el sujeto contra el que se dirige la acción resarcitoria”⁷

Por todo lo anterior, la doctrina y jurisprudencia contemporánea⁸ prefieren denominar el fenómeno en cuestión como el “hecho” de un tercero, como causa única en la producción del daño cuya reparación se demanda. Continuando con el estudio jurisprudencial del hecho de la víctima como causal eximente de la responsabilidad, debemos hacer referencia a los pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia, que en fallo del 17 de noviembre de 2020 se refirió a los elementos que estructuran la responsabilidad así:

“(…) El régimen de responsabilidad por las actividades peligrosas es singular y está sujeto a directrices específicas en su etiología, ratio y fundamento. Por su virtud, el fundamento y

⁶ Consejo de Estado. Sección Tercera. Sentencia del 24 de marzo de 2011. Radicado 66001-23-31-000-1998-00409-01 (19067) MP.Mauricio Fajardo Gómez

⁷ZAVALA DE GONZÁLEZ, Matilde. Actuaciones por daños. Ed. Hammurabi, BA. Pág. 172. Del artículo de PATIÑO. Héctor. Las causales exonerativas de la responsabilidad extracontractual

⁸ Corte suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 16 de diciembre de 2010. Expediente 1989-00042 M.P. Arturo Solarte Rodríguez

*critorio de imputación de la responsabilidad es el riesgo que el ejercicio de una actividad peligrosa comporta por el peligro potencial e inminente de causar un daño a los bienes e intereses tutelados por el ordenamiento. La culpa no es elemento necesario para estructurar la responsabilidad por actividades peligrosas ni para su exoneración; no es menester su demostración, ni tampoco se presume; el damnificado tiene la carga probatoria exclusivamente de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad; y, el autor de la lesión, la del elemento extraño, o sea, la fuerza mayor o caso fortuito, **la participación de un tercero o de la víctima que al actuar como causa única o exclusiva del quebranto, desde luego, rompe el nexo causal y determina que no le es causalmente atribuible, esto es, que no es autor** (...)”⁹ (Subrayado y negrilla fuera del texto)*

En el mismo pronunciamiento del 17 de noviembre de 2020, la corte indicó lo siguiente:

(...) La visión del asunto contenida en dicha providencia se traduce en una verdad inobjetable: si no existe nexo causal entre el daño y el actuar del demandado, resulta indudable que en ese evento no pudo mediar culpa o dolo de su parte, dado que, finalmente, a nadie puede atribuirse falta alguna por un hecho que no tiene ninguna relación con su conducta (...)¹⁰ (Subrayado y negrilla fuera del texto)

Teniendo en cuenta los pronunciamientos jurisprudenciales expuestos, es dable concluir que de mediar un “hecho exclusivo de un tercero”, el presunto responsable y generador del daño será exonerado de cualquier tipo de responsabilidad. Para el caso que nos ocupa, es totalmente claro que en caso de que la conducta de la señora Diana Vanessa Angulo Franco, fuese el único factor relevante y adecuado que incidió en las lesiones sufridas por la joven María Camila Angulo Franco, recordando que para el momento del accidente era menor de edad, resultará jurídicamente inviable imputarle responsabilidad a los Demandados. Por tanto, deberá el honorable juez proceder a negar las pretensiones de la demanda.

En primer lugar, el Despacho debe advertir que tal como se ha descrito reiteradamente, se encuentra probado que la señora Diana Vanessa Angulo Franco para el momento del accidente se encontraba violando sendas normas del código nacional de tránsito, exponiéndose a un riesgo y más y grave aún exponiendo a lesiones e incluso la muerte a una menor de edad, que en razón a su relación sanguínea, se encontraba bajo su responsabilidad, por lo que se reitera que la señora Diana Vanessa Angulo Franco no contaba con licencia de conducción para operar la motocicleta en la cual se accidentó, el automotor en que se desplazaba tampoco acataba la normatividad de tránsito, lo que indica que no se encontraba certificado un adecuado funcionamiento de sus sistema de frenos, sistema mecánico y de seguridad en general, lo que definitivamente influyó en la ocurrencia del accidente, por cuanto se desconoce si la demandante logró disminuir velocidad en aproximación a intersección, dar aviso de su presencia en la vía o siquiera reacción dado el estado del automotor en que se desplazaba.

Se valida entonces en el IPAT, que la motocicleta de placa FSW75E, manipulada por una persona que no contaba con licencia de conducción no portaba SOAT ni Tecno mecánica Vigente, lo cual constituye más que una infracción de tránsito, un total desconocimiento del riesgo propio y para los demás actores

⁹ Corte Suprema de Justicia. SC4420-2020. Expediente 2011-00093. M.P. Luis Armando Tolosa Villabona.

¹⁰ Ibidem

viales, puesto que la autoridad de tránsito fue imposibilitada por la demandante de conocer el verdadero estado del automotor y por ende acreditar que cumplía con normas básicas de seguridad para actividad tan peligrosa como lo es la conducción.

REG. VEHICULO				
PLACA	PLACA REMOLQUE / REM	PAIS/DEPARTAMENTO	MARCA	LINEA
FSW75E		COLOMBIA CETRAJERO	Jamaica	T115
EMPRESA		MATRICULADO EN	PARCULIZADO EN	
NET		Flavio	A DISPOSICION DE	
REV. TEC. MEC.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
PORTA SOAT	<input checked="" type="checkbox"/>	PORTA NO		
TA SEG. RESPONSABILIDAD CIVIL CONTRACTUAL	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		

Lo anterior contribuyó en gran medida a la ocurrencia del accidente, sin olvidar que luego del análisis técnico de la información se evidencia que de acuerdo al informe IPAT, el vehículo tipo motocicleta no contaba con SOAT ni revisión técnica mecánica, lo que constituyó una grave infracción a las normas de tránsito, por cuando la demandante no puede acreditar que dicho automotor se encontraba en buenas condiciones, lo que concurre a la posibilidad de diversas fallas mecánicas y en general al acaecimiento del accidente de tránsito.

Con las conclusiones anteriores, claramente apreciables de acuerdo al Informe Policial de Accidente de Tránsito IPAT, se evidencia que el accidente de tránsito se generó por la maniobra desplegada por la señora Diana Vanessa Angulo Franco, conductora del vehículo tipo motocicleta de placa FSW75E quien por las razones ya expuestas, fue la responsable de las lesiones que presentó la joven María Camila Angulo Franco, demandante dentro de este asunto, configurándose así el hecho de un tercero, acreditando que la única causal para la ocurrencia del accidente correspondió a la acción desplegada por la señora Diana Vanessa, al respecto el Código Nacional de Tránsito refiere:

“ARTÍCULO 19. REQUISITOS. Podrá obtener una licencia de conducción para vehículos automotores quien acredite el cumplimiento de los siguientes requisitos:

Para vehículos particulares:

a) Saber leer y escribir.

b) Tener dieciséis (16) años cumplidos.

c) **Aprobar exámenes teórico y práctico de conducción, practicados por Instituciones de Educación Superior de Naturaleza Pública reconocidas por el Ministerio de Educación Nacional, que garanticen cobertura nacional para la realización de las pruebas, en el marco de la autonomía de las mismas y de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte, cuyo resultado será registrado en el sistema RUNT.**

En las entidades territoriales donde las Instituciones de Educación Superior mencionadas en el inciso anterior, no puedan garantizar la cobertura en la prestación de dicho servicio, se facultará a las autoridades públicas y entidades privadas que estén registradas en el sistema

RUNT, para practicar los exámenes de que trata este literal, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte.

En todo caso las entidades competentes suscribirán contratos donde se establezcan claramente las condiciones para realizar los exámenes.

d) Obtener un certificado de capacitación en conducción otorgado por un centro de enseñanza automovilística registrado ante el RUNT.

e) Presentar certificado en el que conste una condición idónea, la aptitud física, mental y de coordinación motriz para conducir, expedido por una Institución Prestadora de Salud o por un Centro de Reconocimiento de conductores registrado ante el RUNT.

Para vehículos de servicio público:

Se exigirán los requisitos anteriormente señalados. Adicionalmente, tener por lo menos dieciocho (18) años cumplidos y, aprobar el examen teórico y práctico de conducción para vehículos de servicio público, de conformidad con la reglamentación que expida el Ministerio de Transporte. Las condiciones para la prestación de este servicio serán las mismas previstas en el literal c) del inciso anterior.

Los conductores de servicio público deben recibir capacitación y obtener la certificación en los temas que determine el Ministerio de Transporte.

PARÁGRAFO. *Para obtener la licencia de conducción por primera vez, o la recategorización, o la renovación de la misma, se debe demostrar ante las autoridades de tránsito la aptitud física, mental y de coordinación motriz, valiéndose para su valoración de los medios tecnológicos sistematizados y digitalizados requeridos y los instrumentos médicos pertinentes que permitan medir y evaluar dentro de los rangos establecidos por el Ministerio de Transporte, según los parámetros y límites internacionales entre otros: las capacidades de visión y orientación auditiva, la agudeza visual y campimetría, los tiempos de reacción y recuperación al encandilamiento, la capacidad de coordinación entre la aceleración y el frenado, la coordinación integral motriz de la persona, la discriminación de colores y la franja horizontal y vertical.” (Negrita fuera de texto)*

Así, en caso de que se demuestre, como se podrá evidenciar en el transcurso del proceso, que la causal por la que se generó el accidente es atribuible a la conductora del vehículo de placa FSW75E tipo motocicleta, es decir la señora Diana Vanessa Angulo Franco, no podría entonces ser imputable al conductor del vehículo VBZ704, ni mucho menos al propietario de dicho vehículo o a la aseguradora, responsabilidad alguna. Por cuanto es evidente que las circunstancias que rodearon el hecho se encontraban en la esfera del dominio de un tercero y no de los demandados.

En conclusión, tras el análisis fáctico y normativo del caso, encontramos que si se llegase a demostrar que fue el vehículo FSW75E el cual realizó una conducta imprudente, negligente e irresponsable, es completamente evidente ante la lógica fáctica de los sucesos ocurridos, se declare que frente a las pretensiones de la joven María Camila Angulo Franco, la causante del accidente de tránsito fue justamente un tercero por su actuar imprudente, irresponsable y negligente y en consecuencia, se deberán negar la totalidad de las pretensiones de la demanda.

Por lo anterior, solicito señor Juez se tenga como probada esta excepción

3. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD A CARGO DE LOS DEMANDADOS POR LA FALTA DE ACREDITACIÓN DEL NEXO CAUSAL.

En este caso, no podrá atribuirse responsabilidad al asegurado comoquiera que no existe prueba cierta que acredite la ocurrencia de los hechos alegados o de cualquier perjuicio pretendido por la parte demandante, como resultado de las supuestas acciones tomadas por el conductor del vehículo con placa VBZ704. Pues como ya se indicó desde la contestación a los hechos de esta demanda, las circunstancias de tiempo, modo y lugar y en especial la dinámica del accidente no han sido acreditadas mediante ninguna prueba fehaciente que pruebe la responsabilidad civil deprecada, pues la parte activa del litigio fundamenta su escrito petitorio única y exclusivamente en un Informe de Accidente de Tránsito, el cual **no atribuye** la causa del accidente a la pasiva. Por esa razón, no podrá entenderse probado un nexo causal entre los daños alegados por la parte demandante y las conductas desplegadas por el conductor del vehículo de placa VBZ704, pues no existe prueba así sea sumaria que demuestre un actuar imputable de responsabilidad al señor CARLOS ANDRÉS VANEGAS RIVEROS en calidad de conductor del vehículo de placas VBZ704. Así, es evidente que se espera endilgar responsabilidad al asegurado por el mero decir de la parte demandante, cuando a diferencia de lo planteado en la demanda, lo que se advierte es una clara injerencia en el actuar de la propia víctima, es decir la señor Diana Vanessa Angulo Franco frente a sus propias lesiones, y el hecho de un tercero en la ocurrencia de los daños alegados por la joven María Camila Angulo Franco, por cuando las lesiones que ella sufrió fueron ocasionadas por su madre, es decir la señora Diana Vanessa Angulo.

En este punto vale la pena recordar que la teoría de la causalidad aplicada en Colombia es la causalidad adecuada. A diferencia de la teoría de la equivalencia de condiciones en la que simplemente basta aplicar el método de la supresión mental hipotética y determinar si el hecho final se hubiere o no presentado o no con determinada actuación. La teoría de la causa adecuada exige un filtro adicional en el que de esa multiplicidad de causas que se pueden presentar en el mundo fenomenológico que pueden ser condiciones sine qua non, serán relevantes solo aquellas de las que fuera previsible el resultado. Doctrina autorizada y reciente confluente en aseverar que para declarar la responsabilidad es necesaria la concurrencia de tres elementos indispensables, a saber:

“Es sabido que para que exista la responsabilidad se requieren tres elementos absolutamente indispensables y necesarios: el daño, el hecho generador del mismo y un nexo de causalidad que permita imputar el daño a la conducta (acción u omisión) del agente generador. El nexo causal se entiende como la relación necesaria y eficiente entre el hecho generador del daño y el daño probado. La jurisprudencia y la doctrina indican que para poder atribuir un resultado a una persona y declararla responsable como consecuencia de su acción u omisión, es indispensable definir si aquel aparece ligado a esta por una relación de causa- efecto. Si no es posible encontrar esa relación mencionada, no tendrá sentido alguno continuar el juicio de responsabilidad.”¹¹

En ese sentido, debe precisarse que una actividad peligrosa es la que puede producir daños incontrolables

¹¹ Patiño, Héctor. “Responsabilidad extracontractual y causales de exoneración. Aproximación a la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano”. Revista Derecho Privado N14. Universidad Externado de Colombia. 2008

e imprevisibles, tal como lo advierte la sociología en las situaciones impredecibles, incalculables y catastróficas de la sociedad del riesgo contemporánea. De ahí, que la obligación de indemnizar en este tipo de responsabilidad no puede depender del control o la previsión de las consecuencias, pues ello supondría imponer un criterio de imputación basado en la previsión de lo imprevisible.

Ahora bien, la labor persuasiva debe orientarse a establecer cuál de todos los comportamientos antijurídicos ocasionó el daño. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha manifestado lo siguiente:

“(...) aquél que de acuerdo con la experiencia (las reglas de la vida, el sentido común, la lógica de lo razonable) sea el más ‘adecuado’, el más idóneo para producir el resultado, atendidas por lo demás, las específicas circunstancias que rodearon la producción del daño y sin que se puedan menospreciar de un tajo aquellas circunstancias azarosas que pudieron decidir la producción del resultado, a pesar de que normalmente no hubieran sido adecuadas para generarlo”

En efecto, el concepto de peligrosidad de la actividad, empero, no ha sido definido bajo un criterio jurídico general, sino que suele explicarse mediante ejemplos tales como la velocidad alcanzada, la naturaleza explosiva o inflamable de la cosa utilizada, la energía desplegada o conducida, entre otras situaciones cuya caracterización ha sido delimitada por la jurisprudencia. Del mismo modo, en este punto es menester aclarar que la responsabilidad civil extracontractual supone resarcir un daño generado con ocasión de un hecho que no tiene origen en un incumplimiento obligacional, sino que opera entre quienes ha vinculado únicamente el azar. En particular, la responsabilidad civil extracontractual en actividades peligrosas, como sucede con la conducción de vehículos automotores, supone (i) que la víctima demuestre el ejercicio de la actividad peligrosa, el daño y la relación de causalidad entre ambos; (ii) que el presunto responsable solo podrá exonerarse, salvo norma en contrario, demostrando la existencia de alguna causal eximente de responsabilidad que rompa el nexo causal; y (iii) que en los casos de actividades peligrosas concurrentes el juez deba examinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se produce el daño para establecer el grado de responsabilidad que corresponde a cada actor.

De manera que en la investigación dirigida a establecer si fue destruido el nexo causal, entre los varios antecedentes que en forma hipotética ocasionaron el daño, únicamente deben dejarse los que, atendiendo los criterios dichos en la jurisprudencia, tuvieron la aptitud para producirlo, mas no los que simplemente emergieron como factores meramente circunstanciales. En el caso concreto, es menester señalar que la parte demandante en el presente asunto no acreditó los elementos para estructurar un juicio de responsabilidad, puesto que no existe prueba alguna que acredite relación de causalidad entre el supuesto perjuicio alegado y la actuación del conductor del vehículo de placas VBZ704. Por ende, la falencia de este requisito indispensable destruye cualquier posibilidad de erigir válidamente un cargo de responsabilidad en contra de la pasiva.

Así las cosas, para que se configure la responsabilidad civil extracontractual es necesario que concurren los siguientes elementos: i) una conducta humana, positiva o negativa, por regla general antijurídica, ii) un daño o perjuicio, esto es, un detrimento, menoscabo, deterioro, que afecte bienes o intereses ilícitos de la víctima, vinculados con su patrimonio, con los bienes de su personalidad, o con su esfera espiritual o afectiva, iii) una relación de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien

se imputa su producción o generación y, iv) un factor o criterio de atribución de la responsabilidad, por regla general de carácter subjetivo (dolo o culpa). Presupuestos que no se reúnen en el presente caso.

Al respecto, es pertinente señalar que, tras el análisis de las pruebas aportadas con la demanda, no se encontró en el expediente ningún elemento que permita demostrar o acreditar la ocurrencia de los hechos alegados en el escrito introductorio en relación con la presunta responsabilidad del conductor del vehículo de placas VBZ704. El único documento allegado por la parte demandante, el Informe de Accidente de Tránsito, no establece que los hechos ocurridos el 5 de septiembre de 2018 hayan sido ocasionados por la conducta del conductor del vehículo en mención. De manera que, la parte demandante intenta atribuir responsabilidad a los demandados sin ninguna prueba idónea que demuestre que la hipótesis del accidente efectivamente corresponde a la causa adecuada del mismo.

Respecto al valor probatorio de los informes policiales de accidente de tránsito, ya se ha pronunciado la Corte Constitucional en sentencia C-429 de 2003, en donde indicó que dicho documento se presume auténtico en relación con la persona que lo elaboró y su fecha. Sin embargo, su contenido puede ser desvirtuado en el respectivo proceso por lo que es una mera hipótesis, pues el agente de tránsito que lo elabora no presenció el accidente, veamos:

*“(…) Es preciso tener en cuenta también, que un informe de policía al haber sido elaborado con la intervención de un funcionario público formalmente es un documento público y como tal se presume auténtico, es decir, **cierto en cuanto a la persona que lo ha elaborado, manuscrito o firmado, mientras no se compruebe lo contrario mediante tacha de falsedad, y hace fe de su otorgamiento y de su fecha; y, en cuanto a su contenido es susceptible de ser desvirtuado en el proceso judicial respectivo.***

Este informe de policía entonces, en cuanto a su contenido material, deberá ser analizado por el fiscal o juez correspondientes siguiendo las reglas de la sana crítica y tendrá el valor probatorio que este funcionario le asigne en cada caso particular al examinarlo junto con los otros medios de prueba que se aporten a la investigación o al proceso respectivo, comoquiera que en Colombia se encuentra proscrito, en materia probatoria, cualquier sistema de tarifa legal (…)”

Es claro entonces que, según la Corte Constitucional, de dicho documento sólo se puede presumir autenticidad de la persona que lo elabora y el momento en que lo hace. No obstante, el resto de información está sujeta a una futura acreditación por cuanto la persona que realiza el IPAT y el croquis, no estuvo presente en el momento en que ocurrieron los hechos. Por lo tanto, no fue un testigo presencial y el diligenciamiento de dicho informe se hace con base en el seguimiento de lo preceptuado en el artículo 149 de la Ley 769 de 2002, el cual dispone que:

“(…) ARTÍCULO 149. DESCRIPCIÓN. En los casos a que se refiere el artículo anterior, el agente de tránsito que conozca el hecho levantará un informe descriptivo de sus pormenores, con copia inmediata a los conductores, quienes deberán firmarlas y en su defecto, la firmará un testigo.

El informe contendrá por lo menos:

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos.

Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones.

Relación de los medios de prueba aportados por las partes.

Descripción de las compañías de seguros y números de las pólizas de los seguros obligatorios exigidos por este código.

En todo caso en que produzca lesiones personales u homicidio en accidente de tránsito, la autoridad de tránsito deberá enviar a los conductores implicados a la práctica de la prueba de embriaguez, so pena de considerarse falta disciplinaria grave para el funcionario que no dé cumplimiento a esta norma.

El informe o el croquis, o los dos, serán entregados inmediatamente a los interesados y a la autoridad instructora competente en materia penal.

El funcionario de tránsito que no entregue copia de estos documentos a los interesados o a las autoridades instructoras, incurrirá en causal de mala conducta.

Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes (...)."

Es notorio entonces, que el funcionario que diligencia el IPAT y el croquis lo hace en cumplimiento de lo reglado por la norma de tránsito y la información que deposita en dicho documento se circunscribe estrictamente a lo que la Ley ordena que debe ir diligenciado al momento de elaborar el informe. El artículo 146 de la norma ibídem, reza que:

"(...) ARTÍCULO 146. CONCEPTO TÉCNICO. Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento

de la vía gubernativa.

En los procesos que versen sobre indemnización de perjuicios causados por accidentes de tránsito, una vez dictada la sentencia de primera instancia, sin importar que ésta sea apelada o no, el juez decretará el embargo y secuestro del vehículo con el cual se causó el daño, siempre y cuando el solicitante preste caución que garantice el pago de los perjuicios que con la medida puedan causarse. Tal medida se registrará por las normas del libro IV del Código de Procedimiento Civil, y se levantará si el condenado presta caución suficiente, o cuando en recurso de apelación se revoque

la sentencia condenatoria o si el demandante no promueve la ejecución en el término señalado en el artículo 335 del Código de Procedimiento Civil, o si se extingue de cualquier otra manera la obligación.

Las medidas cautelares y las condenas económicas en esta clase de procesos, no podrán exceder el monto indexado de los perjuicios realmente demostrados en él mismo (...)

Una vez hecho el recuento normativo al respecto, se analizará el caso particular. Dentro de los medios de prueba que se aportan al proceso obra el IPAT del 5 de diciembre de 2018. En este sentido, lo primero que se debe manifestar es que, a diferencia de lo anterior, el efecto que tiene el análisis del Informe Policial de Accidente de Tránsito atribuye permite identificar una causa del accidente la hipótesis 157 “por determinar”, la cual se atribuyó al conductor del vehículo de placa VBZ704.

Sin embargo, esta hipótesis no subsistirá luego de realizar un ejercicio de análisis del IPAT, por cuanto de la información que allí reposa se evidencia que tras la llegada del agente de tránsito al lugar de los hechos, lo único que pudo evidenciar fue la posición final de los vehículos involucrados en el accidente, sin embargo, no obra algún otro elemento que permita acreditar, (i) que el vehículo de placa VBZ704 haya realizado un giro prohibido, por cuanto lo único que se evidencia es que el automotor quedó ubicado sobre la Calle 20, ruta por la que efectivamente debía circular, (ii) no hay registro alguno que evidencie la presencia de señales reglamentarias que indiquen la prohibición de realizar giro a la izquierda, esto en el hipotético caso que dicha maniobra hubiere ocurrido. Con lo anterior lo único que puede identificarse del IPAT es que se presentó una colisión en una intersección semafórica entre dos actores viales, sin embargo de ninguna manera de forma técnica y verídica puede acreditarse el recorrido previo de cada vehículo, con esto le corresponderá al despacho estudiar de fondo, dada las obligaciones de los actores viales frente al ingreso a una intersección.

Así, en caso de que se demuestre, como se podrá evidenciar en el transcurso del proceso, que la causal por la que se generó el accidente es atribuible al conductor del vehículo de placa FSW75E conducido por la señora Diana Vanessa Angulo no podría entonces ser imputable al conductor del vehículo VBZ704, ni mucho menos al propietario de dicho vehículo o a la aseguradora, responsabilidad alguna. Por cuanto es evidente que las circunstancias que rodearon el hecho se encontraban en la esfera del dominio de la demandante y no de los demandados.

En consecuencia, debido a que correspondía al demandante probar los fundamentos de sus peticiones,

en específico, demostrar la causa efectiva del evento de 5 de diciembre de 2018 y en vista de la ausencia probatoria que milita en el libelo genitor, de manera consecuente deberán ser negadas todas y cada una de las pretensiones incoadas en la demanda.

Igualmente debe resaltarse, como en el presente caso es manifiesto que no hay prueba técnica dentro de las pruebas de la demanda que demuestren que el accidente ocurrido tuvo una causa imputable al conductor del vehículo de placa VBZ704. Por ende, es claro que no existe nexo causal entre la presunta conducta lesiva que se pretende endilgar al conductor del vehículo VBZ704 y el daño alegado, esto pues claramente media la actuación de la propia víctima frente a sus lesiones y de un tercero frente a las lesiones presentadas por la joven María Camila Angulo, como ya se ha explicado, es decir es la conductora de la motocicleta quien con su accionar, ocasionó el daño alegado. Así las cosas, es jurídicamente improcedente atribuir cualquier tipo de responsabilidad al conductor del vehículo de placa VBZ704.

En conclusión, para configurarse los elementos de la responsabilidad civil era necesario que la parte demandante demostrara i) el hecho generador culposo, ii) el daño y iii) nexo de causalidad entre el daño sufrido por la víctima y la conducta de aquel a quien se imputa su producción o generación. Sin embargo, verificados los elementos probatorios que obran dentro del expediente no se logra establecer que se reúnan los elementos de la responsabilidad civil dentro del presente asunto, puesto que no existe prueba idónea que acredite un nexo de causalidad entre la conducta presuntamente desplegada por el conductor del vehículo de placa VBZ704 y los daños que hoy reclama el demandante. Situación que implicará claramente que el despacho absuelva de toda responsabilidad a la parte pasiva de la litis.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción

4. ANULACIÓN DE LA PRESUNCIÓN DE CULPA COMO CONSECUENCIA DE LA CONCURRENCIA DE ACTIVIDADES PELIGROSAS.

Si bien en el presente caso no se encuentra probada responsabilidad de la conductora del vehículo de placa VBZ704 frente a la ocurrencia del accidente de tránsito como aduce la parte demandante. De manera subsidiaria, el Despacho deberá tomar en consideración que el caso concreto deberá analizarse a la luz del régimen de culpa probada, habida cuenta que corresponde al extremo actor probar el daño y la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado, atendiendo a la anulación de la presunción de culpa por la concurrencia de actividades peligrosas. Lo anterior por cuanto ambos conductores desempeñaban una actividad peligrosa, pues previo a la colisión, los dos vehículos se hallaban en marcha.

Siendo así, en la misma línea de la concurrencia de culpas, es de común conocimiento que, cuando se presenta un daño a un tercero en el ejercicio de la conducción de vehículos automotores, la responsabilidad se configura a la luz de las actividades peligrosas. En efecto, ha dicho la jurisprudencia en Sentencia de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Civil y Agraria, MP. William Namén Vargas, del 24 de agosto de 2009 lo siguiente:

“explicó la sala, el juzgador valorará la conducta de las partes en su materialidad objetiva y, en caso de encontrar probada también una culpa o dolo del sujeto,

*establecerá su relevancia no en razón al factor culposo o doloso, sino al comportamiento objetivamente considerado en todo cuanto respecta a su incidencia causal*¹².

Es decir que, el Juez debe analizar la conducta de todos los intervinientes, víctimas o no, para así verificar si su comportamiento tiene incidencia en la ocurrencia de los hechos. Así mismo la Corte sostuvo que *“No es que las actividades peligrosas encarnen de suyo la “culpa”*”. El ejercicio de una actividad de esta naturaleza podrá desplegarse, aún con todo el cuidado o diligencia exigible y también sin ésta.

Empero, no escapa a la Corte la posibilidad de una conducta culposa o dolosa del autor, de la víctima o de uno y otro en el ejercicio de una actividad peligrosa; así en los daños generados con la colisión de vehículos, uno de los conductores podrá infringir las normas de tránsito, omitir las revisiones obligatorias, desplazarse a alta velocidad, en zona prohibida, atropellar deliberadamente un peatón o al otro automotor, entre otros, y, el otro, incurrir en similares comportamientos. En tales hipótesis, esas conductas apreciadas en su exacto sentido encarnan la exposición o elevación de los riesgos o peligros del ejercicio de la actividad peligrosa, los deberes de precaución o los inherentes a la posición de garante, según la perspectiva que se acoja, más no desplazan la responsabilidad al régimen general de la culpa, desde que ésta ninguna relevancia ostenta para estructurarla ni excluirla. La conducta, sea o no culposa o dolosa, se apreciará objetivamente en el contexto del ejercicio de la actividad peligrosa y la secuencia causal del daño según el marco fáctico de circunstancias y los elementos probatorios, para determinar si es causa única o concurrente y, por ende, excluir o atenuar el deber indemnizatorio. No es que se valore la culpa o el dolo en cuanto tales, ni en consideración al factor subjetivo, sino la conducta en si misma dentro del contexto del ejercicio de una actividad peligrosa según el marco de circunstancias fácticas y los elementos probatorios.

Así las cosas, el régimen aplicable en tratándose de actividades peligrosas, no enmarca siempre una acción maliciosa y voluntaria, por el contrario, pueden ocurrir fruto de coincidencias o algún tipo de contingencia que suelen pasar con frecuencia, por tanto no es procedente imputar responsabilidad por el simple hecho de ejercer una actividad peligrosa, sino que debe hacerse un análisis exhaustivo de los elementos que pueden tener algún tipo de inferencia en la ocurrencia, así mismo sostiene la Honorable Corte Suprema de Justicia que *“La supuesta presunción de culpa por el mero ejercicio de una actividad peligrosa, carece de todo fundamento lógico y normativo. Legal, porque ninguna parte del artículo 2356 del Código Civil, siquiera menciona presunción alguna. Lógico, porque cualquier actividad humana, y en especial, la peligrosa, puede desplegarse con absoluta diligencia o cuidado, o sea, sin culpa y también incurriéndose en ésta. De suyo, tal presunción contradice elementales pautas de experiencia y sentido común, al no ajustarse a la razón presumir una culpa con el simple ejercicio de una actividad que de ordinario como impone la razón se desarrolla con diligencia, prudencia y cuidado”*.

La doctrina ha sido clara en establecer que la colisión de actividades peligrosas se presenta cuando el daño es el resultado de la conjunción de dos culpas presuntas, es decir, que se haya producido en el ejercicio por parte de ambos adversarios de actividades, o provengan de cosas, de las cuales la jurisprudencia desprenda presunciones de culpa o con la intervención de varias personas sujetas a la

¹² Sentencia de la Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Civil y Agraria, MP. William Namén Vargas, del 24 de agosto de 2009. Expediente 11001-3103-038-2001-01054-01.

dependencia de otras.

Así las cosas, en el presente caso nos encontraríamos frente a la responsabilidad con culpa probada prevista en el artículo 2341 del Código Civil, tal como lo ha establecido la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en los fallos, cuyos apartes cito a continuación:

“La parte demandante debió probar la culpa de los demandados, por tratarse de una colisión entre dos vehículos bus y tractocamión que transitaban bajo la presunción de actividades peligrosas, para el caso la presunción de culpa se neutraliza y lo aplicable no sería el artículo 2356 del Código Civil sino el 2341 de culpa probada.”¹³

“Como en este caso el accidente se produjo cuando ambas partes desarrollaban actividades de ese tipo, se eliminaba cualquier presunción de culpa, lo que a su turno implicaba que la acción no se examinara a la luz del artículo 2356 del C. Civil, sino del 2341 del ibidem, evento en el cual el demandante corría con la carga de demostrar todos los elementos integrantes de la responsabilidad civil extracontractual.”¹⁴

“[...] actividad desplegada por las partes de las denominadas peligrosas, razón por la cual las presunciones sobre su culpa se neutralizan. Por ello, habrá que responsabilizar a quien se le demuestre una culpa efectiva.

(...)

La presunción de culpa, ninguna utilidad normativa o probatoria comporta al damnificado, tampoco es regla de equidad y menos de justicia, pues su único efecto jurídico es eximir de la probanza de un supuesto fáctico por completo ajeno al precepto, no menester para estructurar la responsabilidad, ni cuya probanza contraria es admisible, cuando toda presunción, salvo la iuris et de iuris que exige texto legal expreso, es susceptible de infirmar con la demostración de la diligencia y cuidado. Por tanto el juzgador con sujeción a la libre convicción y la sana crítica valorará los elementos probatorios para determinar cuál de las actividades peligrosas concurrentes es la causa del daño y la incidencia de la conducta de la víctima en la secuencia causal, asignando, en todo o en parte, a uno o a ambos sujetos la responsabilidad según su participación, a cuyo efecto, imputado a la actividad de una sola parte, ésta es responsable por completo de su reparación y si lo fuere a ambas, cada una lo será en la medida de su contribución. En otros términos, cuando la actividad peligrosa del agente es causa exclusiva del daño, éste será responsable en su integridad; contrario sensu, siéndolo la ejercida por la víctima, ninguna responsabilidad tendrá; y, si aconteciere por ambas actividades, la del agente y la de la víctima, como concausa, según su participación o contribución en la secuencia causal del daño, se establecerá el grado de responsabilidad que le asiste y habrá lugar a la dosificación o reducción del quantum indemnizatorio”¹⁵

¹³ Corte Suprema de Justicia Sentencia 6527 de 16 de marzo de 2001. MP Silvio Fernando Trejos Bueno.

¹⁴ Corte Suprema de Justicia Sentencia 5462 de 2000 MP José Fernando Ramírez Gómez.

¹⁵ Corte Suprema de Justicia Sentencia 3001 de 31 de enero de 2005 MP Pedro Octavio Munar Cadena.

Entonces para fundamentar un proceso de responsabilidad civil, no basta con solicitar una imputación objetiva entre el resultado y el acto causal, se requiere que el acto sea negligente o imprudente, y lo será aquél que infringe el deber de cuidado objetivamente exigible en la relación de la actividad peligrosa, para el caso, este deber de cuidado viene determinado por reglas especiales de tránsito y circulación de vehículos automotores.

En conclusión, tal como se desprende de la narración de los hechos de la demanda, tanto el actor como la conductora del vehículo de placas FSW75E estaban en el ejercicio de una actividad peligrosa, consistente en la conducción de un vehículo automotor, por lo tanto, concurren al suceso dañoso ejerciendo similares actividades peligrosas y en tal supuesto, se aniquilan mutuamente, forzando al actor a demostrar la culpa del conductor del vehículo asegurado.

Por lo que respetuosamente solicito al despacho tener probada esta excepción

5. INEXISTENCIA DE RESPONSABILIDAD POR LA NO ACREDITACIÓN DE LOS ELEMENTOS DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL – EL IPAT NO ES MEDIO DE PRUEBA FEHACIENTE.

Se formula esta excepción por cuanto en el presente proceso es claro que el único medio probatorio con el cual la parte demandante pretende probar la responsabilidad civil del conductor del vehículo de placas VBZ704 es el Informe Policial de Accidente de Tránsito, documento que no tiene virtualidad para endilgar responsabilidad civil. Ello en el entendido de que, por un lado, el agente de tránsito que lo suscribió no fue testigo de los hechos, dado que se presenta en el lugar, de manera posterior a la ocurrencia del evento (cerca de 15 minutos después); y, por el otro, lo que se consigna en estos documentos corresponde a una mera hipótesis (que según la Real Academia Española es la “*suposición de algo posible o imposible para sacar de ello una consecuencia*”). En consecuencia, de lo expresando, no hay lugar a declarar la responsabilidad endilgada a la pasiva por cuanto se carece de material probatorio pertinente, útil y conducente que permita al operador jurídico proferir fallo condenatorio.

Las pretensiones carecen de fundamento, especialmente porque no existe ningún tipo de obligación en cabeza de la señor Carlos Andrés Vanegas Riveros. En la esfera de la responsabilidad civil implorada no se constituyen los elementos necesarios para que la misma sea predicada (daño, conducta culposa desplegada por la parte pasiva y nexo de causalidad), pues en el caso que nos ocupa, de haberse presentado algún tipo de perjuicio, éste se deriva de hechos en los que ninguna injerencia tuvo el demandado.

Igualmente, se debe señalar que en el Capítulo V de la Resolución 11268 de 2012 expedida por el Ministerio de Transporte por la cual se adopta el nuevo Informe Policial de Accidentes de Tránsito IPAT, su manual de diligenciamiento y se dictan otras disposiciones, se indica de forma clara que, en todo caso, la hipótesis que indique el agente de tránsito **NO IMPLICA RESPONSABILIDAD PARA LOS CONDUCTORES:**

Recuerde que la hipótesis indicada no implica responsabilidades para los conductores, sino que expresan las acciones generadoras o intervinientes en la evolución física de un accidente, debidamente fundamentadas mediante la objetividad y el análisis técnico-científico de los elementos materiales de prueba y evidencia física encontrada en el lugar de los hechos.

El marco normativo y el manual de diligenciamiento del IPAT permiten establecer que el informe policial de accidente de tránsito no es un informe pericial, sino un informe descriptivo. Este informe, a su vez, tiene unos criterios de evaluación propios, que no son los establecidos por el Código General del Proceso. Esta evaluación implica, entre otras, que la ratificación del informe debe hacerse según el protocolo establecido en el manual, es decir, que las preguntas planteadas en el proceso deben estar orientadas a establecer si el agente se ciñó al protocolo. Asimismo, el hecho de que el manual del diligenciamiento entienda que el Informe Policial de Accidente de Tránsito puede hacer parte de un proceso, implica que aquel debe ser considerado como un material probatorio, el cual se revisa en conjunto con otras pruebas.

El IPAT no tiene el carácter ni la aptitud legal para brindar conceptos técnicos ni realizar evaluaciones de responsabilidad, toda vez que estos informes tienen parámetros definidos en la ley que imponen un límite restrictivo sobre su contenido y las funciones del agente o policía como informante del suceso. Así pues, el artículo 149 de la ley 769 de 2002 establece el contenido del informe policial de la siguiente manera:

“(…)El informe contendrá por lo menos:

Lugar, fecha y hora en que ocurrió el hecho.

Clase de vehículo, número de la placa y demás características.

Nombre del conductor o conductores, documentos de identidad, número de la licencia o licencias de conducción, lugar y fecha de su expedición y número de la póliza de seguro y compañía aseguradora, dirección o residencia de los involucrados.

Nombre del propietario o tenedor del vehículo o de los propietarios o tenedores de los vehículos.

Nombre, documentos de identidad y dirección de los testigos. Estado de seguridad, en general, del vehículo o de los vehículos, de los frenos, de la dirección, de las luces, bocinas y llantas.

Estado de la vía, huella de frenada, grado de visibilidad, colocación de los vehículos y distancia, la cual constará en el croquis levantado.

Descripción de los daños y lesiones.

Relación de los medios de prueba aportados por las partes

para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito competentes”.

- (Subrayado por fuera de texto).

El artículo 146 de la referida ley contiene los parámetros de competencia y procedimiento que deben observarse a la hora de realizar conceptos técnicos acerca de la responsabilidad derivada de un accidente de tránsito, los cuales no se cumplieron en este caso concreto, como se evidencia de la transcripción de este:

“(…) Las autoridades de tránsito podrán emitir conceptos técnicos sobre la responsabilidad en el choque y la cuantía de los daños. A través del procedimiento y audiencia pública dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la presentación del informe. En caso de requerirse la práctica de pruebas éstas se realizarán en un término no superior a los diez (10) días hábiles, notificado en estrados previo agotamiento de la vía gubernativa.”

De lo reseñado de manera precedente, se deduce necesariamente, que el informe que deben realizar las autoridades de tránsito no incluye, bajo ninguna circunstancia referencia alguna a la responsabilidad de los involucrados, ni siquiera como una posible hipótesis, pues la competencia frente a pronunciamientos de responsabilidad no recae sobre estas autoridades y la realización de conceptos técnicos de responsabilidad están sujetos a procedimientos especiales, cuya ejecución no se acreditó y por ende, fundamentar la responsabilidad de los demandados sobre este tipo de informe carece de legalidad. De este modo, la presente acción carece de elementos de convicción suficientes que lleven al señor juez a determinar que la responsabilidad del evento de tránsito recae en cabeza del conductor del vehículo de placa VBZ704.

En conclusión, en el caso sub examine, la parte demandante pretende atribuir responsabilidad exclusivamente con el Informe Policial de Accidente de Tránsito, el cual contiene una mera hipótesis incapaz de demostrar los elementos estructurales de la responsabilidad a cargo de la parte demandada, razón por la cual el documento no tiene la virtualidad para endilgar responsabilidad alguna a la pasiva, máxime cuando la información que se consigna allí no fue presenciada directamente por el agente de tránsito, con esto es claro que no está acreditada una conducta culposa en cabeza del señor Carlos Andrés Vanegas Riveros, resultando inverosímil el estudio del nexo causal entre la conducta de la señora Diana Vanessa Angulo y el daño reclamado.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

6. SUBSIDIARIA - REDUCCIÓN DE LA INDEMNIZACIÓN COMO CONSECUENCIA DE LA INCIDENCIA DE LA CONDUCTA DE LA VÍCTIMA EN LA PRODUCCIÓN DEL DAÑO

De manera subsidiaria, debe tenerse en cuenta que en el improbable y remoto evento en que se reconocieran una o algunas de las pretensiones esgrimidas por la parte Demandante, debe aplicarse la respectiva reducción de la indemnización. Lo anterior, en proporción a la contribución que tuvo en el accidente la falta de cuidado de la señora Diana Vanessa Angulo. Lo anterior, tal y como aparece probado en el proceso, toda vez que la señora Diana Vanessa Angulo se desplazaba en la motocicleta sin estar autorizada para conducir la motocicleta, y por cuanto además la motocicleta no se encontraba autorizada para ser conducida por cuanto no contaba con revisión tecno mecánica ni SOAT al día. Por las imprudencias expuestas, la propia víctima se expuso a un evidente riesgo que terminó causando sus lesiones por las que hoy los demandantes pretenden un resarcimiento.

Al margen de que ninguna responsabilidad puede atribuirse al señor Carlos Andrés Vanegas Riveros, el Despacho deberá, en el remoto caso de encontrar que existen elementos para estructurar la responsabilidad civil extracontractual a cargo de la parte pasiva, dar aplicación a las disposiciones del

artículo 2357 del Código Civil, en el que se establece la reducción de la indemnización como consecuencia de la participación de la víctima en el hecho dañoso. Es decir, si quien ha sufrido el daño se expuso a él imprudentemente. Tal como aconteció en este caso, puesto que las consecuencias del accidente obedecen única y exclusivamente a la conducta carente de cuidado de la señora Diana Vanessa Angulo. Efectivamente, el Despacho debe establecer un análisis causal de las conductas implicadas en el evento dañoso, a fin de determinar la incidencia de la víctima en la ocurrencia del daño. Lo anterior, a efectos de disminuir la indemnización si es que a ella hubiera lugar, en proporción a su contribución al daño que sufrió.

En efecto, ha indicado la Corte Suprema de Justicia que debe estudiarse el grado de contribución de cada agente en el resultado lesivo:

“(…) La (…) graduación de ‘culpas’ en presencia de actividades peligrosas concurrentes, [impone al] (…) juez [el deber] de (…) examinar a plenitud la conducta del autor y de la víctima para precisar su incidencia en el daño y determinar la responsabilidad de uno u otra, y así debe entenderse y aplicarse, desde luego, en la discreta, razonable y coherente autonomía axiológica de los elementos de convicción allegados regular y oportunamente al proceso con respeto de las garantías procesales y legales.

*Más exactamente, **el fallador apreciará el marco de circunstancias en que se produce el daño, sus condiciones de modo, tiempo y lugar, la naturaleza, equivalencia o asimetría de las actividades peligrosas concurrentes, sus características, complejidad, grado o magnitud de riesgo o peligro, los riesgos específicos, las situaciones concretas de especial riesgo y peligrosidad, y en particular, la incidencia causal de la conducta de los sujetos, precisando cuál es la determinante (imputatio facti) del quebranto,** por cuanto desde el punto de vista normativo (imputatio iuris) el fundamento jurídico de esta responsabilidad es objetivo y se remite al riesgo o peligro (...)”¹⁶(Subrayado y negrilla fuera del texto original)*

En distinto pronunciamiento, la misma Corporación ha determinado que si la negligencia de la víctima incidió para considerar que se expuso imprudentemente al daño, deberá necesariamente realizarse una reducción de la indemnización por mandato del artículo 2357 del Código Civil. Ahora bien, si el hecho de la víctima es generador del daño, ésta será la llamada a soportar las consecuencias de su proceder, librando de esa manera al demandado. Sobre el particular la Corte Suprema de Justicia precisó:

*“(…) Finalmente, cuando ha sido el hecho de la víctima el generador, de manera exclusiva y determinante del daño, será ella la llamada a soportar las consecuencias de su proceder, pues la obligación de resarcir surge del daño causado a otro, no a sí mismo. De ser aquello, **el demandado también puede ser liberado de su responsabilidad o ésta resultar menguada, junto con el monto a resarcir si coparticipo en la producción del resultado nocivo.***

¹⁶ Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 24 de agosto de 2009. Rad. 2001-01054-0130.

En el primer evento entonces, no habrá lugar a inculpación si el demandando demuestra que el actuar de la víctima le resultó extraño, imprevisible e irresistible, esto es, que hubo total ruptura del nexo causal. En la segunda hipótesis, esa atribución será parcial, correspondiéndole al juez, con base en los medios de persuasión y en las circunstancias que rodearon el caso, determinar la magnitud e influencia de esa intervención, al igual que los efectos irradiados al monto indemnizatorio, pues de acuerdo con el artículo 2357 del Código Civil «la apreciación del daño está sujeta a reducción, si el que lo ha sufrido se expuso a él imprudentemente» (...)»¹⁷ (Subrayado y negrilla por fuera del texto original).

En virtud de lo expuesto, será necesario realizar un análisis de la causa del daño, para que el juzgador establezca mediante un cuidadoso estudio de las pruebas, la incidencia del comportamiento desplegado por cada interviniente en los hechos que originaron la reclamación pecuniaria. Ahora bien, como quiera que la responsabilidad del extremo pasivo resultó menguada por la participación determinante de la víctima en la ocurrencia del accidente del 5 de diciembre de 2018, queda completamente claro que este Despacho debe considerar el marco de circunstancias en que se produjo el daño, así como sus condiciones de modo, tiempo y lugar, a fin de determinar la incidencia causal de la conducta de la víctima en la ocurrencia del daño por el cual se solicita la indemnización. Especialmente, deberá considerar que la magnitud de las lesiones presuntamente sufridas por la víctima se deriva del actuar imprudente de la misma al no portar casco de seguridad, y por cuanto además la motocicleta no se encontraba autorizada para ser conducida por cuanto no contaba con revisión tecno mecánica al día, de manera que dicho supuesto fáctico únicamente es atribuible a la víctima.

En ese orden de ideas, al encontrarse acreditado por medio de la prueba representativa que obra en el expediente que la ocurrencia del accidente obedece única y exclusivamente a la conducta carente de cuidado de la señora Diana Vanessa Angulo quien en su condición de motociclista se desplazaba en la motocicleta de placas FSW75E, sin estar capacitada para ello al no contar con licencia de conducción, y por cuanto además la motocicleta no se encontraba autorizada para ser conducida por cuanto no contaba con revisión tecno mecánica al día, declararse que el porcentaje de la causación del daño por parte suya como mínimo es del 70%. En ese sentido, de considerarse procedente una indemnización por los perjuicios deprecados, esta debe ser reducida conforme al porcentaje de participación de la víctima en la ocurrencia del accidente, como mínimo en un 70%.

Por las razones expuestas, solicito respetuosamente declarar probada esta excepción¹.

EXCEPCIONES FRENTE A LAS PRETENSIONES INDEMNIZATORIAS INVOCADAS EN LA DEMANDA

7. IMPROCEDENCIA, FALTA DE MEDIO DE PRUEBA E INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS MATERIALES

Mediante la presente excepción se demostrará al despacho que a la demandante no se le pueden reconocer ninguno de los conceptos indemnizatorios materiales que solicita en la demanda. Lo anterior,

¹⁷ Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 25 de abril de 2018. M.P Luis Alonso Rico Puerta SC1230-2018.

pues frente al lucro cesante debe advertirse que:

- i. No obra dentro del expediente ningún medio de prueba que corrobore, así sea sumariamente, que la señora Diana Vanessa Angulo, con ocasión al hecho del 5 de diciembre de 2018 quedó cesante laboralmente, pues del dictamen de PCL se evidencia que fue dictaminada con un porcentaje del **13,40%** base que fue utilizada por el apoderado del extremo activo para su liquidación, bajo este porcentaje no se avizora que la demandante no pudiera continuar con sus actividades laborales.
- ii. No existe claridad alguna sobre el valor que recibía como presunta remuneración la señora Diana Vanessa Angulo pues no obra en el expediente prueba si quiera sumaria que acredite sus ingresos, por lo tanto, no es posible establecer como los hechos del 5 de diciembre de 2018 afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía la demandante, más aún cuando conforme al dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional, se evidencia que la señora Diana Vanessa Angulo no presenta una incapacidad que le permite continuar devengado sus ingresos regulares.
- iii. Por otro lado, debe hacerse precisión que una vez consultado en el Registro Único de Afiliados (RUAF) no se avizora que la señora Diana Vanessa Angulo haya realizado aportes al Sistema General de Seguridad Social, por lo que es claro que la demandante no percibió ingresos y en tal virtud no será posible adjudicarle por parte de este juzgador suma por concepto de lucro cesante.

Afiliaciones de una Persona en el Sistema

Fecha de Corte: 2025-07-11

INFORMACIÓN BÁSICA					
Número de Identificación	Primer Nombre	Segundo Nombre	Primer Apellido	Segundo Apellido	Sexo
CC 1130803791	DIANA	VANESSA	ANGULO	FRANCO	F

Fecha de Corte: 2025-07-11

AFILIACIÓN A SALUD					
Administradora	Régimen	Fecha Afiliación	Estado de Afiliación	Tipo de Afiliado	Departamento -> Municipio
COOSALUD EPS S.A.	Subsidiado	10/01/2019	Activo	CABEZA DE FAMILIA	SANTIAGO DE CALI

Fecha de Corte: 2025-07-11

AFILIACIÓN A PENSIONES

No se han reportado afiliaciones para esta persona

Fecha de Corte: 2025-07-11

AFILIACIÓN A RIESGOS LABORALES

No se han reportado afiliaciones para esta persona

Fecha de Corte: 2025-07-11

AFILIACIÓN A COMPENSACIÓN FAMILIAR

No se han reportado afiliaciones para esta persona

Fecha de Corte: 2025-07-11

AFILIACIÓN A CESANTIAS

No se han reportado afiliaciones para esta persona

Fecha de Corte: 2025-07-11

El lucro cesante ha sido entendido como una categoría de los perjuicios materiales de naturaleza económica y de contenido pecuniario. Es decir, que puede cuantificarse en una suma de dinero y que consiste en la afectación o menoscabo de un derecho material o patrimonial, reflejado en la ganancia o ingreso que se ha dejado de percibir y que no ingresará al patrimonio de la persona. En otras palabras, se deja de recibir cuando se sufre un daño y puede ser percibido a título de indemnización por las víctimas directas o indirectas cuando se imputa al causante del perjuicio la obligación de reparar.

No obstante, para indemnizar un daño, además de su existencia cierta, actual o futura, es necesaria su

plena demostración en el proceso con elementos probatorios fidedignos e idóneos, como lo son aquellos medios permitidos en el ordenamiento jurídico. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido lo siguiente:

*“(...) en cuanto perjuicio, **el lucro cesante debe ser cierto, es decir, que supone una existencia real, tangible, no meramente hipotética o eventual. (...) Vale decir que el lucro cesante ha de ser indemnizado cuando se afinca en una situación real, existente al momento del evento dañoso, condiciones estas que, justamente, permiten inferir, razonablemente, que las ganancias o ventajas que se percibían o se aspiraba razonablemente a captar dejarán de ingresar al patrimonio fatal o muy probablemente** (...) Por último están todos aquellos “sueños de ganancia”, como suele calificarlos la doctrina especializada, **que no son más que conjeturas o eventuales perjuicios que tienen como apoyatura meras hipótesis, sin anclaje en la realidad que rodea, la causación del daño, los cuales, por obvias razones, no son indemnizables** (...)”¹⁸. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).*

Ahora bien, se debe mencionar que todas las posibles discusiones que pueden emerger frente al particular fueron zanjadas mediante el más reciente pronunciamiento de unificación del Consejo de Estado en la Sentencia No. 44572 del 18 de julio de 2019 proferida por la Sección Tercera, M.P. Carlos Alberto Zambrano. Providencia en la que se elimina la presunción según la cual toda persona en edad productiva percibe al menos un salario mínimo, en tanto contraría uno de los elementos del daño, esto es la certeza. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente **la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos**. En dicho pronunciamiento se manifestó literalmente lo siguiente:

*“(...) La ausencia de petición, en los términos anteriores, así como el **incumplimiento de la carga probatoria dirigida a demostrar la existencia y cuantía de los perjuicios debe conducir, necesariamente, a denegar su decreto**. (...)”*

En los casos en los que se pruebe que la detención produjo la pérdida del derecho cierto a obtener un beneficio económico, lo cual se presenta cuando la detención ha afectado el derecho a percibir un ingreso que se tenía o que con certeza se iba a empezar a percibir, el juzgador solo podrá disponer una condena si, a partir de las pruebas obrantes en el expediente, se cumplen los presupuestos para ello, frente a lo cual se requiere que se demuestre que la posibilidad de tener un ingreso era cierta, es decir, que correspondía a la continuación de una situación precedente o que iba a darse efectivamente por existir previamente una actividad productiva lícita ya consolidada que le permitiría a la víctima directa de la privación de la libertad obtener un determinado ingreso y que dejó de percibirlo como consecuencia de la detención. Entonces, resulta oportuno recoger la jurisprudencia en torno a los parámetros empleados para la indemnización del lucro cesante y, en su lugar, unificarla en orden a establecer los criterios necesarios para: i) acceder al reconocimiento de este tipo de

¹⁸ Corte Suprema de Justicia. Sentencia Rad. 2000-01141 del 24 de junio de 2008.

perjuicio y ii) proceder a su liquidación.

Este pronunciamiento entonces excluye posibilidad alguna de que se reconozca lucro cesante a una persona que, aunque esté en edad productiva, no acredite los ingresos percibidos por el efectivo desarrollo de una actividad económica. Lo anterior, por contrariar el carácter cierto del perjuicio, siendo entonces una utilidad meramente hipotética o eventual. En este orden de ideas, es claro que en ningún caso procede el reconocimiento solicitado por la parte demandante, toda vez que los supuestos perjuicios en los que se fundamentan las pretensiones de la demanda, fueron calculados sin que exista prueba en el plenario que acredite que Diana Vanessa Angulo devengaba \$781.242 para la fecha del accidente y más importante aún, no acredito de ninguna manera que ha dejado de recibir dicho ingreso salarial, por cuando obra en el plenario que ha continuado ejerciendo actividades económicas que le permite tener el mismo ingreso con que gozaba antes del accidente.

De tal suerte, que en el caso sub judice no puede presumirse el lucro cesante a favor de la demandante como consecuencia del suceso que tuvo lugar el 5 de diciembre de 2018, por cuanto no hay prueba fehaciente de ingresos percibidos por la señora Diana Vanessa Angulo, así como tampoco existe prueba fehaciente de la actividad económica desempeñada la demandante para la fecha referida, encontrando una evidente falta probatoria frente al año realmente acaecido.

Así, resulta evidente que para reconocer la indemnización del lucro cesante es necesario, de un lado, estar en presencia de una alta probabilidad de que la ganancia esperada iba a obtenerse y de otro, que sea susceptible de evaluarse concretamente. Sin que ninguna de esas deducciones pueda estar soportada en simples suposiciones o conjeturas, porque de ser así, se estaría en frente de una utilidad meramente hipotética o eventual. De manera que el lucro cesante solo reconocerá cuando obren pruebas suficientes que acrediten que efectivamente la víctima dejó de percibir los ingresos o perdió una posibilidad cierta de percibirlos. En reciente pronunciamiento la Corte Suprema de Justicia manifestó literalmente lo siguiente

*“(…) Esta tipología de daño patrimonial corresponde a la ganancia esperada, de la que se ve privada la víctima como consecuencia del hecho dañoso padecido; desde luego, a condición de que **no sea sólo hipotética, sino cierta y determinada o determinable, y se integra por «todas las ganancias ciertas que han dejado de percibirse o que se recibirían luego, con el mismo fundamento de hecho»**, según lo explicó esta Corporación en CSJ SC, 28 jun. 2000, rad. 5348, reiterada en CSJ SC16690-2016, 17 nov (…)”¹⁹*

Por el mismo sendero, en sentencia CSJ SC11575-2015, 31 ago., la Sala enfatizó que la reparación del lucro cesante lo siguiente:

*“(…) resulta viable en cuanto el expediente registre prueba concluyente y demostrativa de la verdadera entidad y extensión cuantitativa del mismo. **En caso contrario, se impone rechazar por principio conclusiones dudosas o contingentes acerca de las ganancias que se dejaron de obtener apoyadas tales conclusiones en simples esperanzas, expresadas estas en ilusorios cálculos que no pasan de***

¹⁹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. SC 4966 de 2019. Expediente 2011-00298 MP. Luis Alonso Rico.

ser especulación teórica, y no en probabilidades objetivas demostradas con el rigor debido (...) ²⁰ (Subrayado y negrilla fuera del texto original)

Así las cosas, es claro que para que sea reconocido el lucro cesante futuro deberá demostrarse con un mínimo razonable la certeza del daño y el ingreso a obtener. Por tanto, comoquiera que en el caso en concreto no se acreditó la invalidez, no hay certeza del daño y mucho menos del eventual ingreso que percibía la señora Diana Vanessa Angulo para el momento del accidente, no hay lugar a su reconocimiento. Dicho de otra manera, tomando en consideración que la parte actora allegó un dictamen de pérdida de capacidad laboral que en los términos de la Ley 100 de 1993 no acreditan la invalidez para que la señora Diana Vanessa Angulo continuará devengando un salario o algún documento que pruebe la existencia del daño, se torna improcedente el reconocimiento del perjuicio depreca comoquiera que la certeza es un requisito esencial para su condena.

En conclusión, es improcedente el reconocimiento del lucro cesante al no encontrarse acreditado el valor cierto de los ingresos percibidos por el señor Diana Vanessa Angulo para el momento del accidente de tránsito ni tampoco prueba de su actividad económica. Es decir, ante la evidente ausencia de un medio probatorio que acredite el valor de los ingresos en el momento del accidente de tránsito y la actividad económica del señor Angulo es claro que la pretensión encaminada a obtener un reconocimiento por este concepto no está llamada a prosperar.

Por todo lo expuesto, solicito declarar debidamente probada esta excepción.

8. IMPROCEDENCIA, FALTA DE MEDIO DE PRUEBA E INDEBIDA CUANTIFICACIÓN DE LOS PERJUICIOS MATERIALES POR CONCEPTO DE CIRUGIA PLASTICA.

Entre las pretensiones expuestas en la demanda, encontramos que la parte actora solicitó el reconocimiento de daños materiales. En este caso es completamente improcedente reconocimiento alguno de estas solicitudes, toda vez que no obran en el expediente las pruebas conducentes, pertinentes y útiles para acreditar la existencia y cuantía de los perjuicios patrimoniales alegados. Al respecto, obsérvese que el accionante: (i) Intenta probar un daño emergente con una mera cotización, lo cual resulta abiertamente improcedente, pues esta no da cuenta de que en efecto se haya pagado suma alguna por ese valor, o que haya una verdadera necesidad de dichas reparaciones, por lo cual resulta abiertamente improcedente estimar algún valor por un dinero que no ha salido del patrimonio de la demandante.; y (ii) no se aportó junto con el libelo gestor prueba que permita dar cuenta de los daños acaecidos para la necesidad de dicho emolumento como lo es una cirugía estética.

Frente al daño emergente, es claro que la parte Demandante tenía entre sus mandatos como parte actora, toda la carga probatoria sobre los perjuicios deprecados en la demanda. Por lo tanto, la cuantía de los daños por los cuales se está exigiendo una indemnización deberán estar claramente probados a través de los medios idóneos que la ley consagra en estos casos. La honorable Corte Suprema de Justicia ha definido el daño emergente en los siguientes términos:

“De manera, que el daño emergente comprende la pérdida misma de elementos

²⁰ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil SC11575.2015

patrimoniales, las erogaciones que hayan sido menester o que en el futuro sean necesarios y el advenimiento de pasivo, causados por los hechos de los cuales se trata de deducirse la responsabilidad.

*Dicho en forma breve y precisa, **el daño emergente empobrece y disminuye el patrimonio, pues se trata de la sustracción de un valor que ya existía en el patrimonio del damnificado; en cambio, el lucro cesante tiende a aumentarlo, corresponde a nuevas utilidades que la víctima presumiblemente hubiera conseguido de no haber sucedido el hecho ilícito o el incumplimiento.***²¹
(Énfasis propio).

Con fundamento de lo anterior, podemos concluir que el daño emergente comprende la pérdida de elementos patrimoniales, causada por los hechos que se aducen en el libelo de la demanda. En efecto, argumenta el extremo actor que la suma total de \$7.506.235, que corresponde a los gastos en los que incurriría de practicar la cirugía plástica que alega. Sin embargo, respecto a los primeros debe manifestarse que, dentro del plenario solo obra una cotización, sin fecha de realización, por lo cual dicha documentación carece de idoneidad para verificar que en efecto la demandante cubrió ese presunto gasto o que si quiera estos son los montos actualmente debidos, o si fueron realmente pagados.

En este orden de ideas, es fundamental que el Despacho tome en consideración que la carga de la prueba de acreditar los supuestos perjuicios reside única y exclusivamente en cabeza de la parte Demandante. En este sentido, si dicha parte no cumple con su carga y en tal virtud, no acredita debida y suficientemente sus aparentes daños, es jurídicamente improcedente reconocer cualquier suma por dicho concepto. Esta teoría ha sido ampliamente desarrollada por la Corte Suprema de Justicia, debido a que, sobre este particular, ha establecido lo siguiente:

*“(…) aun cuando en la acción de incumplimiento contractual es dable reclamar el reconocimiento de los perjuicios, en su doble connotación de daño emergente y lucro cesante, no lo es menos que para ello resulta ineludible que el perjuicio reclamado tenga como causa eficiente aquel incumplimiento, y que los mismos sean ciertos y concretos y no meramente hipotéticos o eventuales, teniendo el reclamante la carga de su demostración, como ha tenido oportunidad de indicarlo, de manera reiterada.”*²² (Subrayado fuera del texto original)

Bajo esta misma línea, en otro pronunciamiento también ha indicado que la existencia de los perjuicios en ningún escenario se puede presumir, tal y como se observa a continuación:

*“Ya bien lo dijo esta Corte en los albores del siglo XX, al afirmar que “(…) la existencia de perjuicios no se presume en ningún caso; [pues] no hay disposición legal que establezca tal presunción (…)”*²³ (Subrayado fuera del texto original)

El actor pretende estimar la cuantía de los daños supuesto daños por la cifra de \$7.506.235. Debe tenerse en cuenta que las cotizaciones no son una prueba conducente, pertinente y útil de cara a una solicitud

²¹Corte Suprema de Justicia. Sentencia del 07 de diciembre de 2017. M.P. Margarita Cabello Blanco. SC20448-2017.

²² Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 15 de febrero de 2018. MP. Margarita Cabello Blanco. EXP: 2007-0299

²³ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, Sentencia del 12 de junio de 2018. MP Luis Armando Tolosa Villabona. EXP: 2011-0736.

indemnizatoria por concepto de perjuicios materiales. Es decir, las cotizaciones no dan certeza sobre el estado real de salud y la necesidad de una cirugía, por lo que no demuestran que el procedimiento médico sugerido en estos documentos sean para reestablecer el estado de salud de la joven María Camila Angulo antes del acaecimiento del accidente. Adicionalmente, las cotizaciones son una mera expectativa que lejos están de ser un documento que pruebe el desplazamiento patrimonial o el daño emergente que alega la demandante.

Así, en el expediente no obran pruebas pertinentes y útiles que acrediten las erogaciones manifestadas sobre estos conceptos, por lo cual no es posible reconocerlos. En ese sentido, la demanda careció de una carga probatoria que además de certera, la misma fuera conducente con el fin de acreditar y demostrar el daño emergente. Lo anterior, en tanto tal como lo ha dispuesto la jurisprudencia, quien afirma una cosa es quien está obligado a probarla, supeditando a quien pretende o demanda un derecho, que lo alegue y demuestre los hechos que lo gestan o aquellos en que se funda, puesto que es absolutamente imperativo que se acredite procesalmente con los medios de convicción regular y oportunamente decretados y arrimados al plenario, ya que a nadie le es dado el privilegio de que su mero dicho sea prueba suficiente de lo que afirma.

En efecto, la consecuencia jurídica a la falta al deber probatorio en cabeza de la demandante es sin lugar a dudas la negación de la pretensión.

Por todo lo anterior solicito respetuosamente declarar probada esta excepción

9. TASACIÓN INDEBIDA E INJUSTIFICADA DE LOS SUPUESTOS PERJUICIOS MORALES PRETENDIDOS POR LA DEMANDANTE.

Por medio de la presente excepción se pretende demostrar al Honorable Despacho que el extremo procesal activo no acredita, argumenta, explica ni justifica de manera alguna la valoración sobre la tasación de las sumas de dinero pretendidas bajo el concepto de daño moral por una cuantía para las víctimas directas de 30 SMLMV para la señora Diana Vanessa Angulo, 15 SMLMV para la joven María Camila Angulo Franco, y para la víctima indirecta 10 SMLMV. Lo anterior, pues únicamente se limita a solicitar un monto a favor de las demandantes, sin que se argumente y/o sustente lo allí pretendido. Siendo de recordar que este tipo de perjuicio se encuentra encaminado a *“reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares”*, sin que la demandante sustente lo allí pretendido. Cabe recordar que el dictamen de PCL determinó para la señora Diana Vanessa Angulo un porcentaje del 13,40%, y para la joven María Camila Angulo Franco, no hubo tal pérdida de capacidad laboral.

Resulta pertinente recordar que, con relación a la ponderación de los daños morales que pretende la parte actora, si bien la misma se encuentra deferida al recto criterio del fallador, estas deben ser debidamente acreditadas, demostradas y tasadas por quien las pretende, teniendo en cuenta además que, este tipo de perjuicios *“se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e incommensurables”*²⁴. Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que se encuentra encaminado a *“reparar la congoja, impacto directo en el*

²⁴ Sentencia de Casación Civil del 13 de mayo de 2008. Exp. 1997-09327-01

*estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares*²⁵, con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa. Sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia²⁶.

En efecto, es inviable el reconocimiento del daño moral en la suma pretendida por la parte demandante, por cuanto la tasación propuesta es equivocada y en tal sentido, no hay lugar al reconocimiento de suma alguna por concepto que supere los montos fijados a partir del desarrollo jurisprudencial de la Corte Suprema de Justicia.

Para ilustrar de forma puntal la manera en que la que Corte Suprema de Justicia ha cuantificado este perjuicio, es preciso traer a colación un caso particular. Así pues, en sentencia del 6 de mayo de 2016 con radicación No. 2004-00032-01, la Sala Civil de la Corte analizó el caso de una mujer de 17 años, que a raíz de las lesiones derivadas de un accidente de tránsito debió someterse a múltiples intervenciones quirúrgicas y verse obligada a usar un catéter que le atravesaba su cabeza, cuello y pecho, y que le “restringía la posibilidad de concurrir a sitios controlados por detectores magnéticos, porque estos aparatos descontrolan la válvula; se obstaculiza bañarse en piscinas, realizar actividades deportivas, tener relaciones sentimentales”²⁷. En esta ocasión, la Corte reconoció por concepto de daño moral el monto de \$15.000.000:

“(…) resulta indudable la aflicción y congoja que a Diana Carolina Beltrán Toscano le produce la secuela dejada por el accidente de marras consistente en «perturbación psíquica de carácter permanente» y «deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanentes», pues es profundamente penoso, mucho más para una dama en la flor de su juventud, ver en su cuerpo cicatrices que antes del insuceso no estaban y ser consciente que sus funciones psicológicas se encuentran alteradas no transitoriamente sino por el resto de sus días, así la estética médica logre arrasarlos, lo cual conlleva al quebrantamiento indiscutible de caros derechos de la personalidad y de la autoestima [...]por tanto, es procedente fijar el monto de la condena por este aspecto en la suma de quince millones de pesos (\$15.000.000) para cada demandante (…)”

Aunado a lo anterior, cabe traer a colación la sentencia del año 2013, en la que la Corte Suprema de Justicia abordó el caso de un joven de 25 años de edad que perdió el 75% de su capacidad laboral, como consecuencia de un accidente de tránsito. En primera instancia, se condenó a pagar a los demandados las sumas de \$24.845.000 por daños morales a la víctima y \$12.422.500 por perjuicios morales para cada uno de sus padres y la misma suma para su hija, debido a una reducción del 50% de la indemnización por la existencia de culpa de la víctima. Esto significa que los perjuicios estimados por el juez de instancia fueron de \$49.690.000 para la víctima directa y \$24.845.000 para cada uno de los padres e hija del demandante. Esta decisión fue confirmada en segunda instancia y no fue objeto de estudio por parte de la Corte, pues los reproches en el recurso de casación se dirigieron a cuestionar otros aspectos del fallo.

²⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de casación civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad. 2004-032. MP Luis Armando Tolosa Villabona.

²⁶ Ibidem

²⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad. 2004-032 MP Luis Armando Tolosa Villabona.

Por lo antes expuesto es claro que la pretensión de reconocimiento de perjuicios morales en cabeza de la parte demandante se encuentra totalmente alejada de los criterios normativos y jurisprudenciales que se han sostenido durante años. Lo anterior, al no encontrarse acreditado, en primer lugar, la responsabilidad en cabeza de los demandados y, en segundo lugar, de forma clara y fehaciente los valores pretendidos, ya que sólo se estipulan unos rubros sin indicación de su procedencia. La doctrina ha establecido, en relación a la naturaleza demostrable de los perjuicios morales, lo siguiente:

*“(…) Los perjuicios morales subjetivados, igual que los materiales, deben aparecer demostrados procesalmente. Si bien su cuantificación económica es imposible, dada la naturaleza misma del daño, **lo cierto es que su intensidad es perfectamente demostrable**. La medicina y la psiquiatría contemporáneas pueden dictaminar casi con exactitud el grado y duración del dolor físico y psíquico (…)”²⁸. (Negrillas fuera del texto original).*

Por lo anteriormente mencionado, en este caso específico, conforme a las pruebas obrantes en el expediente, así como los pronunciamientos y manifestaciones realizadas por los sujetos intervinientes en cada uno de sus escritos, no pueden ni deben ser indemnizados por mi representada, ya que su presunta causación no se encuentra debidamente probada en ninguna de las modalidades por perjuicio extrapatrimonial, además de que, resultan abiertamente indebida e injustificada la desmesurada solicitud de perjuicios morales para el grupo familiar que integra la parte activa, a la luz de los presupuestos configurativos que permiten estructurar el origen de este tipo de perjuicios.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción

10. IMPROCEDENCIA DEL RECONOCIMIENTO POR DAÑO A LA VIDA DE RELACIÓN Y/O SALUD

Sea lo primero indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psicofísica que le impide o dificulta gozar de actividades rutinarias o bienes de la vida que disfrutaba antes del hecho lesivo. Así, este perjuicio se ve reflejado en el deterioro de la calidad de vida de la víctima y la pérdida de la posibilidad de tener contacto con las demás personas o relacionarse con ellas. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que en este caso no se encuentran acreditados los requisitos para su solicitud. En efecto, en el asunto que nos asiste, la parte demandante está solicitando esta indemnización como consecuencia de la causación de unas lesiones, sin que se haya incorporado prueba suficiente frente a la gravedad de la lesión, ni que efectivamente la misma le genera actualmente una afectación en la forma en la que desarrolla sus actividades normalmente.

Adicionalmente, se advierte que el reconocimiento del daño a la vida en relación, se reconoce única y exclusivamente a la víctima directa del daño, por lo cual, resulta totalmente improcedente el reconocimiento a cualquier otro reclamante y que no tenga su génesis en la producción de lesiones. De todas maneras, la cuantificación que por este concepto solicita la parte demandante es exorbitante pues, como veremos más adelante, desatiende los baremos jurisprudenciales que, sobre el daño a la vida de relación, se ha referido la Corte Suprema de Justicia.

²⁸ Tamayo, Javier. Tratado de responsabilidad civil. Tomo II. Prueba de los perjuicios morales subjetivado. Pag. 508.

En la actualidad, como es bien sabido, el daño a la vida de relación pretende reparar el mismo perjuicio sufrido en la órbita física y psicológica de la víctima que le impide realizar aquellas actividades agradables a la existencia, sin que este tipo de perjuicio tenga por vocación reconocerse en todos los casos. En efecto, pues hoy el mismo se ha admitido excepcionalmente cuando se trata de lesiones graves, que afecten la órbita de desenvolvimiento del lesionado y sólo para ser indemnizado a la víctima directa, por estar asociado estrictamente con lesiones físicas o anatómicas. Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, ha delimitado el concepto de daño a la vida de relación y lo diferencia del daño moral, así:

“(…) Como se observa, a diferencia del daño moral, que corresponde a la órbita subjetiva, íntima o interna del individuo, el daño a la vida de relación constituye una afectación a la esfera exterior de la persona, que puede verse alterada en mayor o menor grado a causa de una lesión inflingida (sic) a los bienes de la personalidad o a otro tipo de intereses jurídicos, en desmedro de lo que la Corte en su momento denominó “actividad social no patrimonial”.

Dicho con otras palabras, esta especie de perjuicio puede evidenciarse en la disminución o deterioro de la calidad de vida de la víctima, en la pérdida o dificultad de establecer contacto o relacionarse con las personas y cosas, en orden a disfrutar de una existencia corriente, como también en la privación que padece el afectado para desplegar las más elementales conductas que en forma cotidiana o habitual marcan su realidad. Podría decirse que quien sufre un daño a la vida de relación se ve forzado a llevar una existencia en condiciones más complicadas o exigentes que los demás, comoquiera que debe enfrentar circunstancias y barreras anormales, a causa de las cuales hasta lo más simple se puede tornar difícil. Por lo mismo, recalca la Corte, la calidad de vida se ve reducida, a paso que las posibilidades, opciones, proyectos y aspiraciones desaparecen definitivamente o su nivel de dificultad aumenta considerablemente. Es así como de un momento a otro la víctima encontrará injustificadamente en su camino obstáculos, preocupaciones y vicisitudes que antes no tenía, lo que cierra o entorpece su acceso a la cultura, al placer, a la comunicación, al entretenimiento, a la ciencia, al desarrollo y, en fin, a todo lo que supone una existencia normal, con las correlativas insatisfacciones, frustraciones y profundo malestar (...)²⁹

Para conocer a mayor profundidad lo que ha establecido la Corte Suprema de Justicia en algunos casos en los que excepcionalmente se reconoció este concepto indemnizatorio, es preciso señalar el siguiente caso: la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia ordenó el pago de 50 SMLMV para la víctima directa por los perjuicios causados con la pérdida de la capacidad de locomoción permanente, como consecuencia de accidente de tránsito por exceso de velocidad del vehículo en el que iba de pasajera³⁰. Nótese que en dicho caso la víctima perdió su movilidad de forma definitiva, en cambio en el presente caso no.

²⁹ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 13 de mayo de 2008, radicado 11001-3103-006- 1997- 09327-01

³⁰ Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, sentencia del 12 de noviembre de 2019, radicado 73001-31-03- 0022009-00114-01

Obsérvese que, en los casos antes referidos, la víctima quedó con secuelas para toda la vida y que afectaron directamente su interacción con el mundo exterior. Las secuelas fueron de tal magnitud, que era de esperarse que su actitud y su forma de ser cambiara abruptamente tras los hechos que motivaron cada una de las anteriores demandas. En el caso particular que nos cita al presente proceso, no se vislumbra un medio de prueba que permita acreditar que la señora Diana Vanessa Angulo Franco tuvo consecuencias permanentes en su corporeidad que afectaron su estilo de vida, su relación con los demás o consigo mismo, ni mucho menos el de sus familiares. Máxime cuando se allega un dictamen de pérdida de capacidad laboral que no determina una afectación de mayor gravedad para la continuidad del estilo de vida y relaciones interpersonales que mantenía antes de los hechos objeto de debate.

Es indispensable reiterar que el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad. Se está solicitando una suma de dinero abiertamente improcedente por cuanto no se observa ningún detrimento de tipo personal que se avizore en la demandante, tampoco una secuela que haya impedido continuar con su vida de forma normal o con regularidad a la que llevaban antes de los hechos que nos citan al proceso. Por lo tanto, la pretensión por este concepto no se encuentra probada, es desbordada y no se ajusta a los criterios que sobre este tipo de perjuicio ha establecido la jurisprudencia, no siendo procedente su reconocimiento, para lo cual nos remitimos a la argumentación expuesta en el literal anterior.

En línea con lo anterior, debe resaltarse aquello se ha reafirmado por la Corte Suprema de Justicia al indicar que el daño a la vida de relación se presenta cuando la víctima sufre una alteración psíquica o física que el impide o dificulta gozar de actividades rutinarias que disfrutaba antes del hecho lesivo. No obstante, **el daño a la vida en relación sólo se le debe reconocer a la víctima directa**. En otras palabras, el daño a la vida en relación sólo se debe reconocer a quien sufrió una alteración física o psíquica por el accidente, esto es, a la víctima directa. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia precisó:

*“(...) b) Daño a la vida de relación: Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales (...)”.*³⁴

Además, también es menester señalar otros pronunciamientos de donde se extrae la inviabilidad de condenar al pago de esta tipología de perjuicio a favor de las víctimas indirectas, veamos:

“(...) Daño a la vida de relación:

*Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la integridad psicofísica como medida de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida de relación en condiciones normales.”*³¹

“b) daño a la salud, a las condiciones de existencia o a la vida en relación.

Este rubro se concede únicamente a la víctima directa del menoscabo a la

³¹ Sentencia SC9193-2017, Rad. 11001-31-03-039-2011-00108-01 28 de junio de 2017 MP Ariel Salazar Ramírez.

*integridad psicofísica como medida simbólica o de compensación por la pérdida del bien superior a la salud, que le impedirá tener una vida en condiciones normales.*³²

De las anteriores sentencias de la Corte Suprema emerge con claridad como el daño a la vida de relación no puede ser reconocido a personas distintas a la víctima directa del daño, esto es la señora Diana Vanessa Angulo Franco y la joven María Camila Angulo Franco, por lo cual la situación que en el caso de marras se torna imposible dado que, dentro del escrito de la demanda, se solicita el reconocimiento del daño a la vida en relación, para la víctima indirecta, es decir la menor Hilary Yajaira Herrera. Además, al margen de la improcedencia de reconocer esta tipología de perjuicios a las víctimas indirectas, lo cierto es que las sentencias antes aludidas incluso fijan parámetros a tener en cuenta para la procedencia el daño a la vida de relación, a fin de no confundirse con el daño moral, pues de lo contrario se indemnizaría dos veces un mismo perjuicio.

Es indispensable reiterar que el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad, encontrando del dictamen de pérdida de capacidad laboral PCL que se determinó un porcentaje del 13,40 para la señora Diana Vanessa Angulo Franco, resaltando que dentro de la calificación dentro de la valoración del rol laboral, rol ocupacional y otras áreas ocupaciones, se evidencia que la demandante no presenta afectación alguna en (i) roles de aprendizaje y de aplicación del conocimiento, (ii) comunicación, estableciendo además que no requiere ayuda de tercero, no requiere dispositivos de apoyo, no es una enfermedad degenerativa ni progresiva y que tampoco constituye una enfermedad de alto costo/catastrófica.

Nivel de pérdida: Incapacidad permanente parcial	Muerte: No aplica	Fecha de defunción:
Ayuda de terceros para ABC y AVD: No aplica	Ayuda de terceros para toma de decisiones: No aplica	Requiere de dispositivos de apoyo: No aplica
Enfermedad de alto costo/catastrófica: No aplica	Enfermedad degenerativa: No aplica	Enfermedad progresiva: No aplica

Ahora bien, con respecto a la joven María Camila Angulo Franco, resulta claro que la lesión sufrida constituye una afectación de menor gravedad que de ninguna manera acaeció en afectaciones de carácter permanente, recibiendo una incapacidad definitiva de 45 días por parte del ICMLCF sin repercusión para su futuro, evidenciando que no existe un deterioro de la calidad de vida de la víctima y la pérdida de la posibilidad de tener contacto con las demás personas o relacionarse con ellas. En otras palabras, es improcedente el reconocimiento del daño a la vida de relación, teniendo en cuenta que en este caso no se encuentran acreditados los requisitos para su solicitud, debe recordarse además que no media un dictamen de PCL que acredite una afectación de carácter permanente.

De esta manera, es claro que se está solicitando una suma de dinero abiertamente improcedente por cuanto no se observa ningún detrimento de tipo personal y que le haya evitado continuar con su vida de forma normal o con regularidad a la que llevaban antes de los hechos que nos citan al proceso.

³² Sentencia SC562-2020, Rad. 73001-31-03-004-2012-00279-01 27 de febrero de 2020. MP. Ariel Salazar Ramirez.

Ahora, respecto del daño a la salud, cabe destacar que de acuerdo con los postulados jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia³³, el mismo se encuentra incluido en el daño a la vida en relación, comoquiera que el mismo se deriva internamente del desarrollo de la víctima, donde se tienen presentes las alteración de carácter emocional como consecuencia del “daño” sufrido en el cuerpo o la salud generando la pérdida o mengua de la posibilidad de ejecución de actos y actividades que hacían más agradable la vida. En ese orden de ideas, es claro como reconocer el concepto de daño a la salud, en primera medida vulnera los pronunciamientos jurisprudenciales, y, por otro lado, se estaría generado una doble indemnización por conceptos que claramente esta unidos y han sido tasados y reconocidos únicamente bajo el concepto de daño a la vida en relación, dando lugar a un enriquecimiento sin causa en cabeza de los demandantes.

En conclusión, el reconocimiento de este perjuicio es improcedente, pues no se encuentra plenamente acreditado dentro del presente proceso. Lo anterior, por cuanto el mismo sólo se concede en casos especialísimos a víctimas cuyas lesiones sean de tal gravedad que impacten directamente el estilo de vida de la persona y no de los familiares como también se pretende en la demanda. Sin embargo, el caso particular se trata de lesiones de menor gravedad. Además, como se expuso, es exagerado el monto pretendido con relación al presunto daño sufrido, lo debidamente demostrado en el proceso y el baremo jurisprudencial que al respecto ha emitido reiteradamente el órgano de cierre en la jurisdicción ordinaria especialidad civil.

Por todo lo anterior, solicito declarar probada esta excepción.

11. GENÉRICA O INNOMINADA

En virtud del mandato contenido en el artículo 282 del CGP, solicito al Despacho declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

CAPITULO II

CONTESTACIÓN AL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

I. FRENTE A LOS HECHOS DEL LLAMAMIENTO

FRENTE AL HECHO “1”: Es cierto, conforme obra en el plenario que se actualmente se adelanta un proceso de responsabilidad civil extracontractual ante el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Cali donde funge como demandantes la señora Diana Vanessa Angulo Franco, María Camila Angulo Franco y Hilary Herrera Angulo, por hechos acaecidos el 5 de diciembre de 2018. Sin embargo, desde este momento el Despacho deberá tener en consideración que no podrá atribuirse responsabilidad al extremo pasivo, en atención a que se configuró el hecho exclusivo de la víctima y hecho de un tercero, en tanto la señora Diana Vanessa Angulo no portaba licencia de conducción y tampoco se habían realizado la tecno mecánica a la motocicleta que conducía, así como tampoco contaba con SOAT, por lo que es claro que

³³ Corte Suprema de Justicia. Sentencia SCT16743 de 2019, MP. Luis Armando Tolosa.

la hoy demandante se expuso al riesgo e irresponsablemente expuso a la menor María Camila Angulo, quien se encontraba a su cargo.

FRENTE AL HECHO “2”: A mi representada no le constan de manera directa las circunstancias de modo, tiempo y lugar narradas en el hecho, comoquiera que en su calidad de aseguradora no intervino ni tuvo injerencia alguna en la producción del suceso reseñado. No obstante, de acuerdo con la información consignada en el Informe Policial de Accidente de Tránsito (IPAT) se permite evidenciar que el día 5 de diciembre de 2018 se presentó un accidente de tránsito que involucró a los vehículos de placa VBZ704, conducido por el señor Carlos Andrés Vanegas Riveros, cuyo propietario es el señor Alejandro Torres Giraldo y registra como empresa afiliadora la Empresa de Transportes Santiago de Cali Alameda, así como el vehículo de placa FSW75E conducido por la señora Diana Vanessa Angulo Franco.

FRENTE AL HECHO “3”: De la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias afirmaciones, frente a las cuales me pronunciaré en el orden planteado en este hecho:

Es cierto que la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 1000114 estaba vigente para el día del accidente objeto de litigio, por cuanto la vigencia del seguro se encontraba estipulada desde el 9 de febrero de 2018 hasta el 01 de febrero de 2019. Sin perjuicio de ello, es importante aclarar que este contrato de seguro no podrá operar en el caso particular, toda vez que:

- (i) La Póliza No. 1000114 tiene un amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual que opera en exceso de las pólizas primarias de automóviles que debe tener el rodante de placas VBZ704; de manera que aquella póliza únicamente se puede afectar cuando se hubiese agotado el valor de la/s póliza/s primaria/s., es decir la Póliza Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual para Vehículos Nro. AA055115, expedida por la compañía aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO la cual debe ser afectada en **primer lugar** como póliza primaria.
- (ii) No se ha realizado el riesgo asegurado en la póliza, por cuanto no se encuentra acreditada la responsabilidad del conductor del vehículo asegurado en el accidente acaecido el día 5 de diciembre de 2018 debido a que se configuró la causal eximente de responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima” y “hecho de un tercero”, pues la ocurrencia del accidente de tránsito y las posteriores lesiones de la menor María Camila Angulo y la señora Diana Vanessa Angulo Franco son atribuibles exclusivamente a la conducta de esta última, por lo que resulta jurídicamente improcedente endilgarles responsabilidad a los demandados. En ese orden de ideas, la configuración y aplicación de estas causales exonerativas de responsabilidad tienen por efecto la imposibilidad de imputación del daño a al extremo pasivo de la litis.
- (iii) Asimismo, debe manifestarse que no se aportaron al expediente elementos de convicción suficientes que acrediten la responsabilidad que pretende atribuirse a la pasiva en esta acción, como quiera que (i) no se ha demostrado la existencia de responsabilidad en cabeza del vehículo de placa asegurado (II) no se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta de la conductora del vehículo asegurado y el daño deprecado por la demandante, más cuando el único elemento en que basan los demandantes dicha

responsabilidad, es el informe policial de accidente de tránsito, no existiendo forma certera y fehaciente de acreditar la responsabilidad de la pasiva, por lo que consecuentemente no se ha estructurado el riesgo asegurado.

FRENTE AL HECHO “4”: Es cierto que la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 1000114 tiene como cobertura (predios, labores y operaciones), sin embargo, es importante aclarar que La Póliza No. 1000114 tiene un amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual que opera en exceso de las pólizas primarias de automóviles que debe tener el rodante de placas VBZ704; de manera que aquella póliza únicamente se puede afectar cuando se hubiese agotado el valor de la/s póliza/s primaria/s., es decir la Póliza Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual para Vehículos Nro. AA055115, expedida por la compañía aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO la cual debe ser afectada en **primer lugar** como póliza primaria.

Asimismo, se resalta que no se aportaron al expediente elementos de convicción suficientes que acrediten la responsabilidad que pretende atribuirse a la pasiva en esta acción, como quiera que (i) no se ha demostrado la existencia de responsabilidad en cabeza del vehículo de placa VBZ704 (II) no se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta de la conductora del vehículo asegurado y el daño deprecado por la demandante, más cuando el único elemento en que basan los demandantes dicha responsabilidad, es el informe policial de accidente de tránsito, no existiendo forma certera y fehaciente de acreditar la responsabilidad de la pasiva, por lo que consecuentemente no se ha estructurado el riesgo asegurado.

FRENTE AL HECHO “5”: De la redacción sintáctica de este numeral se desprenden varias afirmaciones, frente a las cuales me pronunciaré en el orden planteado en este hecho:

- (I) Es cierto que el vehículo de placa VBZ704 se encuentra relacionado dentro del proceso de responsabilidad civil extracontractual que se adelanta ante el Juzgado Dieciséis Civil Municipal de Cali.
- (II) Es cierto que el vehículo de placa VBZ704 para el momento de los hechos se encontraba afiliado a la Empresa de Transportes Santiago de Cali Alameda.
- (III) De acuerdo a la información obrante en el proceso, es cierto que el vehículo de placa VBZ704 cuenta con la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. AA055115 expedida por la EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C., así mismo es cierto que la póliza No. 1000114 expedida por SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ampara los vehículos propios y no propios del asegurado, EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI ALAMEDA, sin embargo es importante aclarar que La Póliza No. 1000114 tiene un amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual que **opera en exceso** de las pólizas primarias de automóviles que debe tener el rodante de placas VBZ704; de manera que aquella póliza únicamente se puede afectar cuando se hubiese agotado el valor de la/s póliza/s primaria/s., es decir la Póliza Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual para Vehículos Nro. AA055115, expedida por la compañía aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO

FRENTE AL HECHO “6”: Es cierto que en la póliza No. 1000114 expedida por SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ampara los vehículos propios y no propios del asegurado, EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI ALAMEDA, teniendo esta última la calidad de tomador y asegurado, sin embargo es importante aclarar que La Póliza No. 1000114 tiene un amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual que **opera en exceso** de las pólizas primarias de automóviles que debe tener el rodante de placas VBZ704; de manera que aquella póliza únicamente se puede afectar cuando se hubiese agotado el valor de la/s póliza/s primaria/s., es decir la Póliza Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual para Vehículos Nro. AA055115, expedida por la compañía aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO.

FRENTE AL HECHO “7”: De acuerdo a la información obrante en el proceso, es cierto que para el día 5 de diciembre de 2018, se encontraba vigente la póliza Nro. AA055115, expedida por la compañía aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO. Además, es cierto que la póliza No. 1000114 expedida por SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. estaba vigente para el día del accidente objeto de litigio, por cuanto la vigencia del seguro se encontraba estipulada desde el 9 de febrero de 2018 hasta el 01 de febrero de 2019.

Sin perjuicio de lo anterior, es importante aclarar que La Póliza No. 1000114 cuenta con un amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual que **opera en exceso** de las pólizas primarias de automóviles que debe tener el rodante de placas VBZ704; de manera que aquella póliza únicamente se puede afectar cuando se hubiese agotado el valor de la/s póliza/s primaria/s., es decir la Póliza Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual para Vehículos Nro. AA055115, expedida por la compañía aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO.

FRENTE AL HECHO “8”: No se trata de un hecho sino de una apreciación subjetiva del llamante en garantía. Sin perjuicio de ello, es importante aclarar que este contrato de seguro no podrá operar en el caso particular, toda vez que:

- (i) La Póliza de responsabilidad civil extracontractual de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. No. 1000114 tiene un amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual que opera en exceso de las pólizas primarias de automóviles que debe tener el rodante de placas VBZ704; de manera que aquella póliza únicamente se puede afectar cuando se hubiese agotado el valor de la/s póliza/s primaria/s., es decir la Póliza Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual para Vehículos Nro. AA055115, expedida por la compañía aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO la cual debe ser afectada en **primer lugar** como póliza primaria.
- (ii) No se ha realizado el riesgo asegurado en la póliza, por cuanto no se encuentra acreditada la responsabilidad de la conductora del vehículo asegurado en el accidente acaecido el día 5 de diciembre de 2018 debido a que se configuró la causal eximente de responsabilidad denominada “hecho exclusivo de la víctima”, pues la ocurrencia del accidente de tránsito y las posteriores lesiones de la señora Diana Vanessa Angulo Franco son atribuibles exclusivamente a su conducta y por lo que resulta jurídicamente improcedente endilgarles responsabilidad a los demandados. En ese orden de ideas, la configuración y aplicación de esta causal exonerativa de

responsabilidad tiene por efecto la imposibilidad de imputación del daño a al extremo pasivo de la litis.

- (iii) Asimismo, debe manifestarse que no se aportaron al expediente elementos de convicción suficientes que acrediten la responsabilidad que pretende atribuirse a la pasiva en esta acción, como quiera que (i) no se ha demostrado la existencia de responsabilidad en cabeza del vehículo de placa asegurado (II) no se ha demostrado la existencia de un nexo de causalidad entre la supuesta conducta de la conductora del vehículo asegurado y el daño deprecado por la demandante, más cuando el único elemento en que basan los demandantes dicha responsabilidad, es el informe policial de accidente de tránsito, no existiendo forma certera y fehaciente de acreditar la responsabilidad de la pasiva, por lo que consecuentemente no se ha estructurado el riesgo asegurado.

FRENTE AL HECHO “9”: No se trata de un hecho. Corresponde a la mera transcripción literal del artículo 64 del C.G.P., por lo que no resulta dable ejercer pronunciamiento alguno.

II. FRENTE A LAS PRETENSIONES DEL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

FRENTE A LA PRETENSIÓN “PRIMERA”: Por tratarse de una pretensión encaminada a un trámite procesal que ya fue surtido, como lo es la admisión del llamamiento en garantía proferido por este despacho a través de providencia del 23 de mayo de 2025, no hay lugar a pronunciamiento de fondo.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “SEGUNDA”: Por tratarse de una pretensión encaminada a un trámite procesal que debe ser resuelto por el despacho, como lo es la solicitud de suspensión del proceso, no hay lugar a pronunciamiento de fondo, especialmente por tornarse una pretensión ineficaz y que en nada tiene que ver mi representada.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “TERCERA”: Por tratarse de una pretensión encaminada a un trámite procesal que ya fue surtido, como lo es la notificación del auto que admitió el llamamiento en garantía proferido por este despacho a través de providencia del 23 de mayo de 2025, no hay lugar a pronunciamiento de fondo. Se resalta que mi representada fue notificada personalmente de la admisión del llamamiento en garantía presentado por apoderado de la EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI y el señor CARLOS ANDRES VANEGAS RIVEROS mediante correo electrónico el 11 de junio de 2025, notificación que se entiende realizada dos días después de la recepción del correo electrónico, es decir el 13 de junio de 2025, iniciando a contar el término para la contestación desde el día 16 de junio de 2025, es decir con plazo perentorio hasta el día 15 de julio de 2025. Por lo expuesto, se concluye que esta contestación integra de la demanda y del llamamiento en garantía se radica oportunamente.

FRENTE A LA PRETENSIÓN “CUARTA”: No se trata de una pretensión, corresponde a la alegación de la parte llamante en garantía al referir que “entregará copia de este escrito, de la demanda introductoria y de todos sus anexos para el representante legal de la citada compañía o quien haga sus veces (...), es decir que no se trata de un asunto que deba ser resuelto por el despacho, por tratarse de una actuación procesal de notificación que el llamante alegó procedería a realizar.

III. EXCEPCIONES DE FONDO FRENTE AL CONTRATO DE SEGURO

1. FALTA DE LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA POR ACTIVA DE CARLOS ANDRÉS VANEGAS RIVEROS PARA PROMOVER EL LLAMAMIENTO EN GARANTÍA

Desde este momento es importante que el Despacho considere que no existe legitimación en la causa por activa por parte del señor Carlos Andrés Vanegas Riveros, comoquiera que no es asegurado dentro del contrato de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. 1000114, en dicho contrato únicamente figura como asegurado la Empresa De Transportes Santiago de Cali S.A., por ende como la finalidad del llamamiento en garantía es vincular al asegurador con base en el contrato de seguro, en el cual indefectiblemente debe encontrarse como asegurado al llamante en garantía (el señor Vanegas), a fin de que sea la aseguradora quien indemnice al llamante por los perjuicios que llegará a sufrir con ocasión a la posible declaratoria de responsabilidad, (es decir ampara el patrimonio del asegurado), de tal manera que se pueda ordenar el reembolso de lo pagado como producto de la condena. Es entonces claro que como el llamante en garantía no ostenta la calidad de asegurada, mi mandante no podría en ninguna forma concurrir a indemnizarle los perjuicios que llegue a sufrir como producto de una hipotética condena, lo que denota una clara falta de legitimación en la causa por activa lo que a la postre imposibilita que dichas pretensiones salgan avante.

En línea con lo anterior, es necesario recordar que la legitimación en la causa ha sido definida ampliamente por la jurisprudencia, como aquella titularidad de los derechos de acción y contradicción. El Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 19753, magistrado ponente: Mauricio Fajardo Gómez, ha señalado sobre esta categoría jurídica lo siguiente:

*“La prosperidad de la pretensión depende, entre otros requisitos según la jurisprudencia de esta Sala, de que **«se haga valer por la persona en cuyo favor establece la ley sustancial el derecho que se reclama en la demanda, y frente a la persona respecto de la cual ese derecho puede ser reclamado»** (...). Si el demandante no es titular del derecho que reclama o el demandado no es persona obligada, el fallo ha de ser adverso a la pretensión de aquél, como acontece cuando reivindica quien no es el dueño o cuando éste demanda a quien no es poseedor³⁴»*. (Subrayado y negrilla fuera del texto original).

Bien como puede verse de la anterior definición, es claro que la acción, en este caso ejercida mediante la demanda de llamamiento en garantía, debe ser ejercida por quien ostenta el derecho pretendido. Para ello es necesario entonces remitirse a la disposición del artículo 64 del CGP, para verificar cual es la finalidad detrás de dicha figura, veamos:

*“Artículo 64 CGP: Quien afirme tener derecho legal o **contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva**, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del*

³⁴ Corte Suprema de Justicia. SC16279-2016 Radicado 2004-00197. Ariel Salazar Ramírez

término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.”(subrayado y negrilla fuera del texto original).

De la definición de legitimación en la causa y la finalidad del llamamiento en garantía antes vistos, se puede afirmar que, quien efectúa un llamamiento en garantía debe ostentar el derecho a recibir la indemnización de un perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso del pago que tuviera que efectuar; en otras palabras si el llamante en garantía llega a ser condenado a la indemnización de perjuicios perseguida con la demanda principal, el asegurador llamado en garantía debe indemnizarle los perjuicios sufridos que no es otro que el perjuicio patrimonial derivado de la condena que se le ha impuesto. De lo anterior puede concluirse que necesariamente el llamante en garantía debe ostentar el derecho a ser indemnizado por parte del asegurador, de lo contrario no podría exigir la prestación y por ende sus pretensiones deberán ser denegadas.

Aterrizando la teoría al caso concreto debe precisarse que en efecto existe un contrato de seguro que fue instrumentalizado bajo la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1000114, la misma que ampara la responsabilidad civil extracontractual en que incurra el asegurado, de ahí que, remitiéndonos a las condiciones del seguro, no se encuentra que como asegurado el señor Carlos Andrés Vanegas La Empresa de Transportes Santiago de Cali Alameda S.A:

POLIZA No. 1000114	ANEXO No 0	CERTIFICADO DE POLIZA NUEVA
TOMADOR:	EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI ALAMEDA S.A	
DIRECCION:	CALLE 1 # 69 - 43	TELEFONO: 3233495
ASEGURADO:	EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI ALAMEDA S.A	
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	

En conclusión, de las previsiones normativas descritas y la verificación de la póliza se puede concluir que el señor Carlos Andrés Vanegas no está legitimada en la causa por activa para formular el llamamiento en garantía en contra de mi representada SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. ya que no es asegurado en el contrato de seguro y por ende ante una eventual condena no podría exigir que mi representada le indemnice o reembolse lo pagado. Es decir, existe imposibilidad de predicar los efectos previstos en el artículo 64 del CGP y por ende el Despacho no podría de ninguna manera imponer obligación alguna a cargo de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Por lo anteriormente expuesto solicito declarar probada esta excepción.

2. INEXISTENCIA DE OBLIGACIÓN DE INDEMNIZAR A CARGO DE SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. POR CUANTO NO SE HA REALIZADO EL RIESGO ASEGURADO EN LA PÓLIZA NO.483554

Se propone el presente medio exceptivo a fin de ilustrar al despacho que en el caso objeto de estudio, no es procedente la afectación de la póliza No. 1000114 en cuanto no se ha realizado el riesgo asegurado.

Lo anterior, en tanto que se configuró la causal eximente de responsabilidad “hecho de la víctima” y “hecho de un tercero” rompiendo así el nexo causal, lo que indica que es inviable señalar que los daños alegados por la parte demandante ocurrieron como consecuencia de las actuaciones ejecutadas por la conductora del vehículo asegurado.

Es claro que, no se ha realizado el riesgo en concordancia con las condiciones generales y particulares de la póliza en cuestión, que menciona como amparo principal el siguiente:

“No obstante cualquier estipulación en contrario, la póliza de responsabilidad civil extracontractual se extiende a amparar, con sujeción a sus demás estipulaciones y condiciones, siempre y cuando que su inclusión figure en el cuadro de declaraciones de la presente póliza, la responsabilidad civil extracontractual en que de acuerdo con la ley incurra el asegurado como consecuencia de un accidente proveniente del uso de vehículos que no sean de propiedad del asegurado

Ahora bien, el artículo 1072 del Código de Comercio define como siniestro:

“ARTÍCULO 1072. DEFINICIÓN DE SINIESTRO. Se denomina siniestro la realización del riesgo asegurado.” (Subrayado fuera del texto original)

Ahora bien, es fundamental que el Honorable Despacho tome en consideración que en el ámbito de libertad contractual que les asiste a las partes en el contrato de seguro, la Compañía Aseguradora en virtud de la facultad que se consagra en el Art. 1056 del C. Co., puede asumir a su arbitrio todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés asegurado. Es de esta forma como se explica que al suscribir el contrato asegurativo respectivo, la aseguradora decide otorgar determinados amparos supeditados al cumplimiento de ciertas condiciones generales y particulares estipuladas en el mismo. De tal manera que su obligación condicional solo será exigible si se cumplen con los presupuestos que hayan sido pactados por las partes. En otras palabras, las compañías aseguradoras tienen la libertad de escoger cuáles son los riesgos que le son transferidos y en este sentido, solo se ven obligadas al pago de la indemnización en el evento que sean estos riesgos los que acontezcan durante el desarrollo de la relación contractual. La Corte Suprema de Justicia ha sido enfática al resaltar que las compañías aseguradoras pueden, a su arbitrio, asumir los riesgos que consideren pertinentes:

*“(…) como requisito ineludible para la plena eficacia de cualquier póliza de seguros, la individualización de los riesgos que el asegurador toma sobre sí (CLVIII, pág. 176), y ha extraído, con soporte en el Art. 1056 del C. Co., la vigencia en nuestro ordenamiento “de un principio común aplicable a toda clase de seguros de daños y de personas, en virtud del cual **se otorga al asegurador la facultad de asumir, a su arbitrio pero teniendo en cuenta las restricciones legales, todos o algunos de los riesgos a que están expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado.**”*

Sin perder de vista la prevalencia del principio de libertad contractual que impera en la materia, no absoluto, según se anunció en líneas pretéritas, se tiene, de conformidad con

*las consideraciones precedentes, que es en el contenido de la póliza y sus anexos donde el intérprete debe auscultar, inicialmente, en orden a identificar los riesgos cubiertos con el respectivo contrato asegurativo. Lo anterior por cuanto, de suyo, la póliza ha de contener una descripción de los riesgos materia de amparo (n. 9, art. 1047, C. de Co.), en la que, como reflejo de la voluntad de los contratantes, la determinación de los eventos amparados puede darse, ya porque de estos hayan sido individualizados en razón de la mención específica que de ellos se haga (sistema de los riesgos nombrados) (...)*³⁵
(Subrayado y negrilla fuera del texto original).

De conformidad con la facultad otorgada por el Art. 1056 del C. Co., las entidades aseguradoras pueden asumir a su arbitrio con la salvedad que dispone la ley, los riesgos que le sean puestos a su consideración, pudiendo establecer las condiciones bajo las cuales asumen los mismos. Así las cosas, se evidencia que la cobertura principal de la Póliza es cubrir los perjuicios patrimoniales y causados a terceros por parte de la asegurada.

Es importante entonces recordar, que el hecho acaecido y objeto de este litigio tuvo como factor determinante la conducta desplegada por la señora Diana Vanessa Angulo, que como quedará probado no contaba con licencia de conducción para operar la motocicleta en la cual se accidentó, además el automotor en que se desplazaba tampoco acataba la normatividad de tránsito, lo que indica que no se encontraba certificado un adecuado funcionamiento de sus sistema de frenos, sistema mecánico y de seguridad en general, lo que definitivamente influyó en la ocurrencia del accidente, por cuanto se desconoce si la demandante logró disminuir velocidad en aproximación a intersección, dar aviso de su presencia en la vía o siquiera reacción dado el estado del automotor en que se desplazaba.

Se valida en el IPAT que, que la motocicleta de placa FSW75E manipulada por una persona que no contaba con licencia de conducción, no contaba con revisión técnico mecánica vigente ni SOAT, lo cual constituye más que una infracción de tránsito, un total desconocimiento del riesgo propio y para los demás actores viales, puesto que la autoridad de tránsito fue imposibilitada por la demandante de conocer el verdadero estado del automotor y por ende acreditar que cumplía con normas básicas de seguridad para actividad tan peligrosa como lo es la conducción, sin olvidar que tampoco se encontraba el SOAT vigente, exponiéndose aún más a riesgo, especialmente frente a la ausencia de recursos para su atención médica.

En conclusión, en el presente caso el riesgo asegurable no se ha originado, puesto que de conformidad con las pruebas obrantes en el litigio que nos atañe, se demuestra que no se reúnen los presupuestos fácticos y jurídicos exigidos para la declaración de responsabilidad en cabeza de los demandados. Lo que quiere decir, que tampoco ha nacido la obligación indemnizatoria en cabeza de la Compañía de Seguros, al no haberse realizado el riesgo contractualmente asegurado. Se reitera que en este caso se rompe el nexo causal que pretende endilgar la parte actora por cuanto medio un hecho exclusivo de la víctima, por lo que no podrían reconocerse los perjuicios alegados por la demandante. En ese orden de ideas, claramente no existe responsabilidad en cabeza de los demandados, lo que por sustracción de materia significa, que tampoco puede hacerse efectiva la póliza de seguro por la que fue convocada mi prohiljada.

Por todo lo anterior, solicito comedidamente al Despacho declarar probada la presente excepción.

³⁵ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 17 de septiembre de 2017. M.P. Ariel Salazar Ramírez.

3. FALTA DE COBERTURA MATERIAL DE LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ETXRACONTRACTUAL NO. 1000114 POR CUANTO LA RESPONSABILIDAD PROVENIENTE DEL DOLO O CULPA GRAVE ES UN RIESGO EXPRESAMENTE EXCLUIDO DE COBERTURA

Es menester advertir que en las condiciones pactadas en el contrato de seguro documentado en la Póliza No. 1000114 suscrita entre mi representada y EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI ALAMEDA S.A., en la que también figura como asegurado, se establecieron unos parámetros que enmarcan la obligación condicional y la delimitación de la extensión del riesgo asumido por SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. En efecto, en ella se refleja la voluntad de los contratantes al momento de celebrar el contrato, y definen de manera explícita las condiciones del negocio asegurativo.

En materia de contrato de seguros, es menester señalar que los riesgos excluidos son una serie de coberturas que se excluyen de amparo, en cuyo caso de acaecimiento, eximen al asegurador de la obligación de satisfacer prestación alguna. Estas coberturas excluidas figuran expresamente en las condiciones generales y particulares de la Póliza. En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia, se refirió a las exclusiones de la siguiente manera:

“(...) En efecto, no en vano los artículos 1056³⁶ y 1120 del Código de Comercio, permiten al asegurador, con las restricciones legales, escoger los riesgos que a su arbitrio tenga a bien en amparar y estipular las exclusiones expresas de riesgos inherentes a dicha actividad.

Por lo demás, debe la empresa de seguros tener presentes que, en la delimitación del riesgo, no debe vaciar de contenido ese que asume pues tal postura conllevaría a un remedo de amparo sin traslación efectiva de riesgos, sucesos que originan pérdidas y, en suma, desembolsos económicos (...)”³⁷

En tal sentido, la Corte Suprema de Justicia definió la inexistencia de responsabilidad del asegurador cuando el riesgo se encuentra expresamente excluido, así:

*“(...) Este principio de la universalidad que informa al seguro de transporte, entre otros más, justifica las precisas diferencias que, en lo pertinente, existen con las demás clases de seguros. **Así, por vía de ejemplo, en lo tocante con la delimitación del riesgo,** mientras el artículo 1056 del Código de Comercio permite que el asegurador, a su arbitrio, asuma “**todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado**”, el art. 1120 ib. preceptúa que el seguro de transporte “**comprende todos los riesgos inherentes al transporte, salvo el deterioro por el simple transcurso del tiempo y los riesgos expresamente excluidos**” (Se subraya), luego, **en este último negocio asegurativo, el asegurador es responsable cuando la pérdida sea ocasionada por uno de los “riesgos inherentes al transporte”, salvo que el riesgo se encuentre expresa e inequívocamente excluido por las partes** (...)”³⁸ – (Subrayado y negrilla por fuera de texto.*

³⁶ Dice el precepto: “Con las restricciones legales, el asegurador podrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado”.

³⁷ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC4527-2020. M.P. Francisco Ternera Barrios.

³⁸ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia del 31 de enero de 2007. Exp. 2000-5492-01. M.P. Carlos Ignacio Jaramillo.

Bajo esa misma interpretativa, la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia del 13 de diciembre de 2018, indicó que las exclusiones de tipo convencional estipuladas en los contratos de seguro no comprometen la responsabilidad del asegurador, en virtud de la facultad prevista en el artículo 1056 del Código de Comercio:

*“(...) Las exclusiones de tipo convencional deben entenderse, como es apenas obvio, como aquellas pactadas por las partes o, cuando menos, **en las que existe consentimiento respecto de las indicadas en el clausulado preestablecido, en los denominados acuerdos de adhesión y que, siendo origen del siniestro o consecuencia del mismo, no comprometen la responsabilidad del asegurador.***

Esas cláusulas son válidas, inicialmente, en tanto se sustentan en el principio de la libre autonomía de las partes, cuyos límites son el orden público y las buenas costumbres; de ahí que el artículo 1056 consagre la posibilidad del asegurador de, «a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (...)»³⁹ - (Subrayado y negrilla por fuera de texto).

Así las cosas, según la jurisprudencia previamente expuesta, se evidencia como se exhorta a los jueces para tener en cuenta en sus providencias las exclusiones contenidas en los Contratos de Seguro. Razón por la cual, es necesario señalar que en Póliza objeto de asunto, emitida por SBS SEGUROS COLOMBIA en sus condiciones generales señala la exclusión 1.3.1, que indica que en caso de que la responsabilidad provenga de dolo o culpa grave del asegurado, no podrá otorgarse cobertura para el asegurado dentro de dicho contrato, al respecto véase:

POLIZA No. 1000114	ANEXO No 0	CERTIFICADO DE POLIZA NUEVA
TEXTOS DE LA POLIZA		
Esta cobertura no operara en los siguientes casos: 1.3.1. Si la responsabilidad proviene de dolo o culpa grave del asegurado. 1.3.2. Si el asegurado enfrenta el proceso contra orden expresa de SBS		

En conclusión, de configurarse la exclusión establecida en la caratula de la póliza y de llegarse a comprobar que el conductor del vehículo de placa VBZ704 realizó una conducta prohibida a luz de las normas de tránsito, esto no estaría cubierto en tanto no se ampara la culpa grave y en ese sentido, no podrá existir responsabilidad en cabeza de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación del Contrato de Seguro, pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la Póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones respecto a mi mandante.

Por lo anteriormente expuesto, solicito al Despacho declarar probada esta excepción.

³⁹ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil. Sentencia SC5327-2018. Magistrado Ponente: Luis Alfonso Rico Puerta.

4. LA PÓLIZA DE SEGUROS DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NO. 1000114 TIENE UN AMPARO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL QUE OPERA EN EXCESO DE LAS PÓLIZAS PRIMARIAS DE AUTOMOVILES QUE DEBE TENER EL RODANTE DE PLACAS VBZ704

Se plantea la presente excepción por medio de la cual se explica que la Póliza de responsabilidad civil extracontractual tiene un amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual que opera en exceso de las pólizas primarias de automóviles que debe tener el rodante de placas VBZ704; de manera que aquella póliza únicamente se puede afectar cuando se hubiese agotado el valor de la/s póliza/s primaria/s.

En el condicionado de la póliza objeto de asunto, aportado al plenario se estipula que el Amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual *“operará única en exceso de los límites primarios contratados bajo la sección de responsabilidad civil extracontractual de cualquier póliza de seguro de automóviles”*:

TEXTOS DE LA POLIZA

- Participación del asegurado en ferias y exposiciones nacionales e internacionales, siempre y cuando las ultimas no sean organizadas por el.
 - Responsabilidad civil extracontractual por predios tomados en arriendo o arrendados.
 - Responsabilidad Civil Extracontractual que el personal de celaduría, vigilancia y seguridad contratado directamente (contrato laboral) por el asegurado, puedan llegar a cometer en desempeño de sus labores, actuando a nombre del asegurado, en cumplimiento de sus órdenes y dentro del horario establecido para la prestación del servicio y en ejercicio de la actividad propia del cargo, incluso la ocasionada por el uso de armas de fuego y perros guardianes
- Si el personal de celaduría, vigilancia y seguridad que presta el servicio al asegurado es suministrado por una firma especializada en la materia, este amparo opera en exceso del límite de Responsabilidad Civil Extracontractual que la Ley exige para este tipo de actividad o, el límite que tal firma tenga contratado para estos efectos, el que sea mayor, pero en todo caso ésta cobertura opera siempre en exceso mínimo de 400 SMMLV o su equivalente.
- Este amparo se otorga bajo las siguientes condiciones:
- A. Que la firma contratada esté legalmente constituida bajo las Leyes de la República de Colombia.
- B. Que el personal esté actuando a nombre del asegurado y en cumplimiento de sus órdenes.
- C. Que los hechos ocurran dentro del horario establecido para la prestación del servicio y en ejercicio de la actividad propia del cargo.
- Operaciones de cargue y descargue diferentes a las relacionadas con mercancías peligrosas e hidrocarburos
 - Responsabilidad Civil Extracontractual causada por los Bienes bajo cuidado, tenencia y control
 - Vehículos propios y no propios, en exceso de 60/60/120 SMMLV por vehículo, durante el transporte de personas que corresponde al desarrollo de su actividad. En caso de no poseer esta cobertura se tomarán estos valores como valor primario. No cubre pasajeros ni los daños o pérdida de bienes de terceros (bienes bajo cuidado, tenencia y control) entregados al Asegurado para ser almacenado o transportados.
- Se excluyen daños o pérdida de los vehículos transportadores.

COBERTURAS SUBLIMITADAS

- Daños causados a pasajeros mientras son movilizados en vehículos propios y no propios del asegurado, en exceso de 60/60/60/60 SMMLV por

IV. LIMITACION DEL AMPARO:

- a) La cobertura otorgada bajo el presente amparo queda limitada a que el accidente, que dé origen a las lesiones corporales o a los daños a la propiedad que el Asegurado, estuviere legalmente obligado a pagar, sea objeto de cobertura bajo los términos y condiciones de la sección de Responsabilidad Civil Extracontractual de la Póliza de Seguro de Automóviles.
- b) La Cobertura otorgada bajo el presente amparo operará únicamente en exceso de los límites primarios contratados bajo la sección de responsabilidad civil extracontractual de cualquier póliza de seguro de automóviles; sin embargo estos límites primarios en ningún caso se podrán considerar como inferiores a los máximos permitidos contratar bajo la mencionada sección de Responsabilidad Civil Extracontractual de la Póliza de Seguro de Automóviles.

Por tal, el amparo de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 1000114 solo opera después de que se haya agotado en su totalidad el valor asegurado de otra póliza primaria, es decir, ya ha cubierto el monto máximo asegurado de ella. Solo después de agotarse la póliza primaria, la póliza en exceso entra a responder por el valor adicional de los perjuicios, hasta el límite de su cobertura.

Esto es de vital importancia, ya que la parte demandante ha aportado la Póliza Seguros de Responsabilidad Civil extracontractual para Vehículos Nro. AA055115, expedida por la compañía aseguradora LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES ORGANISMO COOPERATIVO la cual debe ser afectada en **primer lugar** como póliza primaria. Solo en caso de que su cobertura se agote en su totalidad, podría entrar en operación nuestra póliza, que **únicamente responde en exceso**.

Por lo tanto, mientras la póliza primaria de LA EQUIDAD SEGUROS GENERALES O.C no haya sido completamente utilizada para cubrir el siniestro, **no es posible afectar nuestra póliza**, ya que su naturaleza es EN EXCESO respecto a la cobertura principal.

En conclusión, la Póliza No. 1000114, opera sólo en *exceso de cualquier otra póliza de seguro que se encuentre contratada y ampare el evento*, de manera que aquella póliza únicamente se puede afectar cuando se hubiese agotado el valor de la/s póliza/s primaria/s.

Solicito señor Juez declarar probada esta excepción.

5. CARÁCTER MERAMENTE INDEMNIZATORIO QUE REVISTEN LOS CONTRATOS DE SEGUROS

Es un principio que rige el contrato de seguro de daños, el carácter indemnizatorio del mismo, esto es, que el contrato de seguro tiene como interés asegurable la protección de los bienes o el patrimonio de una persona que pueda afectarse directa o indirectamente por la realización del riesgo. De modo que la indemnización que por la ocurrencia de dicho siniestro que corresponda, nunca podrá ser superior al riesgo asumido y mucho menos superior al perjuicio demostrado. De tal suerte que acceder a las pretensiones tal como fueron solicitadas, al margen de la inexistente responsabilidad, es improcedente porque no se ha demostrado que se reúnan los presupuestos para el lucro cesante y los perjuicios inmateriales y si aun así se ordena una indemnización se desconocería el carácter meramente indemnizatorio y se avalaría un enriquecimiento sin causa.

Al respecto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, en sentencia del 22 de julio de 1999, expediente 5065, dispuso:

“(...) Este contrato no puede ser fuente de ganancias y menos de riqueza, sino que se caracteriza por ser indemnizatorio. La obligación que es de la esencia del contrato de seguro y que surge para el asegurador cumplida la condición, corresponde a una prestación que generalmente tiene un alcance variable, pues depende de la clase de seguro de la medida del daño efectivamente sufrido y del monto pactado como limitante para la tolerancia de la garantía contratada, y que el asegurador debe efectuar una vez colocada aquella obligación en situación de solución o pago inmediato (...)”⁴⁰

Se puede concluir entonces que el Contrato de Seguro tiene un carácter meramente indemnizatorio y por tal motivo, tiene como finalidad llevar a la víctima al estado anterior, más no enriquecerla. Es por ello que, aterrizando al caso en cuestión, no es de recibo indemnizar el daño tal y como fue pretendido por la parte Demandante, más aún, teniendo en cuenta las tasaciones exorbitantes de sus perjuicios no probados. En tal sentido, el artículo 1088 del Código de Comercio estableció lo siguiente:

*“(...) **Respecto del asegurado, los seguros de daños serán contratos de mera indemnización y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento. La indemnización podrá comprender a la vez el daño emergente y el lucro cesante, pero éste deberá ser objeto de un acuerdo expreso (...)**” (Subrayado y negrilla fuera de texto).*

Así las cosas, el carácter de los seguros de daños y en general de cualquier seguro, es meramente indemnizatorio, esto es, que no puede obtener ganancia alguna el asegurado/beneficiario con el pago de la indemnización, es decir no puede nunca pensarse el contrato de seguro como fuente de enriquecimiento. Conforme a ello, en caso de pagarse suma alguna que no esté debidamente acreditada

⁴⁰ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, respecto al carácter indemnizatorio del Contrato de Seguro, Sentencia 22 de julio de 1999 expediente 5065

por la parte accionante, se estaría contraviniendo el citado principio de mera indemnización del contrato de seguro. En efecto, se estaría supliendo la carga probatoria de la parte actora frente a los presupuestos de una responsabilidad patrimonial del Asegurado y eventualmente enriqueciendo al accionante.

En concreto se advierte que los rubros indemnizatorios solicitados por la parte demandante carecen de fundamento fáctico y jurídico y no pueden acogerse por parte del despacho, puntualmente por las siguientes razones:

- i. No obra dentro del expediente ningún medio de prueba que corrobore, así sea sumariamente, que la señora Diana Vanessa Angulo, con ocasión al hecho del 5 de diciembre de 2018 quedó cesante laboralmente, pues del dictamen de PCL se evidencia que fue dictaminada con un porcentaje del **13,40%** base que fue utilizada por el apoderado del extremo activo para su liquidación, bajo este porcentaje no se avizora que la demandante no pudiera continuar con sus actividades laborales.
- ii. No existe claridad alguna sobre el valor que recibía como presunta remuneración la señora Diana Vanessa Angulo pues no obra en el expediente prueba si quiera sumaria que acredite sus ingresos, por lo tanto, no es posible establecer como los hechos del 5 de diciembre de 2018 afectaron en nada las condiciones económicas que antes tenía la demandante, más aún cuando conforme al dictamen de determinación de origen y/o pérdida de capacidad laboral y ocupacional, se evidencia que la señora Diana Vanessa Angulo no presenta una incapacidad que le permite continuar devengado sus ingresos regulares.

Frente a los perjuicios extrapatrimoniales, cabe destacar que los mismo fueron solicitados sin el respaldo probatorio que acredite que los demandantes han incurrido en dichos perjuicios, resaltando que el cálculo es exagerado y desconoce claramente las directrices jurisprudenciales.

Debe recordarse que nuestro sistema jurídico para la tasación de los perjuicios morales, permite al despacho bajo las reglas de la sana crítica y experiencia, validar el grado de afectación a la esfera íntima de las personas para el reconocimiento de indemnización por este tipo de perjuicio, bajo ese parámetro debe tener en cuenta el despacho que la afectación de la demandante si bien existió un daño a su salud de algún modo, no tuvo la magnitud para afectar su esfera personal y familiar, especialmente en ámbitos como la comunicación, vida doméstica y grado de aprendizaje y conocimiento, hecho notorio y expuesto en el dictamen de PCL emitido por la Junta Regional de Calificación de Invalidez del Valle del Cauca, por cuanto estableció que no hay dificultad o dependencia para los siguientes criterios:

Nivel de pérdida: Incapacidad permanente parcial	Muerte: No aplica	Fecha de defunción:
Ayuda de terceros para ABC y AVD: No aplica	Ayuda de terceros para toma de decisiones: No aplica	Requiere de dispositivos de apoyo: No aplica
Enfermedad de alto costo/catastrófica: No aplica	Enfermedad degenerativa: No aplica	Enfermedad progresiva: No aplica

Permite dilucidar lo anterior, que la señora Diana Vanessa Angulo Franco luego del accidente, no solo puede llevar una vida laboral de manera normal sin perjuicio o disminución de su patrimonio por concepto de salarios, sino además puede llevar una vida sin dificultad, siendo indicativo de la ausencia de perjuicio de índole moral por cuanto su esfera personal no tuvo una afectación de tal magnitud que pudiera haber sido ocasionada por el accidente.

En consecuencia, al encontrarse una indebida pretensión sin sustento alguno, es evidente que aquellas están llamadas al fracaso puesto que no podría avalarse un enriquecimiento que contraría el principio meramente indemnizatorio que reviste al contrato de seguro, pues se vulnera la disposición que establece su carácter meramente indemnizatorio del mismo. Resulta pertinente recordar que, con relación a la ponderación de los daños morales que pretende la parte actora, si bien la misma se encuentra deferida al recto criterio del fallador, estas deben ser debidamente acreditadas, demostradas y tasadas por quien las pretende, teniendo en cuenta además que, este tipo de perjuicios *“se trata de agravios que recaen sobre intereses, bienes o derechos que por su naturaleza extrapatrimonial o inmaterial resultan inasibles e inconmensurables”*⁴¹. Sobre este tipo de perjuicio, la Corte ha reseñado que se encuentra encaminado a *“reparar la congoja, impacto directo en el estado anímico espiritual y en la estabilidad emocional de la persona que sufrió la lesión y de sus familiares”*⁴², con sujeción a los elementos de convicción y las particularidades de la situación litigiosa. Sin perjuicio de los criterios orientadores de la jurisprudencia, en procura de una verdadera, justa, recta y eficiente impartición de justicia⁴³.

En conclusión, de acuerdo a las voces de los artículos 1088 y 1127 del Código de Comercio sobre el carácter indemnizatorio del seguro y la responsabilidad del asegurador frente a la obligación indemnizatoria, en el caso particular se observa que, de acuerdo a los pedimentos injustificados, equivocadamente tasados y exorbitantes que hace la parte demandante sobre el concepto de daño moral es evidente la pretensión indebida de enriquecimiento con base en el contrato de seguro, vulnerando el carácter indemnizatorio que reviste al contrato de seguros.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al Despacho, declarar probada la presente excepción.

6. PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE SEGURO

Es importante que este respetado despacho tenga en consideración que para el caso en concreto se configuró el fenómeno de la prescripción en virtud de los artículos 1081 y 1131 del Código General de Comercio.

El Código de Comercio consagra un régimen especial de prescripción en materia de seguros y en su artículo 1081 establece previsiones no sólo en relación con el tiempo que debe transcurrir para que se produzca el fenómeno extintivo, sino también respecto del momento en que el período debe empezar a contarse. Dicho precepto establece lo siguiente:

“ARTÍCULO 1081. La prescripción de las acciones que se derivan del contrato de seguro o de las disposiciones que lo rigen podrá ser ordinaria o extraordinaria. La prescripción

⁴¹ Sentencia de Casación Civil del 13 de mayo de 2008. Exp. 1997-09327-01

⁴² Corte Suprema de Justicia. Sala de casación civil. Sentencia del 6 de mayo de 2016. Rad. 2004-032. MP Luis Armando Tolosa Villabona.

⁴³ Ibidem

ordinaria será de dos años y empezará a correr desde el momento en que el interesado haya tenido o debido tener conocimiento del hecho que da base a la acción. La prescripción extraordinaria será de cinco años, correrá contra toda clase de personas y empezará a contarse desde el momento en que nace el respectivo derecho. Estos términos no pueden ser modificados por las partes.”

Por otro lado, en lo atinente a los seguros de responsabilidad, para evaluar la prescripción derivada del contrato de seguro es necesario analizar el artículo 1131 del Código de Comercio que establece:

“ARTÍCULO 1131. OCURRENCIA DEL SINIESTRO. En el seguro de responsabilidad se entenderá ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado, fecha a partir de la cual correrá la prescripción respecto de la víctima. Frente al asegurado ello ocurrirá desde cuando la víctima le formula la petición judicial o extrajudicial.”

Así, deberá en los seguros de responsabilidad entenderse ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el externo imputable al asegurado. Al respecto ha precisado la Corte Suprema de Justicia:

“Rememórese que, según el artículo 1131 del Código de Comercio, modificado por la ley 45 de 1990, en los seguros por responsabilidad se entiende «ocurrido el siniestro en el momento en que acaezca el hecho externo imputable al asegurado...», momento que, además de ser el jalón para el comienzo del término prescriptivo, debe estar incluido en el plazo de vigencia de la póliza respectiva”. (...) “Para señalar, por ejemplo, el debate del gobierno del artículo 1131 del Código de Comercio, en materia de prescripción por las imprecisiones que pudo presentar al aprobarse o ponerse en vigencia en 1971 el Código de Comercio Nacional vigente, al distinguir la fecha del siniestro para el asegurado y la víctima como factores detonantes de la prescripción, con la Ley 45 quedaron zanjadas todas las dudas o diferencias, en relación con los arts. 1081 del C. de Co. y 2536 del C.C., desapareciendo todo desequilibrio entre víctima, asegurado y aseguradora en el punto prescriptivo.”

En tal sentido, el despacho debe tener en cuenta que el día 18 de junio del 2019 se llevó a cabo una conciliación en el marco del proceso penal adelantado por la hoy demandante, lo anterior se corrobora con la Sentencia del 30 de septiembre de 2024 proferida por el Juzgado 19 Penal Municipal con Funciones de Conocimiento, por lo que desde dicha calenda el 18 de junio de 2019 se entiendo conforme al artículo 1131 del Código de Comercio que se presentó petición extrajudicial a la hoy llamante en garantía EMPRESA DE TRANSPORTES DE SANTIAGO DE CALI ALAMEDA y por ello desde ahí iniciaba el termino bienal del 1080 C.co para llamarnos en garantía, sin embargo este llamamiento solo se efectuó hasta el 17 de diciembre de 2024, por lo que las acciones derivadas del contrato de seguro ya estaban prescritas, por lo menos desde el 19 de junio de 2021.

Conforme lo anterior, se solicita al Despacho tener por probada esta excepción.

7. CAUSALES DE EXCLUSIÓN DE COBERTURA DE LA PÓLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NO. 1000114

En materia de seguros, el asegurador según el Artículo 1056 del Código de Comercio podrá a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés asegurado. Por lo tanto, es en el conjunto de las condiciones que contiene el respectivo contrato donde se determinan o delimitan contractualmente los riesgos, su alcance o extensión, el ámbito temporal y geográfico en el que el amparo opera, las causales de exclusión, o en general, las de exoneración. Por tanto, son esos los parámetros a los que se tiene que sujetarse el sentenciador al resolver cualquier pretensión que se base en la correspondiente póliza. Luego, obviamente el asegurador tiene la facultad de delimitar contractualmente los riesgos que asume, conforme a lo normado en el artículo 1056 Código de Comercio.

De las normas que regulan la delimitación de los riesgos asumidos por el asegurador (arts. 1056 y 1127 del C. de Co.), se infiere lógicamente que la autonomía que otorgan esas normas a los sujetos contratantes está circunscrita no sólo a la relación riesgo-causa (responsabilidad civil) sino a la relación riesgo-efecto.

Ahora bien, tal como lo señala el Artículo 1056 del Código de Comercio, el asegurador puede, a su arbitrio, delimitar los riesgos que asume:

“(...) Art. 1056.- Con las restricciones legales, el asegurador pondrá, a su arbitrio, asumir todos o algunos de los riesgos a que estén expuestos el interés o la cosa asegurados, el patrimonio o la persona del asegurado (...)”

En virtud de la facultad citada en el referido artículo, el asegurador decidió otorgar determinados amparos, siempre supeditados al cumplimiento de ciertos presupuestos, e incorpora en la póliza determinadas barreras cualitativas que eximen al asegurador a la prestación señalada en el contrato, las cuales se conocen generalmente como exclusiones de la cobertura y se encuentran contenidas en las condiciones generales de la misma que se adjuntan con el presente escrito.

En conclusión, de configurarse alguna de las exclusiones previamente mencionadas o las que constan en el clausulado general de la póliza, no podrá existir responsabilidad en cabeza del Asegurador. Por cuanto el juez no podrá ordenar la afectación de la PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL NO. 1000114 pues las partes acordaron expresamente pactar tales exclusiones. En consecuencia, si se evidencia dentro del proceso alguna de ellas, la Póliza no cubriría ninguna solicitud de indemnización por lo que deberán denegarse las pretensiones de la demanda.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito declarar probada esta excepción.

8. EN CUALQUIER CASO, DE NINGUNA FORMA SE PODRÁ EXCEDER EL LÍMITE DEL VALOR ASEGURADO

En el remoto e improbable evento en que el Despacho considere que la Póliza que hoy nos ocupa si presta cobertura para los hechos objeto de este litigio, que sí realizó el riesgo asegurado y que, en este sentido, si ha nacido a la vida jurídica la obligación condicional de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A..

Exclusivamente bajo esta hipótesis, el Juzgado deberá tener en cuenta entonces que no se podrá condenar a mi poderdante al pago de una suma mayor a la asegurada, incluso si se lograra demostrar que los presuntos daños reclamados son superiores. Por supuesto, sin que esta consideración constituya aceptación de responsabilidad alguna a cargo de mi representada, recordando además que esta póliza solo opera en exceso de la póliza de responsabilidad civil extracontractual No. AA055115.

En este orden de ideas, mi procurada no estará llamada a pagar cifra que exceda el valor asegurado previamente pactado por las partes, en tanto que la responsabilidad de mi mandante va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De esta forma y de conformidad con el artículo 1079 del Código de Comercio, debe tenerse en cuenta la limitación de responsabilidad hasta la concurrencia de la suma asegurada:

“(…) ARTÍCULO 1079. RESPONSABILIDAD HASTA LA CONCURRENCIA DE **LASUMA ASEGURADA**. *El asegurador no estará obligado a responder si no hasta concurrencia de la suma asegurada, sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 1074 (…)*”

La norma antes expuesta, es completamente clara al explicar que la responsabilidad del asegurador va hasta la concurrencia de la suma asegurada. De este modo, la Corte Suprema de Justicia ha interpretado el precitado artículo en los mismos términos al explicar:

“(…) Al respecto es necesario destacar que, como lo ha puntualizado esta Corporación, el valor de la prestación a cargo de la aseguradora, en lo que tiene que ver con los seguros contra daños, se encuentra delimitado, tanto por el valor asegurado, como por las previsiones contenidas en el artículo 1089 del Código de Comercio, conforme al cual, dentro de los límites indicados en el artículo 1079 la indemnización no excederá, en ningún caso, del valor real del interés asegurado en el momento del siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por el asegurado o el beneficiario, regla que, además de sus significativas consecuencias jurídicas, envuelve un notable principio moral: evitar que el asegurado tenga interés en la realización del siniestro, derivado del afán de enriquecerse indebidamente, a costa de la aseguradora, por causa de su realización (…)⁴⁴(Subrayado y negrilla fuera de texto original)

Por ende, no se podrá de ninguna manera obtener una indemnización superior en cuantía al límite de la suma asegurada por parte de mi mandante y en la proporción de dicha pérdida que le corresponda debido a la porción de riesgo asumido. Así las cosas, el límite de la responsabilidad de la Aseguradora

AMPAROS Y COBERTURAS			
COBERTURA	LIMITE EVENTO		LIMITE AGREGADO
AMPARO DE PREDIOS-LABORES-OPERACIONES	\$	1,000,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00
AMPARO OPCIONAL DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS INDEPENDIENTES	\$	500,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00
AMPARO OPCIONAL DE RCE CRUZADA DE ASEGURADOS ENTRE SI Y/O FRENTE A TERCEROS	\$	500,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00
AMPARO OPCIONAL DE RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	\$	70,000,000.00	\$ 140,000,000.00
AMPARO OPCIONAL DE PAGOS MEDICOS VOLUNTARIOS	\$	30,000,000.00	\$ 60,000,000.00
AMPARO OPCIONAL DE GARAJES Y PARQUEADEROS	\$	500,000,000.00	\$ 1,000,000,000.00

⁴⁴ Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Civil, sentencia del 14 de diciembre de 2001. MP. Jorge Antonio Castillo Rugeles. Exp 5952.

corresponde a la suma asegurada individual indicada en la carátula de la Póliza, de la siguiente manera: Por todo lo anterior, comedidamente le solicito al Honorable Despacho tomar en consideración que, sin perjuicio que en el caso bajo análisis SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. no puede ser condenada por un mayor valor que el expresamente establecido en la Póliza. En todo caso, dicha póliza contiene unos límites y valores asegurados que deberán ser tenidos en cuenta por el Juzgado en el remoto e improbable evento de una condena en contra de mi representada.

9. APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.

En primer lugar, téngase en cuenta, que verificado el escrito de llamamiento en garantía se evidencia que, en el mismo, no se encuentra consignada una sola pretensión declaratoria o condenatoria en contra de la Aseguradora que aquí represento, por lo que no hay lugar al reconocimiento de pretensiones que claramente no fueron solicitadas en la oportunidad procesal correspondiente. En ese sentido, es necesario señalar que el principio de congruencia es la regla del derecho procesal, en virtud del cual el Juez se encuentra obligado a que sus decisiones sean concordantes con los hechos y pretensiones que se presentan en los escritos que se elevan ante los Despachos. El artículo 281 del Código General del Proceso, contempla los preceptos que debe seguir el Juez en sus sentencias de la siguiente forma:

“ARTÍCULO 281. CONGRUENCIAS. La sentencia deberá estar en consonancia con los hechos y las pretensiones aducidos en la demanda y en las demás oportunidades que este código contempla y con las excepciones que aparezcan probadas y hubieren sido alegadas si así lo exige la ley.

No podrá condenarse al demandado por cantidad superior o por objeto distinto del pretendido en la demanda ni por causa diferente a la invocada en esta.

Si lo pedido por el demandante excede de lo probado se le reconocerá solamente lo último.

En la sentencia se tendrá en cuenta cualquier hecho modificativo o extintivo del derecho sustancial sobre el cual verse el litigio, ocurrido después de haberse propuesto la demanda, siempre que aparezca probado y que haya sido alegado por la parte interesada a más tardar en su alegato de conclusión o que la ley permita considerarlo de oficio.

PARÁGRAFO 1o. En los asuntos de familia, el juez podrá fallar ultrapetita y extrapetita, cuando sea necesario para brindarle protección adecuada a la pareja, al niño, la niña o adolescente, a la persona con discapacidad mental o de la tercera edad, y prevenir controversias futuras de la misma índole.

PARÁGRAFO 2o. En los procesos agrarios, los jueces aplicarán la ley sustancial teniendo en cuenta que el objeto de este tipo de procesos es conseguir la plena realización de la justicia en el campo en consonancia de los fines y principios generales del derecho agrario, especialmente el relativo a la protección del más débil en las relaciones de tenencia de tierra y producción agraria.

En los procesos agrarios, cuando una de las partes goce del amparo de pobreza, el juez de primera o de única instancia podrá, en su beneficio, decidir sobre lo controvertido o probado aunque la demanda sea defectuosa, siempre que esté relacionado con el objeto del litigio. Por consiguiente, está facultado para reconocer u ordenar el pago de derechos

e indemnizaciones extra o ultrapetita, siempre que los hechos que los originan y sustenten estén debidamente controvertidos y probados.

En la interpretación de las disposiciones jurídicas, el juez tendrá en cuenta que el derecho agrario tiene por finalidad tutelar los derechos de los campesinos, de los resguardos o parcialidades indígenas y de los miembros e integrantes de comunidades civiles indígenas”

En virtud de lo anterior, se puede concluir que: i) no es válido emitir fallos ultra petita, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandando por una cantidad superior a la solicitada en el líbello de la demanda, o sentencias que concedan más de lo pedido. ii) Tampoco se pueden emitir fallos extra petita, es decir, sentencias en las cuales se condene al demandado con base en pretensiones distintas a las deprecadas en la demanda y iii) no pueden ser proferidas sentencias por causas distintas a las invocadas en el petitum de la demanda.

En cuanto a la importancia del principio de congruencia, la Corte Constitucional ha indicado:

*“La jurisprudencia de esta Corporación **ha definido el principio de congruencia como uno de los elementos constitutivos del derecho fundamental al debido proceso consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política, en la medida que impide determinadas decisiones porque su justificación no surge del proceso por no responder en lo que en él se pidió, debatió, o probó.** Además ha establecido que siempre que exista falta de congruencia en un fallo se configurara un defecto y, por tanto, será procedente la tutela contra providencia judicial con el fin de tutelar el derecho constitucional fundamental al debido proceso.*

(...)

*24.2. De lo expuesto hasta el momento, se puede concluir que el juez debe tomar su decisión de manera congruente con los hechos, pretensiones y excepciones probadas dentro del proceso. **Por lo tanto, no podrá proferir una sentencia en la que se pronuncie acerca de algo que no fue solicitado por las partes (extra petita) o en la que otorgue más de lo pedido (ultra petita), pero tampoco podrá fallar sin pronunciarse acerca de todas las pretensiones, pues de lo contrario deberá explicar de manera suficiente las razones por las cuales omitió referirse a algún pedimento. El principio de congruencia de la sentencia, además garantiza el oportuno uso del derecho de defensa por parte de las partes, puesto que les permite hacer uso de cada una de las herramientas establecidas en la ley para ello**⁴⁵.”* (Subrayado y negrilla fuera de texto)

En este orden de ideas, resulta incuestionable que el juez al momento de fallar no podrá desbordarse de las pretensiones propuestas. Es claro entonces que la sentencia que resuelve la demanda está sometida al principio de congruencia. Así las cosas, se evidencia a través de preceptos legales y jurisprudenciales que el Juez está en la obligación de garantizar el derecho de defensa y debido proceso dentro de las actuaciones judiciales, a las partes intervinientes en el proceso, en el sentido de no proferir sentencia sobre aspectos adiciones a los solicitados por las partes, o que no hayan sido solicitados. Teniendo en cuenta

⁴⁵ Sentencia T-455 de 2016, Corte Constitucional. Magistrado Ponente: ALEJANDRO LINARES CANTILLO.

todo lo previamente mencionado, ahora es necesario aterrizar la teoría al caso concreto. Se evidencia en el escrito del llamamiento en garantía no contiene pretensiones precisas y claras formuladas en contra de la compañía de seguros que represento, desconociendo lo estipulado en el artículo 65 del Código General del Proceso que indica que el llamamiento en garantía debe cumplir con los mismos requisitos de la demanda, consignados en el 82 del Código General del Proceso.

Así las cosas, y de la lectura de las pretensiones no se evidencia ninguna en la cual se solicite hacer efectiva las pólizas objeto del llamamiento en garantía, Razón por la cual, el Juez no podrá ordenar el pago de suma alguna en cabeza de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.. Lo anterior, por cuanto el llamante en el presente asunto, en ningún momento solicitó la afectación de la póliza de seguro que aquí nos ocupa.

En conclusión, se evidencia como en el presente asunto la parte no siguió los lineamientos dispuestos en el artículo 65 y 82 del Código General del Proceso para la presentación del llamamiento en garantía, pues ni siquiera planteó pretensiones en el escrito. Es por ello que, bajo el principio de congruencia, al juez no le es dable en el contenido de la sentencia ordenar la afectación de póliza alguna expedida por mi representada. Razón por la cual, el Juez no podrá pronunciarse o decidir más allá de lo consignado en las pretensiones de la demanda, y de la lectura de ellas, se denota que la parte llamante no solicitó la afectación de la Póliza en mención.

10. DISPONIBILIDAD DEL VALOR ASEGURADO

Conforme a lo dispuesto en el artículo 1111 del Código de Comercio, el valor asegurado se reducirá conforme a los siniestros presentados y a los pagos realizados por la aseguradora, por tanto, a medida que se presenten más reclamaciones por personas con igual o mayor derecho y respecto a los mismos hechos dicho valor se disminuirá en esos importes, siendo que en el evento que para la fecha de la sentencia se ha agotado totalmente el valor asegurado no habrá lugar a cobertura alguna.

11. GENÉRICA O INNOMINADA

En virtud del mandato contenido en el artículo 282 del CGP, solicito al Despacho declarar cualquier otra excepción que resulte probada en el curso del proceso, frente a la demanda, que se origine en la Ley o en el contrato que con el que se convocó a mi poderdante, incluida la de caducidad y la de prescripción de las acciones derivadas del contrato de seguro contemplada en el artículo 1081 del Código de Comercio.

CAPITULO III

MEDIOS DE PRUEBA

I. PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LOS MEDIOS DE PRUEBA DE LA PARTE DEMANDANTE

1. RATIFICACIÓN DE DOCUMENTOS.

El artículo 262 del Código General del Proceso faculta a las partes dentro de un proceso para que, si a bien lo tienen, soliciten la ratificación de los documentos provenientes de terceros aportados por la parte contraria. Vale la pena resaltar que esta disposición establece una clara consecuencia jurídica ante el evento en que una parte solicite la ratificación del documento y ello no se lleve a cabo:

“(…) Artículo 262. Documentos declarativos emanados de terceros. Los documentos privados de contenido declarativo emanados de terceros se apreciarán por el juez sin necesidad de ratificar su contenido, salvo que la parte contraria solicite su ratificación (…)”

Entonces, cabe resaltar que el Juez sólo podrá apreciar probatoriamente los documentos cuya ratificación se solicita si efectivamente esta se hace, como lo consagra el citado artículo. En tal virtud, solicito al despacho que no se les conceda valor alguno demostrativo a los documentos provenientes de terceros aportados por la parte demandante mientras esta no solicite y obtenga su ratificación, y entre ellos, de manera enunciativa enumero los siguientes:

- Certificado de ruta del vehículo de placa VBZ704 expedido por la Empresa de Transportes Santiago de Cali Alameda S.A.
- Cotización de cirugía estética que se debe realizar la señorita María Camila Angulo expedida el 25 de julio de 2019 por parte de la asesora Lizeth Rodríguez de CQBELLEZA.
- Declaración extrajudicial rendidas ante la Notaria Catorce del Círculo de Cali por parte de Ingrid Katherine Cucuñame Dicue.
- Declaración extrajudicial rendidas ante la Notaria Catorce del Círculo de Cali por parte de Pie Angerlo Cancino Angulo.
- Declaración extrajudicial rendidas ante la Notaria Catorce del Círculo de Cali por parte de Vivian de Los Angeles Renteria Ramirez.
- Declaración extrajudicial rendidas ante la Notaria Catorce del Círculo de Cali por parte de Diana Vanessa Angulo Franco.

2. OPOSICIÓN A OFICIOS

La parte actora dentro de su escrito de demanda solicita que se sirva oficiar a la Fiscalía 43 Local de Cali para que allegue al presente proceso el expediente del proceso penal de radicado No. 760016099165201886714.

Sin embargo, de acuerdo con el artículo 173 del Código General del Proceso *“(…) El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente”*. Por lo tanto, de acuerdo con los documentos obrantes dentro del plenario no existe ninguno que acredite que la parte haya intentado conseguir, mediante petición, la prueba solicitada. Por lo cual, el Despacho debe abstenerse de ordenar su práctica.

V. MEDIOS DE PRUEBA SOLICITADOS Y APORTADOS POR SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

Solicito respetuosamente se decreten como pruebas las siguientes:

A. DOCUMENTALES

1. Copia de la Póliza de responsabilidad civil extracontractual No. 1000114 con vigencia comprendida entre el 9 de febrero de 2018 a 1 de febrero de 2019
2. Copia del condicionado general No. 10122012-1322-P-06-RCE-300-321 aplicable a la póliza expedida por SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.

B. INTERROGATORIO DE PARTE.

1. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte a los demandantes mayores de edad los señores **DIANA VANESSA ANGULO FRANCO Y MARIA CAMILA ANGULO FRANCO**, a fin de que contesten el cuestionario que se les formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. Los demandantes podrán ser citados en la dirección de notificación relacionada en la demanda.
2. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **CARLOS ANDRÉS VANEGAS RIVEROS**, en su calidad de demandado, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandada podrá ser citado en la dirección de notificación relacionada en cada una de sus contestaciones.
3. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al señor **ALEJANDRO TORRES GIRALDO**, en su calidad de demandado, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandada podrá ser citado en la dirección de notificación relacionada en cada una de sus contestaciones.
4. Comedidamente solicito se cite para que absuelva interrogatorio de parte al representante legal de la **EMPRESA DE TRANSPORTES SANTIAGO DE CALI ALAMEDA S.A.**, en su calidad de demandado, a fin de que conteste el cuestionario que se le formulará frente a los hechos de la demanda, de la contestación y, en general, de todos los argumentos de hecho y de derecho expuestos en este litigio. La demandada podrá ser citado en la dirección de notificación relacionada en cada una de sus contestaciones.

C. DECLARACIÓN DE PARTE

Al tenor de lo preceptuado en el artículo 198 del Código General del Proceso, respetuosamente solicito ordenar la citación del representante legal de **SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.** para que sea interrogado por el suscrito, sobre los hechos referidos en la contestación de la demanda y especialmente, para exponer y aclarar los amparos, exclusiones, términos y condiciones de la Póliza.

D. TESTIMONIALES

1. Solicito respetuosamente se decrete el testimonio de la Doctora **DARLYN MARCELA MUÑOZ NIEVES** identificada con la C.C. No. 1.061.751.492 de Popayán, asesora externa de mi representada con el objeto de que se pronuncie sobre los hechos narrados en la demanda, así como de los fundamentos de derecho y de la Póliza de Seguro. Este testimonio se solicita igualmente para que deponga sobre las condiciones particulares y generales de la Póliza, sus exclusiones, deducibles y en general, sobre las excepciones propuestas frente a la demanda.

Este testimonio es conducente, pertinente y útil, ya que puede ilustrar al Despacho acerca de las características, condiciones, vigencia, coberturas, exclusiones, deducibles, etc., de los Contratos de Seguro objetos del presente litigio. La Doctora MUÑOZ podrá ser citada en carrera 32 Bis No. 4-16 de la ciudad de Popayán o en el correo electrónico darlingmarcela1@gmail.com o el número celular 3113888049

E. EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS.

Ruego se requiera al extremó activo, para que, con destino al presente proceso, remita en la oportunidad procesal pertinente, copia integra del acta de conciliación con fecha del 18 de junio de 2019 que se surtió dentro del proceso penal adelantado por la demandante ante el Juzgado 19 Penal Municipal con Función de Conocimiento en razón a estos mismos hechos y bajo número de noticia criminal 760016099165201886714.

Esta solicitud se formula teniendo en cuenta que la señora Diana Vanessa Angulo Franco hizo parte de dicho proceso penal en calidad de denunciante por lo tanto dicha documentación debe estar en su poder y es llamada a exhibirlos conforme regla el artículo 266 del C.G.P, además con esta documentación se pretende validar los hechos objeto de debate y las circunstancias contractuales que rodean la póliza de seguro expedida por mi representada, especialmente en lo relacionado a la prescripción de la acción que se deriva del contrato de seguro.

F. PRUEBA PERICIAL

En los términos del artículo 227 del Código General del Proceso anuncio que haré uso de la prueba pericial consistente en la reconstrucción de accidente de tránsito a fin de establecer las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo el accidente acaecido el 5 de diciembre de 2018 y apoyar la tesis sustentada en esta contestación. Anuncio el uso de esta prueba en los términos antes referidos, comoquiera que, el término de traslado es insuficiente para aportar un dictamen de esta categoría.

La prueba pericial es conducente, pertinente y útil por cuanto es funcional para verificar desde un punto de vista técnico, los hechos acaecidos el 5 de diciembre de 2018, donde se vieron involucrados la señora Diana Vanessa Angulo Franco como conductora de la motocicleta de placa FSW75E y el señor Carlos Andrés Vanegas Riveros como conductor del vehículo de placa VBZ704. Criterio técnico que permite acreditar la ocurrencia y causas del accidente a partir de una óptica científica en uso de la física y otras ciencias aplicadas que permiten reconstruir fielmente las situaciones e hipótesis que rodearon el accidente de tránsito el cual es objeto del litigio.

En virtud de lo anterior, respetuosamente solicito al despacho que se le conceda a mi representada un término no inferior a dos (2) meses con el fin de aportar dictamen pericial realizado por un perito experto en el tema, el anterior término se justifica teniendo en cuenta la complejidad de dicho dictamen, pues se hace necesario realizar un estudio minucioso a fin de lograr la reconstrucción requerida.

G. INTERVENCIÓN EN DOCUMENTALES Y TESTIMONIOS

Adicionalmente con el objeto de probar los hechos materia de las excepciones de mérito, nos reservamos el derecho de contradecir las pruebas documentales presentadas al proceso y participar en la práctica de las testimoniales que lleguen a ser decretadas, así como del correspondiente interrogatorio de parte e intervenir en las diligencias de ratificación y otras pruebas solicitadas.

De conformidad con lo expuesto, respetuosamente solicito al Honorable Juez proceder de conformidad.

CAPÍTULO IV

VI. ANEXOS

1. Todas las pruebas documentales relacionadas en el acápite de pruebas.
2. Certificado de existencia y representación legal de SBS SEGUROS COLOMBIA S.A. expedido por la Cámara de Comercio.
3. Poder general otorgado a través de la escritura pública y certificado de vigencia.

CAPÍTULO V

VII. NOTIFICACIONES

A la parte actora y su apoderado, en las direcciones consignadas en los escritos de demanda para tales fines. Por los demás demandados donde indiquen en sus respectivas contestaciones.

Por mi representada SBS SEGUROS COLOMBIA S.A.. recibirán notificaciones en la Av. Carrera 9 No. 101-67 piso 7, y al correo electrónico: notificaciones.sbseguros@sbseguros.co

Al suscrito en la Carrera Avenida 6 Bis No. 35N - 100 oficina 212 de Cali o en la dirección electrónica: notificaciones@gha.com.co

Atentamente,



GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA

C.C. N.º 19.395.114 de Bogotá

T.P. Ni 39.116 del C. S. de la J.